

América Latina en la vorágine de la crisis: Extractivismos y alternativas

Veltmeyer, Henry

Veröffentlichungsversion / Published Version

Monographie / monograph

Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit / provided in cooperation with:

transcript Verlag

Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:

Veltmeyer, H. (2022). *América Latina en la vorágine de la crisis: Extractivismos y alternativas*. (Afrontar las crisis desde América Latina). Bielefeld: Bielefeld University Press. <https://doi.org/10.14361/9783839459078>

Nutzungsbedingungen:

Dieser Text wird unter einer CC BY-ND Lizenz (Namensnennung-Keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu den CC-Lizenzen finden Sie hier:
<https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.de>

Terms of use:

This document is made available under a CC BY-ND Licence (Attribution-NoDerivatives). For more Information see:
<https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0>

HENRY VELTMEYER

América Latina en la vorágine de la crisis

Extractivismos y alternativas

 **CALAS**
MARIA SIBYLLA MERIAN CENTER



Este trabajo está autorizado bajo la licencia Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 (BY-ND), lo que significa que el texto puede ser compartido y redistribuido, siempre que el crédito sea otorgado al autor, pero no puede ser mezclado, transformado o construido sobre él. Para más detalles consúltese <http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/>.

Para crear una adaptación, traducción o derivado del trabajo original, se necesita un permiso adicional y puede ser adquirido contactando calas-publicaciones@uni-bielefeld.de.

Los términos de la licencia Creative Commons para reuso no aplican para cualquier contenido (como gráficas, figuras, fotos, extractos, etc.) que no sea original de la publicación Open Access y puede ser necesario un permiso adicional del titular de los derechos. La obligación de investigar y aclarar permisos está solamente con el equipo que reusa el material.

HENRY VELTMAYER

América Latina en la vorágine de la crisis

Extractivismos y alternativas





Universidad de Guadalajara

Ricardo Villanueva Lomelí
Rectoría General

Héctor Raúl Solís Gadea
Vicerrectoría Ejecutiva

Guillermo Arturo Gómez Mata
Secretaría General

Juan Manuel Durán Juárez
**Rectoría del Centro Universitario
de Ciencias Sociales y Humanidades**

Sayri Karp Mitastein
Dirección de la Editorial

Primera edición, 2021

Autor
©Henry Veltmeyer

Published 2022 by



An Imprint of transcript Verlag
<http://www.bielefeld-university-press.de>

Printed by Majuskel Medienproduktion GmbH,
Wetzlar
Print-ISBN 978-3-8376-5907-8
PDF-ISBN 978-3-8394-5907-2
<https://doi.org/10.14361/9783839459078>

Impreso y hecho en Alemania
Printed and made in Germany



**Centro María Sibylla Merian
de Estudios Latinoamericanos Avanzados
en Humanidades y Ciencias Sociales**

Sarah Corona Berkin
Olaf Kaltmeier
Dirección

Gerardo Gutiérrez Cham
Hans-Jürgen Burchardt
Codirección

Martin Breuer
Coordinación de Publicaciones

www.calas.lat

Gracias al apoyo de



Federal Ministry
of Education
and Research

En colaboración con



**UNSAM
EDITA**



CALAS. Afrontar las crisis desde América Latina

Este libro forma parte de los ensayos concebidos desde la investigación interdisciplinaria que se lleva a cabo en el Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS), donde tratamos de fomentar el gran reto de analizar aspectos críticos sobre los procesos de cambios sociales. CALAS ha sido concebido como una red afín a la perspectiva de los Centros de Estudios Avanzados establecidos en distintas universidades del mundo y busca consolidarse como núcleo científico que promueve el desarrollo y la difusión de conocimientos sobre América Latina y sus interacciones globales. CALAS funciona en red, la sede principal, ubicada en la Universidad de Guadalajara (México), y las subse-des ubicadas en la Universidad de Costa Rica, Flacso Ecuador y Universidad Nacional de General San Martín en Argentina. Las instituciones latinoamericanas sedes están asociadas con cuatro universidades alemanas: Bielefeld, Kassel, Hannover y Jena; esta asociación fue impulsada por un generoso apoyo del Ministerio Federal de Educación e Investigación en Alemania.

La relevancia de estos libros, enfocados en el análisis de problemas sociales, trasciende linderos académicos. Se trata de aumentar la reflexión crítica sobre los conflictos más acuciantes en América Latina, como una contribución de primer orden para generar diálogos desde múltiples disciplinas y puntos de vista. Más allá de esto, el objetivo de estas publicaciones es buscar caminos para afrontar las múltiples crisis.

Como reconocidos analistas en sus respectivos campos de investigación, los autores nos invitan a ser copartícipes de sus reflexiones y a multiplicar los efectos de sus propuestas, a partir de su lectura.

Sarah Corona Berkin y Olaf Kaltmeier
Directores

Gerardo Gutiérrez Cham y Hans-Jürgen Burchardt
Codirectores

Índice

Introducción	9
---------------------	----------

Capítulo 1. Las contradicciones del desarrollo capitalista	17
---	-----------

El desarrollo capitalista	18
De la crisis financiera global a una crisis sistémica de múltiples dimensiones	23
La anatomía de una crisis sistémica	24
La coyuntura actual de crisis en América Latina	29
Conclusión	33

Capítulo 2. La nueva geoeconomía del capital	35
---	-----------

Extractivismo en la era colonial	38
El desarrollo capitalista en la época neoliberal: sus dinámicas en tres ciclos	40
La nueva geoeconomía de capital	41
La geoeconomía del capital extractivo	45
La nueva geopolítica del capital	49
Reparto del botín: la plusvalía y la renta de recursos	52
Conclusión	56

Capítulo 3. El ciclo progresista: la geopolítica del capital extractivo	58
--	-----------

Dinámica política del desarrollo capitalista	59
Neodesarrollismo	64

El socialismo del siglo XXI	68
Buen vivir y las paradojas del desarrollo	71
La política del extractivismo: los límites del progresismo	76
Capítulo 4. Extractivismo y la cuestión agraria	77
<hr/>	
Extractivismo como modalidad de acumulación y desarrollo	78
Agricultura para el desarrollo: la cuestión agraria	80
Acaparamiento como mecanismo de acceso y despojo	81
La agroextracción y el agronegocio	85
Dinámicas de la agricultura industrial	86
La agropecuaria y el neoextractivismo	89
Conclusión	90
Capítulo 5. Sangre de extracción: del infierno subterráneo al cielo abierto	92
<hr/>	
El contexto histórico	92
Del imperialismo y colonialismo al capitalismo extractivista	97
La megaminería en el caso de México	98
La extracción de hidrocarburos en Bolivia y Ecuador	103
Conclusión	110
Capítulo 6. Resistencias y alternativas	112
<hr/>	
Dinámica de las resistencias	114
Desarrollo alternativo o alternativas al desarrollo	126
Conclusión	130
Reflexiones finales	133
<hr/>	
Bibliografía	143
<hr/>	
Autor	162
<hr/>	

Introducción

El capitalismo es un sistema en crisis. Esta obviedad se proyecta en las dinámicas de desarrollo y en las fuerzas de cambio, que han dominado el panorama económico y político de América Latina a lo largo de las últimas décadas. Un estudio de estas dinámicas, aunque somero, devela una clara propensión del capitalismo —un sistema basado en la explotación del trabajo (el secreto interno del modo de producción capitalista) operativo en América Latina como en otros lugares del mundo— hacia una crisis sistémica y multidimensional, que ha asumido proporciones globales e incluso planetarias. Esta propensión del sistema hacia la crisis, se evidencia a partir de las fuerzas que se han desarrollado y continúan desarrollándose en la región, desde la implantación del neoliberalismo en la década de 1980. Se podría argumentar que América Latina ha sido, y sigue siendo, el epicentro de la crisis —una crisis global con múltiples dimensiones que pone en cuestionamiento y riesgo no sólo el proceso de desarrollo de la humanidad y la civilización, sino la capacidad misma del planeta para sostener la vida. Un factor importante, aunque no necesariamente decisivo, en esta crisis es el saqueo de los recursos naturales, que ha sido una constante en la historia social, económica, cultural, política y ecológica de América Latina desde la época colonial. El extractivismo, como una modalidad específica de explotación y desarrollo de las fuerzas productivas, experimenta diversas mutaciones y continuidades estructurales y políticas con el proyecto de colonialidad y dependencia, desde el siglo xvi hasta nuestros días.

Las diversas permutaciones de la crisis tienen sus orígenes en las contradicciones del sistema capitalista y el extractivismo. Esto es evi-

dente puesto a la luz de las condiciones causadas por el calentamiento del planeta (debido a la emisión de gases de efecto invernadero) y ahora el impacto explosivo de la pandemia de covid-19; se han desnudado y expuesto las contradicciones y grietas fundamentales del sistema, que alcanzan sus cimientos amenazando no sólo el proceso de desarrollo, sino la vida misma, tanto humana como no humana.

Es posible rastrear la propensión a la crisis en América Latina desde por lo menos la década de los setenta, con una crisis sistémica de sobreproducción que condujo a una década de reformas liberales. Sin embargo, la llegada de la era neoliberal en la década de los ochenta conllevó no sólo nuevas permutaciones de esta crisis, sino una crisis fiscal de muchos Estados del norte global y una deuda impagable en la periferia del sistema con epicentro en América Latina. La construcción, en la década de 1980, de un nuevo orden mundial de la globalización neoliberal, sustentado en los principios del capitalismo de “libre mercado”, ha tenido un impacto devastador en la región, dando paso a la destrucción de fuerzas productivas acumuladas en la industria y en la agricultura; esta última siempre ha sido la principal fuente de desarrollo capitalista en la región. Otro impacto fue la liberación de flujos de capital en la forma de inversión extranjera directa (IED); una afluencia de capital que en mayor medida tomó la forma de inversiones en la extracción de recursos naturales, como hidrocarburos (petróleo y gas), minerales y metales, y productos de agroextracción. Estos extractivismos incluyen la exportación de recursos naturales, de forma primaria, para capturar el excedente resultante de la demanda de estos recursos en los mercados capitalistas. Junto con este avance del capital extractivo en el proceso de desarrollo, es decir, el extractivismo, América Latina ha experimentado en la era neoliberal un gran avance del capital financiero (inversiones en acciones e instrumentos financieros) y ficticio (basado en la especulación en lugar de inversiones productivas), con una financiarización¹ asociada con

¹ La financiarización es un término utilizado en discusiones sobre el capitalismo financiero, que se ha desarrollado durante las últimas décadas, en el cual el apalancamiento ha tendido a sobrepasar el capital y los mercados financieros han tendido a dominar sobre la economía industrial y agrícola.

el proceso, la que resultó en una propensión a la crisis (1995 en México, 1998 en Brasil) y el desenlace de una crisis alimentaria (2007, 2008 y 2010), acompañada de altos precios de los alimentos en los mercados, que incrementaron la incidencia y el grado de pobreza; así como una acuciante desigualdad en el acceso a los recursos vitales y la distribución social del ingreso nacional.

A la par de la crisis asociada con los impactos destructivos de la agenda neoliberal, que exacerbó las condiciones de pobreza y desigualdad en la región, emergieron nuevos movimientos sociales, organizados para movilizar a las fuerzas de la resistencia. En esta perspectiva, América Latina se vio sacudida, en el curso de las últimas dos décadas, por los impactos de una triple crisis. La primera crisis, causada por los avances de capital extractivo en la región, provocó una fuerte resistencia y la movilización de las comunidades locales en la frontera extractiva contra los impactos socioambientales del extractivismo, que han profundizado la degradación física y humana del planeta. La segunda crisis global se entrelaza con la anterior y es el resultado de las emisiones de gases de efecto invernadero y el calentamiento global. Finalmente, desde enero de 2020, la pandemia del covid-19 ha causado una tercera crisis de proporciones globales, en circunstancias que exhiben y ponen en entredicho las contradicciones fundamentales del sistema capitalista. La coincidencia, confluencia e interacción de estas tres crisis para América Latina ha creado un nuevo contexto o escenario para el desarrollo de las fuerzas productivas y la búsqueda de alternativas.

Este libro tiene un doble propósito. Uno es reconstruir las fuerzas dinámicas de la crisis en el contexto latinoamericano y la coyuntura actual del proceso de desarrollo capitalista. El segundo es dejar en claro que una crisis, cualquiera que esta sea, representa una oportunidad que debilita las estructuras rígidas y restrictivas, la cual abre paso a fuerzas de cambio y transformación, y, aún más importante, señala el camino más viable hacia la crisis sistémica del capitalismo, permitiéndonos emprender el camino hacia un futuro mejor, otro mundo. Esta problemática de cómo salir de la crisis es muy complicada, y requiere un diagnóstico y un análisis exhaustivo y crítico de las condiciones objetivas y subjetivas, así

como también de la correlación de las fuerzas del desarrollo capitalista y de la resistencia que están en juego. En el camino se encontraron con muchos obstáculos e incertidumbres, pero también con elementos de debate que pueden ayudar a avanzar en el camino. El argumento sobre esta problemática está organizado de la siguiente manera.

En el capítulo 1, se delinea el contexto general de este proceso de desarrollo y la propensión del sistema a una crisis de proporciones y alcances globales. En la primera parte, se reconstruyen las contradicciones del sistema, que llevan a la crisis antes de discutir su dinámica multidimensional en el contexto global y regional. En la segunda parte, se describen las pautas generales del proceso de crecimiento capitalista en América Latina en el contexto del Estado desarrollista (décadas de 1950 a 1970) y el establecimiento de un “nuevo orden mundial”, a partir de la década de 1980. Dicho orden fue signado por la globalización neoliberal, con el propósito de inaugurar una nueva época en la que se liberalizaron fuerzas de la “libertad económica”; es decir, se instaló el capitalismo de libre mercado. Se reconstruyó este proceso en la forma y los términos de tres ciclos de desarrollo y resistencia. En este capítulo se plantea el argumento de que, para posibilitar una salida a la crisis, es fundamental que se tengan en cuenta y se sepa cómo responder a las fuerzas de cambio movilizadas en estos ciclos. Todas y cada una de las crisis despiertan fuerzas de cambio, que pueden trasladarse en varias direcciones con acciones bien informadas y oportunas. Lo fundamental es que el sistema no colapsará bajo el peso de sus contradicciones. La salida y el camino hacia un mundo mejor requiere la movilización y unificación de las diversas fuerzas de resistencia a los avances del capitalismo en el proceso de desarrollo. También se sostiene la necesidad de medir el equilibrio en la correlación de fuerzas, para permitir que los actores o sujetos aprovechen las oportunidades que se les presentan.

En el capítulo 2, se plantean los avances del capital extractivo, dentro del marco institucional y político del nuevo orden mundial de globalización neoliberal, establecido en la década de 1980. Se analiza la estructura sectorial de los flujos de capital hacia la región y constato la tendencia a favor del capital extractivo, que resultó en el fortalecimiento de la división internacional del trabajo en forma de un centro con sus

periferias, en la que se asignó el rol a América Latina de exportar recursos naturales al centro del sistema; recursos por los que los mercados capitalistas tenían una gran demanda. Se sostiene que, sin entender las fuerzas de desarrollo y la resistencia formadas en este contexto —la nueva geoeconomía del capital en América Latina—, no hay salida.

El capítulo 3 aborda la dimensión política de este proceso de formación y el avance de capital extractivo en la región. Se destaca la constitución de un ciclo progresista en la política: una serie de gobiernos orientados a la búsqueda de una forma más inclusiva de desarrollo capitalista o, para ser preciso, el posdesarrollo (con base en la conciencia del pueblo de su poder: el poder de conocimiento y actuar colectivamente sobre esto).² Este ciclo se formó en condiciones de una reconfiguración del poder en la economía y el mercado mundial, así como también en un desencanto general con el neoliberalismo, como doctrina económica y modelo para orientar las políticas macroeconómicas. Ante estas condiciones, se atestigua un cambio en la política electoral: una marea rosa de gobiernos progresistas, que buscan una alternativa al modelo neoliberal. En algunos casos, estos gobiernos promovieron un “nuevo desarrollismo” (Bresser 2007); en otros, una “ucronía del buen vivir” —de vivir bien en solidaridad y armonía con la naturaleza (Ramírez 2010)—; y en algunos otros casos, el “socialismo comunitario” o el “socialismo del siglo XXI” (García 2015). Se analizan las contradicciones y el alcance de estas alternativas para poder calcular las posibilidades de escapar al impacto de las discrepancias del sistema, y los límites de estas posibilidades. En cualquier caso, este problema sigue siendo objeto de debate.

En el capítulo 4 se analiza el rol de la agricultura en el proceso de desarrollo capitalista. Aquí se discute la normalidad del desarrollo del capital industrial sobre la base de la explotación de la fuerza laboral

² Eduardo Gudynas entiende el posdesarrollo como crítica y el buen vivir como solución, pero, según los teóricos del posdesarrollo, la transformación social requiere solucionar un *impasse* teórico: combinar la teoría (conciencia de las contradicciones del capitalismo/conciencia del “poder del conocimiento”) con una práctica social; y esto requiere desconstruir el conocimiento y construir una sociedad más allá del capitalismo (Escobar 1992; Kothari *et al.* 2019).

creada por el desarrollo de la agricultura, lo cual da como resultado lo que se ha llamado “la cuestión agraria” en cuanto la desaparición del campesinado —de los campesinos desprovistos de sus medios de producción, empobrecidos y convertidos en un proletariado, una clase de trabajadores asalariados.

Esta cuestión agraria del siglo xx se debatió en la década de 1970 y nuevamente en 2012, ambas veces en México. Resulta que, en la realidad, en los años ochenta y noventa no se suscitó una desaparición del campesinado. Lo que atestiguamos fue la desaparición del proletariado industrial y la formación de un semiproletariado de trabajadores rurales sin tierra y de aquellos que trabajaban por su cuenta en el sector informal de la economía urbana, incluidos los microempresarios, muchos de los cuales son mujeres. En todo caso, con el avance del capital extractivo en el proceso de desarrollo en el siglo xxi,³ la cuestión agraria pasó a ser la cuestión de la persistencia de la pobreza rural en la frontera extractiva en condiciones de concentración de la propiedad y tenencia de la tierra, la creciente orientación del aparato de producción hacia la exportación, y un nuevo cercado del buen común por el mecanismo del acaparamiento, que obligó a muchos agricultores pequeños migrar y abandonar el campo y la agricultura.

Para comprender la transformación productiva y social provocada por el avance del capital industrial y extractivo en el campo, es vital que comprendamos de mejor manera el rol tradicional de la agricultura y los campesinos en el proceso de desarrollo. También es fundamental que entendamos cómo el advenimiento del nuevo orden mundial coincidió con o resultó en un contexto completamente nuevo para el desarrollo capitalista y la resistencia. En lugar de promover y fortalecer un proceso de industrialización y modernización en la región, el desarrollo capitalista de

³ La dinámica dominante en el sector financiero, en las dos primeras décadas del siglo xxi, ha sido la inversión de capital extranjero en la extracción de recursos naturales, como los hidrocarburos. Pero, al mismo tiempo, pudimos ver el dinamismo de las microfinanzas, que ahora representa hasta 20% de las acciones bancarias —significativamente más que en cualquier otro país. Para un análisis de esta dinámica y sus contradicciones (las microfinanzas han servido para enriquecer a algunos banqueros a expensas de los pobres), véase a Bateman (2020).

la agricultura provocó dos hechos: un influjo de capital extractivo (capital invertido en la extracción de recursos naturales a propósito de exportarlas en forma primaria), y la formación de trabajadores rurales sin tierra. La relevancia e importancia de esto es que se generó una nueva dinámica en condiciones de desarrollo capitalista en la agricultura (dinámica asociada con la interacción de la agroindustria con la agroextracción), así como también de resistencia y lucha liderada por campesinos, agricultores y comunidades de pequeños productores localizados en la frontera extractiva. El capítulo analiza esta nueva dinámica, en el contexto de la interacción de las mecánicas asociadas con el avance del capital extractivo, con el predominio de capital monopolista en el sector agrícola. El monopolio se manifiesta en la concentración de capital, invertido en el desarrollo de conocimiento científico e innovación técnica como fuerza productiva.

El capítulo 5 aborda la cuestión de la dinámica del extractivismo en el sector clásico de la minería —la gran minería. El extractivismo, o extractivismos según Gudynas, tiene una larga historia en este sector: una historia de explotación y riqueza arraigado en la Conquista y el colonialismo europeo, además de una lucha de quinientos años por parte de los pueblos indígenas contra las depredaciones y estragos asociadas con el extractivismo: el saqueo de los recursos naturales, la explotación de la fuerza laboral, la subyugación, la opresión y la expropiación de territorios con violencia y normas legales, sin mencionar el asesinato de activistas y líderes, así como el genocidio (Maybury 2002).⁴ El capítulo ofrece una visión general de la historia de la extracción minera, con énfasis en la economía política de la minería en el contexto actual y la frontera de una crisis del recurso hídrico en el mundo.⁵ Se trata de las

⁴ Según Maybury (2002), la colonización en el contexto del extractivismo imperialista era “intrínsecamente genocida”. A su juicio, las formas imperiales y coloniales de genocidio se promulgan de dos maneras principales, ya sea mediante la limpieza deliberada de los territorios de sus habitantes originales con el objetivo de hacerlos explotables con fines de extracción de recursos o asentamientos coloniales, o mediante el alistamiento de los pueblos indígenas como trabajadores forzosos en proyectos coloniales o imperialistas de extracción de recursos.

⁵ A lo largo del siglo xx, la lucha de clase en el campo se centraba en la expropiación y el acaparamiento de la tierra, separando así los productores pequeños en la agri-

dinámicas de desarrollo en la minería, sus impactos socioambientales y las fuerzas de resistencia movilizadas en las economías de enclave, formadas en la extracción de minerales y metales a propósito de exportarlas a los mercados capitalistas. En lugar de ofrecer una solución a la crisis, se debate sobre el tema.

En el capítulo 6 se pasa de la cuestión del desarrollo a la cuestión de la resistencia generada y construida en la frontera extractiva. Esta resistencia adquiere y asume diversas formas, lo que complejiza el análisis de su dinámica. En cualquier caso, se identifican tres modalidades de resistencia con una potencialidad transformativa. Uno tiene que ver con la resistencia de izquierda de la clase política, asociada con la búsqueda de una alternativa al modelo neoliberal en la macroeconomía. Se identifican tres alternativas en este contexto: desarrollo inclusivo o nuevo desarrollo enfocado en la reducción de la pobreza; un modelo construido sobre la base de una concepción indígena de cómo vivir bien en solidaridad y armonía con la naturaleza; y el socialismo del siglo XXI. La segunda forma de resistencia tiene que ver con el activismo de las comunidades que están en la frontera extractiva. Este activismo y las fuerzas de resistencia se manifiestan en la exigencia de que se respeten los derechos territoriales de las comunidades, y en confrontaciones violentas con empresas del sector extractivo en protesta por los impactos destructivos de sus proyectos y operaciones extractivas, con respecto a la sostenibilidad de su forma de vida y del entorno. La tercera modalidad de resistencia tiene que ver con la búsqueda de alternativas.

cultura de sus medios de producción. En contraste, en el siglo XXI la lucha en contra de los avances de capital extractivo está concentrado en la privatización y el acaparamiento de las aguas, lo que ha causado más que una crisis en la minería, una crisis global del recurso hídrico (agua) en el mundo. En el caso de México, la privatización y el acaparamiento del recurso hídrico desde 1992 ha avanzado a tal punto que hasta 30% de hogares padece a diario cortes o tanteo de su derecho al agua y saneamiento; mientras sólo 1.1% de la población que incluye “los dueños del país” (el núcleo de la clase capitalista: los millonarios del agua), concentra una quinta parte del recurso para fines lucrativos (Olvera 2020).

Capítulo 1.

Las contradicciones del desarrollo capitalista

Los avances del capital extractivo en el proceso de desarrollo capitalista en las dos décadas del nuevo milenio, junto a la grave crisis social por la que atraviesa América Latina y las crisis ambientales, como el cambio climático y la pandemia de coronavirus, han puesto de relieve la propensión sistémica del capitalismo hacia la crisis. Esto ha puesto al desnudo las contradicciones y limitaciones estructurales del sistema a escala mundial. La pandemia del covid-19, por encima de las contradicciones del “capitalismo catastrófico” (la crisis social, económica y ecológica), ha evidenciado y agudizado las profundas contradicciones del sistema y la crisis multidimensional en la que estamos inmersos. La llegada al poder de dos políticos en la región, Jair Bolsonaro en Brasil (de extrema derecha) y Andrés Manuel López Obrador en México (de la centroizquierda de la clase política), en el contexto de una amplia difusión del virus, ha puesto de manifiesto cómo la pandemia interactúa con crisis preexistentes y exacerba las condiciones que resultan de ellas. El gobierno federal, en ambos casos, parece hacer todo lo posible para sabotear las medidas recomendadas por la salud pública y adoptadas por los gobiernos subnacionales (estados y municipios). Al momento, sin detalles o datos precisos, es evidente que la situación va de mal a lo peor.

La intención de este capítulo es analizar la dinámica de la crisis por la que atraviesa el sistema capitalista, en un contexto regional específico: América Latina. Es posible argumentar que esta región ha vivido de manera particularmente aguda las contradicciones del sistema, además de que puede ser considerada como un laboratorio de experiencias con-

trahegemónicas, a partir de la presencia de fuerzas que se resisten a los avances del capital y de experimentos con modelos alternativos.

Este capítulo pretende reconstruir, en líneas generales, la dinámica de esta tendencia sistémica en la coyuntura actual. El argumento central es que las formas diversas y cambiantes de una crisis sistémica se remontan a las fuerzas de cambio, asociadas con la transición de un periodo de desarrollo, dirigido por el Estado, a la era neoliberal. Es decir, un periodo de capitalismo de libre mercado, dominado por la expansión del capital financiero, la financiarización de la economía en la periferia del sistema y el avance de capital extractivo en el proceso de desarrollo. Este avance ha liberado y ha dado forma a fuerzas de cambio que se han movilizadas, exponiendo, en el proceso, fisuras y contradicciones que están empujando al sistema hacia sus límites y más allá. Queda por ver si las fuerzas de resistencia a los avances del capital financiero y extractivista son lo suficiente para generar un proceso contrahegemónico, o si apuntan en la dirección de una distopía ante la crisis sistémica en curso.

En este capítulo se presentan las dinámicas fundamentales de este proceso en la región. El argumento se construye de la siguiente manera. En primer lugar, se establecen las contradicciones que definen al sistema y promueven una propensión a la crisis. En segundo lugar, se identifican los ciclos de desarrollo y resistencia que resultan de estas dinámicas. Finalmente, se analizan en general la dinámica de la nueva geoeconomía y geopolítica del capital extractivo en la región, se destacan sus impactos socioambientales y las alternativas que se han presentado ante el extractivismo en sus distintas formas.

El desarrollo capitalista⁶

Una de las tendencias fundamentales del desarrollo en América Latina, formada dentro del marco institucional y político del “nuevo orden

⁶ En este libro, los términos *capitalismo* y *desarrollo* pueden ser considerados casi sinónimos. El concepto de desarrollo implica no sólo un *proyecto* (de mejorar la

mundial” de la globalización neoliberal en la década de 1980, ha sido el resurgimiento de una estrategia de desarrollo basada en el extractivismo, es decir, la extracción de recursos naturales y la exportación de estos recursos en forma primaria.⁷ Nada define tan claramente una estrategia extractivista como la noción de “contradicción”, un concepto vital para una comprensión de las dinámicas del desarrollo capitalista (Harvey 2014). Los teóricos marxistas a lo largo de los años se han centrado en dos contradicciones del desarrollo capitalista, a saber: 1) la relación capital-trabajo, que da lugar a una lucha de clases por mejores condiciones de trabajo y, en algunas circunstancias, el control social de los medios de producción, una lucha que dominó el panorama político en el siglo xx; y 2) la contradicción centro-periferia del sistema capitalista mundial, que se manifiesta en la dinámica de dependencia y desarrollo desigual en la periferia del sistema mundial. Aparte de estas contradicciones, un análisis de la dinámica asociada con el avance de capital extractivo ha expuesto una contradicción fundamental minimizada, o casi ignorada por los marxistas: una oposición entre la dinámica de acumulación de capital y los fundamentos ecológicos del proceso de desarrollo (Foster 2002; Martínez 2002).⁸

En el contexto del desarrollo capitalista en la era de la globalización neoliberal, la interacción de las fuerzas generadas por la intersección de estas contradicciones, ha dado lugar a una crisis multidimensional de

condición social de la población), sino un *proceso*, que se refiere al sistema utilizado para el desarrollo de las fuerzas de la producción. De ahí se desprende el concepto central para esta investigación: desarrollo capitalista o simplemente desarrollo.

⁷ Sobre el concepto de extractivismo y los debates en el contexto latinoamericano, véase Gudynas (2015) y Svampa (2019). La estrategia extractivista dominó la política pública de los gobiernos latinoamericanos durante todo el periodo del dominio colonial, desde el siglo xv hasta el xix, pero la estrategia en ese momento se basaba en la explotación imperialista o el pillaje y saqueo más que en el capitalismo. Esta estrategia se llama “el extractivismo imperialista”. El extractivismo también definió la estrategia macroeconómica, que siguieron los gobiernos latinoamericanos, o les impusieron, en la época posterior del capitalismo industrial, que Lenin denominó como “imperialismo, la fase más avanzada de capitalismo”.

⁸ Estas son las tres contradicciones que se analizan en este trabajo, aunque Harvey (2014) considera que hay hasta diecisiete del sistema capitalista.

proporciones globales y potencialmente catastróficas.⁹ La primera manifestación de esta propensión a una crisis sistémica, fue a principios de la década de 1970, la que puso fin a un periodo de crecimiento económico, sostenido por los avances de la clase trabajadora en términos de mejoras en los salarios y las condiciones de trabajo. Estos avances resultaron en el establecimiento de un pacto social entre el capital y el trabajo, en el que el último participa y se beneficia de cada avance en el crecimiento de la productividad. La “década de oro del capitalismo” (los veinte “años gloriosos” de crecimiento económico en el periodo de posguerra), terminó en una crisis de sobreproducción en todo el sistema. Esto tomó forma de un descenso en el ritmo de la tasa de la productividad, combinado con la *stagflation* (una combinación de alto desempleo y un aumento disparado de los precios de las mercancías), que a su vez redujo la capacidad de consumo de la clase trabajadora, acentuando así la crisis.

En la década de 1970, vimos una serie de acciones estratégicas y cambios estructurales, asociados con la búsqueda de una salida a la crisis. Esto incluyó el abandono por el capital del pacto social con la clase trabajadora (el acuerdo capital-trabajo), y una serie de medidas adoptadas a nivel de política pública; es decir, a través de la reconfiguración de las fuerzas de clase dentro del Estado, que se tradujo en la formulación de políticas destinadas a reducir la participación de la mano de obra en el producto social (ingresos nacionales). Esta estrategia, la cual constituyó el arma principal utilizada por el capital en su guerra contra la clase obrera, buscaba revertir los avances de la clase trabajadora a lo largo de tres décadas de lucha (Crouch y Pizzorno 1978; Davis 1984).

Estas acciones, según algunos relatos, que en la década de 1980 habían asumido la forma de una “contrarrevolución conservadora” a los avances incrementales logrados por la clase trabajadora a lo largo de varias décadas (Rapley 1996), tuvieron cierto éxito, en el sentido de que (al

⁹ Existe una abundante literatura sobre las dimensiones económicas y ecológicas de la crisis global del sistema, pero Edgardo Lander (profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela), con referencia al proceso del desarrollo capitalista en América Latina, habla también de una “crisis terminal civilizatoria de la modernidad colonial” (Lander 2019).

menos en algunos relatos) durante la década dieron lugar a una disminución relativa de la participación de la fuerza de trabajo en los ingresos nacionales —10% en el caso de la mano de obra estadounidense, y hasta 50% o más en el caso de los trabajadores de la periferia latinoamericana del sistema.

Otra estrategia para enfrentar la crisis de la década de 1970, fue la redistribución de la renta nacional a favor del capital (con la idea de que este iba a invertirla en negocios productivos). Como un contrapeso a esta medida y para sofocar el fermento revolucionario que se gestaba entre la clase trabajadora, los gobiernos en los estados capitalistas avanzados implementaron una serie de reformas sociales orientadas al bienestar, que tuvieron éxito pero a costo de alimentar otra crisis: una fiscal, que a su vez generaba condiciones políticas para una “contrarrevolución conservadora”, la cual se concretó en medidas encaminadas a solucionar la crisis fiscal atribuida al excesivo poder de mano de trabajo sindicalizado, y a los altos costos de las políticas de bienestar social. Otros resultados de la revolución neoconservadora, fueron el avance de los partidos conservadores en la política electoral (con una política de reducir el déficit de la cuenta pública) y el control de la clase capitalista del aparato estatal, que fue puesto al servicio del capital.

A nivel global, las medidas que se tomaron para enfrentar la crisis de sobreacumulación en la década de 1970 incluyen:

1. La estrategia de las empresas multinacionales de desvincular sus operaciones industriales intensivas en mano de obra, para reubicarse más cerca de fuentes de mano de obra más baratas, lo que llevó a una “nueva división internacional del trabajo” (Fröbel, Heinrichs y Kreye 1980).
2. La implementación de nuevas tecnologías posfordista, destinadas a reducir los costos laborales de la producción industrial, aumentando la flexibilidad laboral y permitiendo así a los patrones y la administración toda la libertad para contratar, despedir y utilizar la fuerza de trabajo de acuerdo con sus necesidades prácticas (Lipietz 1987).
3. La introducción de innovaciones tecnológicas, diseñadas para aumentar la productividad de la fuerza de trabajo (progreso tecno-

lógico) —lo que Marx consideró “el camino revolucionario” hacia el desarrollo capitalista, pero que muchos historiadores ven como una cuarta revolución industrial. Esto implicó la conversión tecnológica del aparato productivo mundial, lo que llevó a la CEPAL a pensar en una “transformación productiva” (CEPAL 1996).

En este contexto de crisis, se podría argumentar que toda acción estratégica y cambio estructural contribuyó al avance del capitalismo. Aun así, parece que la combinación de política y otras medidas adoptadas no aumentó la productividad laboral en general, ni compensó la propensión a las crisis. Esto requeriría una serie de “reformas estructurales” en la política neoliberal —globalización, privatización, desregulación, liberalización del flujo de comercio y capital—, mismas que se implementaron en la década de 1980 en el contexto de un nuevo orden mundial, construido para liberar las “fuerzas de la libertad económica” (el mercado, la empresa privada y la libre circulación de capitales) de las restricciones regulatorias del Estado.

De acuerdo con Bello (2009), el nuevo orden mundial liberará una gran afluencia de capital, tanto en forma de IED como en la expansión de mercados de compraventa de instrumentos financieros, desencadenando así un proceso de financiarización, es decir, flujos de capital ficticios y transacciones que superan con creces el valor de la producción y el comercio mundiales. Sólo un mercado, el de Londres, para especulación sobre el valor de las monedas nacionales, representó en un día un manejo de capital veinte veces mayor que el valor anual del comercio mundial. Según Bello, algunos economistas vieron este proceso de *financiarización* como otra vía de escape de la propensión a la *crisis*. Con los bajos rendimientos en la inversión de capital en la industria y la agricultura, debido al exceso de capacidad, se reinvirtieron grandes cantidades de fondos excedentes en el sector financiero, que “se revirtió en sí mismo” con el resultado contradictorio de aumentar dramáticamente la brecha creciente entre una economía financiera hiperactiva y la economía real, lo que ha llevado a una mayor propensión a la crisis o, en los términos empleados por Bello, a una “implosión financiera” (véase también Amin 2013).

De la crisis financiera global a una crisis sistémica de múltiples dimensiones

Uno de los resultados de las “reformas estructurales”, implementadas en la década de 1980 bajo el marco institucional del nuevo orden mundial, fue la destrucción de las fuerzas de producción acumuladas en la agricultura y la industria en las periferias del sistema, a lo largo de tres décadas de desarrollo gestionado por el Estado. Otros resultados incluyeron “una década perdida para el desarrollo” (cero crecimientos económicos) en las periferias latinoamericanas, y en la década de 1990 una afluencia masiva de capital, en forma de IED a gran escala, en la adquisición de tierras —acaparamiento de tierras (y, en el contexto de la agricultura y en particular la minería de cielo abierto, el agua), en el discurso de estudios agrarios críticos— y la extracción de recursos naturales, con el propósito de exportarlos en forma primaria (para satisfacer la demanda de estos recursos en los mercados capitalistas).

La tabla 1 nos ofrece una representación gráfica, aunque esquemática, de este flujo de capital liberado de las restricciones regulatorias del estado de desarrollo. Proporciona un indicador de la magnitud de estos flujos (un aumento de seis veces en el flujo de IED de 1990 a 1996) y su distribución sectorial. Esto incluye una preferencia notable por el capital extractivo (inversiones en la adquisición de tierra y la extracción de recursos naturales), para el periodo correspondiente al auge de los precios de las materias primas (2003-2012). Con el fin de esta dinámica, que corresponde más o menos al fin del periodo de crecimiento económico de los países involucrados en el ciclo progresivo —por ejemplo, el PIB regional sufrió un descenso abrupto de 6.3% en 2010 (4.7% en 2011) a 1.1% en 2014, y apenas 0.9% en 2019—,¹⁰ el avance del capital extractivo en la región perdió su dinamismo, lo que se ve claramente en la tabla.

¹⁰ Al respecto, véase a Garry y Moreno (2015).

Tabla 1. Distribución porcentual de la IED por sector en América Latina

	2000	2002	2004	2006	2008	2009-2013	2014	2016	2018
Recursos	10	12	12	12	30	36	22	18	16
Manufacturas	25	38	38	36	22	23	34	29	48
Servicios	60	11	46	51	47	40	44	53	35

Fuente: Arellano (2010) para 2000-2008; CEPAL (2016) para 2014; CEPAL (2019) para 2009-2013, 2016 y 2018.

En el contexto del nuevo milenio, la preferencia del capital en búsqueda de beneficios para las inversiones en recursos naturales sobre las oportunidades económicas que ofrecen los servicios y la manufactura, creó una situación completamente nueva para el desarrollo en la periferia latinoamericana. Respecto a las dinámicas de esta nueva geoeconomía de capital, véase la discusión en el capítulo 2 y el resumen del debate a continuación.

Otro avance en el “desarrollo” asociado con la construcción del orden mundial neoliberal, fue una tendencia hacia la financiarización, que se refleja en una disyuntiva y desconexión entre la economía real (basada en las actividades productivas de diferentes clases de actores económicos y la inversión de capital industrial), y una superestructura financiera basada en gran medida en la base del capital financiero ficticio, el capital circulando en los mercados monetarios e invertido en diversos instrumentos financieros, contratos futuros de materias primas, etc. Las dos décadas siguientes de los años ochenta, esta desconexión se reflejó en el mayor alcance, poder y hegemonía del capital financiero, y el surgimiento (en los años de 1980 y 1990) de un ciclo de crisis financieras, que culminó con la llamada crisis financiera global (Foster y Magdoff 2009; Konings 2010).

La anatomía de una crisis sistémica

Con el advenimiento del nuevo milenio, la propensión del capitalismo hacia la crisis amenazaba con engullir todo el sistema en forma de lo que algunos han llamado capitalismo de desastre; otros una crisis global

planetaria o civilizatoria. Amin escribía sobre una inminente “implosión financiera”. Respecto de esta caracterización y diagnóstico sobre el alcance y la profundidad, así como las dimensiones potencialmente catastróficas de una crisis sistémica global, existe un consenso. Sin embargo, no existe uno con respecto a la naturaleza y las causas fundamentales de la crisis. Por un lado, se ubican los que ven la crisis como el resultado inevitable de la dinámica fundamental del desarrollo capitalista de las fuerzas de producción; dinámicas que algunos remontan al siglo XIX, otros al siglo XV, es decir, a los inicios de un periodo largo de colonialismo europeo dominado por la apropiación y expropiación de tierras, la formación de un sistema racializado de esclavitud, explotación de trabajo forzado y expansión del comercio internacional en condiciones de capital mercantil, desarrollo desigual e imperialismo.¹¹

Por otro lado, se encuentran también aquellos que ven la crisis como el resultado de una intervención humana a gran escala y acelerada en los procesos naturales del planeta, asociados con lo que se ha descrito como una nueva época geológica: el Antropoceno. Un diagnóstico crítico de la crisis global con la noción del Antropoceno, nos desafía a pensar en el problema socioecológico en términos de la idea de que la humanidad enfrenta una crisis de proporciones globales e impredecibles; ya sea según un grupo de científicos climáticos de la Universidad de Leicester, la University College de Londres y el Servicio de Servicio Geológico Británico, bajo el liderazgo de Jan Zalasiewicz (Svampa 2019, 104-107) en la década de 1950; o según el historiador marxista J. W. Moore (2017), quien sostiene que, hace unos quinientos años, la humanidad cruzó ese umbral. Es una crisis del *antropos*, entendida esta, en

¹¹ Estrictamente hablando, la riqueza, predominantemente en oro y plata, extraída en el proceso colonial europeo no fue para acumular capital. Más bien fue para enriquecer a una clase de comerciantes en un proceso de comercio internacional y, más importante aún, para financiar los gastos y los déficits fiscales de la monarquía y los Estados, y para financiar sus guerras y operaciones militares. Por ejemplo, entre los años 20 y 50 del siglo XVI, se incrementó en siete veces la renta, que fue apropiada por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, en forma de impuestos al comercio de plata extraída de México y Perú. En este contexto, podemos hablar de imperialismo extractivista, no de capitalismo extractivista.

términos genéricos, por su capacidad para poner en riesgo el sistema de soporte vital.

Muchos defensores de la idea de un Antropoceno (una época que refleja un cambio decisivo en la relación sociedad-naturaleza, donde la primera domina a la segunda), sitúan los finales del siglo XVIII como el comienzo de la Revolución Industrial y el proyecto de subyugar la naturaleza para lograr el progreso económico de la humanidad; esto incluye a Crutzen, a quien se le atribuye esta noción del Antropoceno. Otros analistas (por ejemplo, Moore 2016), al pensar en una “ruptura metabólica”, prefieren el concepto de Capitaloceno para analizar las contradicciones del sistema capitalista con la naturaleza.¹² Con esta perspectiva, es el capitalismo —el incesante impulso de acumular— y no la intervención humana el que tiene la culpa por la crisis ecológica y la degradación del mundo natural. Los analistas de una “ruptura metabólica” enfatizan el riesgo de una crisis ecológica, en la medida en que los actores económicos y políticos dominantes siguen promoviendo modelos de desarrollo insostenibles, que amenazan no sólo la vida humana, sino también la de otras especies y del sistema de la Tierra en su conjunto. En consecuencia, como diagnóstico crítico, el enfoque en el Antropoceno cuestiona la lógica de la acumulación incesante y el crecimiento económico, basado no tanto en la explotación del trabajo, sino en una explotación intensiva de la naturaleza hasta el punto de empujar el sistema más allá de sus límites de su capacidad de carga.

La segunda narrativa sobre la naturaleza de la crisis global, se basa en la dinámica de crisis del capitalismo, misma que se origina y se puede remontar a aquellas contradicciones que son endémicas del sistema. Existe un debate en curso sobre la naturaleza de estas contradicciones (véase Foster 2002), pero también existe el consenso de lo que implica tanto el proceso de desarrollo capitalista (el impulso a la acumulación como la mercantilización de todos los factores de producción) como la base ecológica del sistema capitalista mundial. El enfoque de muchos estudios sobre la economía política y la ecología del desarrollo capitalista,

¹² Sobre esto, véase Tetreault (2013).

ha sido parte de lo que el economista e historiador neomarxista Piketty (2014) ha nominado como la contradicción fundamental del capitalismo. En otros términos, es una propensión al desarrollo desigual de las fuerzas de producción y las disparidades sociales en la mala distribución de la riqueza y los ingresos, cuyas condiciones pueden trazarse a nivel de las relaciones internacionales y dentro de los países tanto en el centro del sistema como en las periferias.¹³ El *Informe sobre desigualdad global* de Oxfam (2020), por ejemplo, deja claro que la desigualdad económica, habiendo alcanzado proporciones de crisis globales en condiciones de una crisis multidimensional, está fuera de control. Basta sólo un dato: en 2019, los multimillonarios del mundo, apenas 2 153 personas, contaban con más riqueza que 4.600 millones de personas.¹⁴

Estudios recientes han documentado estas dimensiones de las crisis y el rol de la globalización neoliberal —es decir, de las políticas exigidas por el Consenso de Washington sobre las virtudes del capitalismo de libre mercado—, en acelerar una tendencia sistémica hacia una desigualdad vertiginosa, la profundización de la pobreza y la concentración de los ingresos y la riqueza.¹⁵ Según Oxfam (2018), la tendencia hacia el aumento de las desigualdades sociales ha avanzado hasta el punto de que en 2018 sólo 42 personas poseían la misma riqueza que 3.700 millones de personas en el sistema mundial, con el 1% más rico apropiándose de hasta el 90% de toda la riqueza generada en las últimas dos décadas.

¹³ Sobre estas desigualdades, véanse a CEPAL (2010), Milanovic y Yitzhaki (2002) y Piketty (2014).

¹⁴ En el otro extremo de esta división de riqueza e ingresos, tenemos a escala global una expansión de la pobreza y el desempleo, la inseguridad alimentaria, el hambre, las enfermedades pulmonares y respiratorias, condiciones agravadas por la pandemia del covid-19.

¹⁵ El PNUD, en un informe publicado en 2010, hizo una clara conexión entre la problemática de la desigualdad y la pobreza, por un lado, y la agenda política, por otro. Según el informe, existe una “correspondencia directa entre el avance de la globalización, el neoliberalismo y el avance de la desigualdad social en la pobreza, la inequidad social”. Concluye que “las contradicciones más explosivas [...] se dan porque el avance de la globalización [neoliberal] marcha de la mano con el avance de la pobreza y la polarización sociales” (PNUD 2010, xv).

En el contexto latinoamericano, varios estudios inspirados en la obra de Piketty (por ejemplo, Kessler 2016) concluyeron que en los casos típicos de Argentina, Brasil, Chile y Colombia, el 1% más rico de la población se apropió del 23% al 30% del ingreso nacional generado entre 2006 y 2012; esto sucedió en pleno apogeo del auge de los bienes de consumo y el coincidente ciclo progresista. Además, este mismo y otros estudios (por ejemplo, Svampa 2019) concluyen que el éxito —atribuido a los gobiernos formados en el ciclo progresista— para lograr una reducción de la tasa de pobreza, mediante una política de transferencia monetaria condicionada a los pobres y una estrategia neoextractivista, no corresponde a una reducción de las desigualdades en la distribución de la riqueza, ni de la tierra, ni de los ingresos. A este nivel (la estructura de la desigualdad social) persiste el “predicamento de la desigualdad” y la pobreza, y la región sigue siendo la más desigual del mundo, con las manifestaciones correspondientes de una propensión hacia una aguda crisis social.

En el otro extremo de la concentración global de la riqueza y la distribución del ingreso, se estima que, a pesar del rápido crecimiento económico en algunas macrorregiones y la multiplicidad de esfuerzos en las últimas dos décadas en la guerra contra la pobreza mundial, entre 950 millones y 1 300 millones de personas todavía viven en condiciones de pobreza extrema a nivel mundial; es decir, con menos de un dólar al día y, por lo tanto, son incapaces de satisfacer sus necesidades humanas básicas. Esto significa que casi 800 millones de personas no reciben suficiente comida, y alrededor de 500 millones de personas están crónicamente desnutridas, evidenciando así una crisis social de proporciones globales. De hecho, más de un tercio de los niños del mundo están desnutridos; más de 840 millones de adultos son analfabetos, de los cuales 538 millones son mujeres; y 1 200 millones de personas viven sin acceso a agua potable.

Estos son algunos de los hechos básicos y cifras relacionados con lo que Piketty denomina como la “contradicción central del capitalismo”: la desigualdad, lo que se manifiesta no sólo en la dinámica del desarrollo desigual en las relaciones norte-sur y una mala distribución de la riqueza y los ingresos, sino también en desigualdades ambientales; es decir,

en asimetrías en el poder de disponer y beneficiarse de recursos que son esenciales tanto para la producción económica como para la vida humana. Incluso los recursos naturales, como el agua, el suelo y la energía que forman parte de los bienes comunes globales pero bajo el capitalismo, se mercantilizan y se transforman en mercancía. Además, aparte de estas desigualdades sociales y ambientales, tenemos las asimetrías de poder relacionadas con el deterioro ambiental causado por las operaciones destructivas del capital extractivo. En el caso del extractivismo en la gran minería a cielo abierto, se trata de ambas dimensiones de la desigualdad: la social y del medioambiente. La extracción de recursos naturales implica tecnologías y métodos que provocan graves daños a la naturaleza: el uso de grandes cantidades de agua, la contaminación con productos químicos, la quema de hidrocarburos que emiten dióxido de carbono, etc. Además, debido a la probabilidad de derrames de gas y petróleo, se encuentran los daños ambientales asociados con el transporte de petróleo desde sitios de extracción a mercados distantes a través de oleoductos, que representan una amenaza para las comunidades locales y el medioambiente.

La coyuntura actual de crisis en América Latina

América Latina, en el proceso actual de desarrollo capitalista, se encuentra sumergida en una vorágine de fuerzas de cambio social, generadas por la interacción coyuntural de diversas dinámicas de una crisis multifacética. Estas dinámicas en mayor parte preexistieron a la emergencia del covid-19, pero la pandemia ha agravado las condiciones de estas crisis y ha desnudado las contradicciones del sistema como la desigualdad.

Esta condición no se le puede atribuir solamente al capitalismo, al funcionamiento normal del sistema. Es una condición enraizada en una historia de quinientos años de explotación imperialista, un legado del periodo colonial que se manifiesta en la alta concentración de tie-

rras, medios de producción y poder político. Las desigualdades de estos tiempos, en la forma de dos mundos superpuestos, se extendieron y profundizaron en el siguiente periodo liberal clásico, a través de la minería y la agricultura a fines del siglo XIX y principios del XX. A pesar de los importantes aumentos en el crecimiento económico y la industrialización, durante la siguiente etapa de desarrollo capitalista —conocido como el desarrollismo, es decir, capitalismo promovido por el Estado en forma de industrialización por sustitución de importaciones—, la estructura de la desigualdad empeoró aún más. Para las décadas de 1950 a 1970 —la época del estado desarrollista—, la desigualdad, medida por la distribución del ingreso per cápita a través del coeficiente Gini, era la peor del mundo, con un rango de 0.47 a 0.65 (Cornia 2014, 5). Hay que tomar en cuenta que tales medidas de ingreso excluyen la riqueza y subestiman la multidimensionalidad de la desigualdad. Diariamente, señala Gootenberg (2010, 1), “los latinoamericanos viven y ven estas disparidades en la manera en que hacen política, construyen espacios urbanos, trabajan la tierra, se unen a movimientos sociales nuevos y antiguos, experimentan el crimen y el estrés medioambiental, y ganan acceso a recursos educativos, nutricionales, sanitarios, legales, culturales y mediáticos”.

A partir de los años ochenta, la reestructuración neoliberal se extendió por la región en medio de hiperinflación y crisis de deuda, liberalizando el comercio internacional y la inversión, privatizando empresas públicas y reduciendo el gasto social. Esto fue, particularmente en sus etapas iniciales, una transición violenta y autoritaria. “Con algunas excepciones importantes”, señala el historiador Grandin (2004, 14), en toda América Latina “el terror preventivo y punitivo orquestado por el Estado y la élite fue clave para marcar el comienzo del neoliberalismo”. El cataclismo de la contrarreforma neoliberal en la década de los años ochenta del siglo pasado, subraya Grandin, “tuvo tanto que ver con la destrucción de los movimientos de masas como con el surgimiento de nuevas élites financieras invertidas en los mercados mundiales”.

Estas políticas económicas tuvieron consecuencias negativas para la pobreza y la desigualdad, empeorando aún más la región más desigual

del mundo en todos los aspectos. Las tasas de pobreza aumentaron del 40.5% de la población en 1980 al 44% en 2002. En términos absolutos, esto se tradujo en un aumento de 84 millones de personas pobres, de 136 millones en 1980 a 220 millones en 2002 (Boltvinik y Araceli 2006, 145). El índice Gini regional promedio se elevó hacia el cielo a lo largo de esas décadas, aumentando en 2.2 puntos durante los años ochenta, 1.7 puntos durante la década de los noventa y otros 1.2 puntos durante la recesión regional de 2001-2002, lo que da un total de 5.1 puntos durante el periodo neoliberal ortodoxo (Cornia 2014, 25). Los salarios industriales reales disminuyeron, la informalización del mundo del trabajo se expandió y los programas de seguridad social ya insuficientes se redujeron drásticamente, generando las enormes disparidades y desigualdades sistémicas iluminadas por la pandemia del coronavirus. Efectivamente, la pandemia entró en una región que ha sido azotada por una serie de crisis preexistentes —económicas, políticas, sociales y ecológicas—, así como una oleada de rebeliones populares en contra de las fuerzas de desarrollo capitalista.

En este contexto de crisis exacerbada por la pandemia del covid-19, la condición social de la población en América Latina, que ha experimentado un deterioro apreciable desde el fin del ciclo progresista, se ha tornado aún más grave. Por un lado, se han revertido las mejoras significativas logradas por los gobiernos progresivos en la tasa de pobreza y en las desigualdades en la distribución del ingreso. En mayo de 2020, la CEPAL publicó una proyección de los aumentos esperados de la pobreza en 2020, sobre la base de su cálculo conservador de lo que constituye la pobreza. El informe sugiere que habrá 28.7 millones de personas más pobres y 15.9 millones más de personas extremadamente pobres en la región para fines del mismo año. Sumado al número existente de personas empobrecidas y extremadamente empobrecidas, la cifra total proyectada de personas pobres para fines de 2020 es de 214.7 millones, o el 34.7% de la población de la región, y un total de 83.4 millones de personas en pobreza extrema.

La única excepción a esta situación, a pesar del desplome de los precios de las materias primas en los mercados capitalistas y de los im-

portantes avances del coronavirus, es Bolivia. Hasta el golpe de Estado que siguió a Evo Morales y su régimen progresista (en noviembre de 2019), Bolivia sigue registrando una tendencia hacia el crecimiento económico. En 2013, cuando la economía de Brasil había colapsado con una tasa cero de crecimiento, Bolivia experimentó una tasa de crecimiento de 6.8%, a pesar del descenso en los precios de los bienes de consumo desde abril de 2011, con los precios del estaño en 2013 cayendo 14% y la plata 28%. En este contexto, las fuerzas de la extrema derecha no podían, como en los casos de Argentina y Brasil, tomar provecho del colapso del ciclo de alto crecimiento económico para lograr un cambio de régimen. En Ecuador, el fin del ciclo progresista no dependía ni del colapso del auge de las materias primas, ni de un golpe organizado por una alianza entre élites económicas, extremistas cristianos y fuerzas de seguridad, como las que depusieron a Evo Morales. El fin del ciclo progresista y el regreso de la derecha neoliberal, fue producto de una traición de un militante de Alianza País (AP), el movimiento político de Rafael Correa.

Para agravar la situación de crisis económica, en países gobernados por un régimen progresista, provocada por el colapso del ciclo de altos precios de las materias primas, se sumaron los impactos desastrosos y mortales del coronavirus, y las continuas contradicciones ecológicas del capitalismo extractivo. Esta situación no se limitó a los regímenes progresistas de América del Sur. Estas condiciones se pueden encontrar con variaciones en toda la región y, de hecho, en todo el mundo. Como ha señalado Wallace (2020), las transformaciones estructurales en los sectores extractivos, como la agroindustria en todo el mundo y los patrones asociados de hiperdeforestación planetaria, etc., están profundamente asociados con los orígenes del covid-19 y las posibles amenazas virales futuras de una variedad similar.

No es por casualidad que, dentro de la dinámica del capitalismo mundial, algunas de las luchas sociales y conflictos más vigorosos de América Latina se han exacerbado, durante los últimos años, en aquellos sectores que expresan las manifestaciones regionales particulares de los avances del capital extractivo en el proceso de desarrollo —la agroindustria monocultivo y la extracción de petróleo, gas natural, minerales y

metales. Tales campos de batalla, tanto en América Latina como en las otras regiones del sistema mundial capitalista, están asumiendo dimensiones novedosas en este contexto de crisis.

Conclusión

¿Qué podemos concluir de nuestra revisión esquemática de la dinámica actual de crisis del desarrollo capitalista en el contexto regional? En primer lugar, debemos distinguir más claramente entre la dinámica de la era geológica actual (el Antropoceno), en el que la actividad humana ha sido, sin duda, la influencia dominante en la crisis climática, y la dinámica contemporánea del desarrollo capitalista, para entender el impacto destructivo del capitalismo extractivo sobre el medioambiente, y los modos de vivir en las comunidades indígenas y agrícolas, que se encuentran en la frontera extractiva que se expande rápidamente en los márgenes y periferias del sistema capitalista mundial. La razón de esto es que las fuerzas contrahegemónicas, cuyas condiciones (desarrollo y resistencia) son generadas por la dinámica de las crisis del sistema, requieren no sólo una acumulación y concentración de condiciones objetivas (fuerzas de desarrollo capitalista), sino también humanas o agencia social, fuerzas de resistencia al avance del capital y sus impactos destructivos. Esto se trata en el capítulo 6 de este libro.

Como sostienen Barkin y Sánchez (2017), en el contexto latinoamericano, las fuerzas de resistencia están vinculadas a la dinámica del desarrollo capitalista en coyunturas específicas y situaciones concretas de lucha activa: una lucha de clases por la tierra y el trabajo y, en el contexto actual, el activismo comunitario en la frontera extractiva. Antes de entrar en el tema, se puede postular, como argumentó Marx, en un contexto histórico diferente, que cada ciclo en el desarrollo capitalista de las fuerzas productivas y cada avance del capital en el proceso de desarrollo, genera fuerzas de resistencia que se pueden movilizar a la derecha o a la izquierda por movimientos sociales que encarnan estas fuerzas.

La dinámica contemporánea del desarrollo capitalista en la frontera extractiva y el ciclo correspondiente de resistencia en América Latina, proporcionan bastante evidencia sobre esta obviedad. El problema es determinar el resultado de esta correlación de las fuerzas de clase: las fuerzas del desarrollo capitalista que empujan en una dirección (la crisis y el daño ambiental), y las fuerzas de la resistencia, que empujan en una dirección posneoliberal o de posdesarrollo capitalista, así como la esquiua búsqueda de justicia social y ambiental; pero esto no se puede determinar teóricamente, requiere una mirada más cercana a la evidencia empírica y más investigación desde una perspectiva crítica o alternativa de desarrollo.

Capítulo 2. La nueva geoeconomía del capital

Los modelos económicos basados en la extracción de recursos naturales (extractivismo), o lo que algunos economistas describen como “industrias extractivas”,¹⁶ han sido objeto de controversia y fuente de conflicto entre los Estados, las corporaciones transnacionales, las comunidades y el movimiento laboral desde las primeras décadas del siglo xx, e incluso con antelación. De hecho, se ha argumentado que el extractivismo¹⁷ es una forma de acumulación que preexistió al capitalismo industrial, un sistema basado en la explotación del trabajo. Desde esta perspectiva —definiendo el capitalismo en términos de un modo de producción

¹⁶ Extractivismo, según Gudynas (2017), no es una industria, ya que no involucra un proceso de transformación industrial. La insistencia en calificarlo como una industria, Gudynas añade, es apelar al imaginario de las grandes fábricas con muchos trabajadores, como un medio de buscar un amplio apoyo dentro de la ciudadanía. Por esta razón, argumenta, tanto por sus limitaciones conceptuales como por sus implicaciones políticas, el término “industria” o “industrias extractivas” debe ser abandonado.

¹⁷ El término “extractivismo”, como lo entiende Gudynas (2015 y 2017), podemos trazarlo desde la década de 1970 como una forma de describir la evolución de la minería y la exportación de petróleo a gran escala. Fue promovido por las grandes corporaciones transnacionales, bancos multilaterales y gobiernos, mientras que aquellos que se opusieron a la extracción de minerales y metales, por su impacto socioambiental negativo, también utilizaron el término. Pero el escenario se volvió más complejo en América del Sur a mediados de la década de 2000, cuando un ciclo de “regímenes progresistas” —regímenes posneoliberales formados en búsqueda de un desarrollo más inclusivo— también optaron por una estrategia de extracción de minerales, metales, hidrocarburos (petróleo y gas) y agroproductos alimenticios, y la exportación de estos “recursos naturales” en forma primaria.

de mercancías con su base en la relación capital-trabajo—, el capitalismo, como lo entendemos, es un sistema que funciona para expandir las fuerzas de la producción (el desarrollo capitalista). Como tal ha tenido una historia relativamente corta que se remonta al siglo XIX, cuando se construyeron los pilares fundamentales del sistema.

En el mismo sentido, se entiende por “extractivismo” el desarrollo desigual entre las economías formadas en la periferia y las del centro del sistema mundial; estructura caracterizada por una división internacional en la forma de intercambio de materias primas por productos industrializados. Esta organización de relaciones internacionales tiene su origen en la fase de desarrollo capitalista, caracterizada por Lenin como “imperialismo” (1875-1914). Pero en el contexto del siglo XXI, que incluyó un auge en los precios de las materias primas, los países de la periferia latinoamericana profundizaron su dependencia de los sectores extractivos de la economía. La concentración de las exportaciones y de los ingresos fiscales en los sectores extractivos (principalmente la minería y los hidrocarburos), condujeron a una reprimarización de las economías en la región. Esta reprimarización, junto con las otras dimensiones del extractivismo, y los avances de capital extractivo en el proceso de desarrollo, conllevaron a problemas que afectarían el desarrollo económico y social en el largo plazo de los países en la región.

Este capítulo proporciona un breve análisis de la dinámica asociada con esta problemática, en el contexto de una controversia y debates sobre el advenimiento y la construcción de un “nuevo orden mundial” (de la globalización neoliberal), como marco institucional y forma de gobernanza que permite y promueve la acumulación de capital a escala mundial. Uno de estos debates tiene que ver con el concepto de neoextractivismo, presentado por sus defensores como un nuevo modelo de acumulación y una manera de entender el desarrollo con base en el activismo del Estado (Gudynas 2009). La preocupación central del capítulo puede ser descrita en términos de la nueva geoeconomía de capital, que incluye los avances y dinámicas del capital extractivo —es decir, el capital invertido en la extracción y exportación de recursos naturales en forma primaria. Detrás de esta cuestión, que es esencialmente teórica y po-

lítica, subyace una preocupación más práctica y existencial relacionada con las comunidades indígenas y no indígenas, que están directamente en la “línea de fuego” del capital extractivo en el marco del proceso de desarrollo capitalista de las fuerzas productivas.

El argumento se organiza de la siguiente manera. Primero, se esclarece el concepto de extractivismo, con especial referencia al modelo económico utilizado por los gobiernos posneoliberales constituidos en el contexto de un “ciclo progresista” o de una “marea rosada” (Barrett, Chávez y Rodríguez 2008; Gaudichaud 2016). Este “modelo progresista” muestra una contradicción fundamental entre su proyecto de desarrollo¹⁸ y el funcionamiento del sistema capitalista. A continuación, se delinearán las principales características de lo que se puede describir como la nueva geoeconomía del capital en la región, con énfasis en la dinámica del cambio social asociado con la última fase del desarrollo capitalista en América Latina. El capítulo se centra entonces en la dinámica regional del agroextractivismo: la extracción de recursos naturales en forma de productos agroalimenticios y agrocombustibles para el mercado global. Aunque en términos de la escala y el volumen de capital desplegado, la agroextracción no tiene el mismo peso en la economía mundial que la extracción de hidrocarburos, minerales industriales y metales, el cultivo de los productos agroalimentarios y agrocombustibles para la exportación en forma primaria (con escaso o ningún procesamiento), ha inducido nuevas dinámicas de cambio agrario y desarrollo rural en la región. Estas dinámicas han dado un nuevo significado a lo que se entiende y se presenta en el discurso de

¹⁸ El concepto de *desarrollo* en este ensayo tiene dos centros de referencia: 1) como *un proceso* (desarrollo de las fuerzas de producción y los cambios correspondientes en las relaciones sociales de producción); y 2) como *un proyecto* (acciones tomadas para lograr una mejora social en la condición social de una población definida en el marco del sistema capitalista). Si existe una correspondencia entre una acción tomada consciente o intencionalmente, podemos concebir del desarrollo como un proyecto. Si no existe esta correspondencia, podemos ver el resultado (desarrollo) como un producto de fuerzas estructurales. Por lo tanto, el desarrollo no sólo se relaciona con el capitalismo, sino que es prácticamente un sinónimo de ello —hasta el punto de ser invisibilizados en el discurso teórico sobre el desarrollo.

los estudios agrarios críticos como la “cuestión agraria”, que sigue estando en el centro del debate sobre el proceso de desarrollo capitalista (esta cuestión se discute en más detalle en el capítulo 4). Por último, el capítulo aborda brevemente la cuestión de las respuestas estratégicas al avance del capital extractivo y sus impactos destructivos, por parte de las clases sociales, las comunidades y los movimientos socioambientales en el sector popular.

Extractivismo en la era colonial

En la actualidad, los debates sobre los extractivismos se centran en la dinámica del desarrollo capitalista. Sin embargo, los extractivismos en la región —en el continente de América, para ser preciso— anticiparon por unos trescientos años el advenimiento de capitalismo extractivista. El extractivismo o, siguiendo a Gudynas, los extractivismos, tiene sus orígenes en la era colonial del capital mercantil y la explotación imperialista. Las condiciones de esta explotación incluyen la virtual exterminación de cientos de millones indígenas, una población que se redujo de más de 100 millones en el umbral de la época colonial a unos 50 millones en la actualidad.

Aunque la explotación imperialista, la gobernanza colonial y la proyección del poder del Estado preexistieron por unos tres siglos (1500-1800) a la formación del capitalismo, como lo entendemos hoy, esta sí condujo a la acumulación de capital mercantil, que, como la apropiación de la riqueza de recursos naturales en forma de oro y plata, así como los productos agroalimentarios de las plantaciones (azúcar, ron y algodón) extraídos en condiciones de dominio colonial y explotación imperialista, era un ingrediente esencial para el desarrollo del capitalismo en el siglo XIX. Pero lo que el capitalismo requería, según Marx, además de la acumulación de capital en forma de riqueza natural y dinero, era la formación de un proletariado desposeído de sus medios de producción. Marx describió los inicios de este proceso como la acumulación primitiva (u original). Según él, este proceso resultaría

en la proletarización o la “multiplicación del proletariado” (una clase desposeída de su propiedad sobre los medios de producción y que, por tanto, sólo posee su fuerza de trabajo), en un proceso de transformación productiva y social.

Marx teorizó el proceso de desarrollo resultante en términos de la Ley General de Acumulación de Capital, que especificaba una doble tendencia, por un lado, hacia la centralización y concentración del capital; y, por el otro, hacia la transformación de una economía basada en la agricultura y una cultura comunal en el contexto de relaciones de producción precapitalistas (una economía campesina), en un sistema industrial moderno basado en la relación capital-trabajo. El funcionamiento de esta ley se puede rastrear en diversos contextos históricos y regionales, en la periferia de lo que evolucionaría en un sistema capitalista mundial, alimentada por un proceso de emigración rural y la formación de un “ejército de reserva industrial” de trabajo agrícola excedente.

Desde una perspectiva general de economía del desarrollo, articulada más claramente por el economista Arthur Lewis, el desarrollo capitalista de la agricultura, logrado por medio de la explotación de esta fuerza de trabajo, funcionó como una palanca de acumulación de capital industrial.

Hasta la década de 1980, y la instauración de un nuevo orden mundial basado en una creencia fundamental en las virtudes del capitalismo de libre mercado, el proceso de desarrollo avanzó, más o menos, como lo concibieron Arthur Lewis y Marx. Pero el único aspecto de este proceso de desarrollo que Marx anticipó claramente —aunque ni él ni Lewis lo teorizaron—, tiene que ver con la dinámica globalizadora del capitalismo y su evolución como sistema mundial con un centro y una periferia, y la construcción de un sistema internacional. Se estableció con ello una división del trabajo que conduciría a un desarrollo desigual de las fuerzas de producción y, según André Gunder Frank, entre otros teóricos de la dependencia o del sistema mundial, el subdesarrollo basado en la sobreexplotación de la clase trabajadora y los productores directos en la periferia.

El desarrollo capitalista en la época neoliberal: sus dinámicas en tres ciclos

Un principio fundamental de la economía política marxista, es que todos los avances del capital en el desarrollo de las fuerzas productivas conllevan a contrapelo fuerzas de cambio, encaminadas a la transformación de las relaciones de producción y la formación de fuerzas de resistencia, que tienden a asumir la forma de una lucha de clases. Con este referente podemos identificar varias fases en el desarrollo capitalista en América Latina durante el periodo de posguerra, cada una en la forma de un ciclo de desarrollo y de la resistencia correspondiente.

En el primer periodo de posguerra (los años cincuenta a setenta), el “desarrollo” tenía su base en la explotación de las reservas ilimitadas de fuerza de trabajo, movilizadas por el desarrollo capitalista en la agricultura. En este ciclo, el desarrollo y el avance del capital dependía de la agencia del estado desarrollista. En cuanto a las fuerzas de resistencia, estas tomaron la forma principal de una lucha por el trabajo (mejoramiento del salario y de las condiciones de trabajo) y por la tierra, con la agencia del activismo del movimiento laboral en las ciudades, y, en el campo, del activismo revolucionario de los movimientos sociales enarbolados por los campesinos y los sin tierra. Para fines de los años setenta, la resistencia y los movimientos relacionados con ella fueron destruidos o desarticulados.

En los años ochenta, atestiguamos una nueva fase en el desarrollo capitalista y un gran avance del capital, aunque limitado por el desarrollo de las fuerzas productivas que, en la periferia del sistema, fueron restringidos y dependientes. Este avance fue facilitado por la institucionalidad de un nuevo orden mundial, construido con el objetivo de liberar las fuerzas de libertad económica de las regulaciones restrictivas del estado desarrollista. El mecanismo de este avance fue una política de ajuste (reformas estructurales), subordinada a los requisitos del nuevo orden mundial. Estas “reformas” y “ajustes” incluyeron 1) la apertura a la economía mundial e integración al sistema capitalista (la globalización);

2) la privatización de los grandes medios de producción y las empresas económicas; 3) la desregulación de los mercados capitalistas; 4) la liberalización de los flujos de capital y el comercio internacional; y 5) la descentralización y participación popular o social en la gobernanza —institucionalizada, en el caso de Bolivia, en términos legislativos o jurídicos.

En los años noventa, gracias a la política neoliberal puesta en práctica por unos cuantos gobiernos en la región, se produjo una afluencia de capital en la forma de empresas capitalistas multinacionales y sus inversiones directas. En América Latina, este capital buscaba ganancias y oportunidades, relacionadas con la extracción de recursos naturales para la exportación en forma primaria —lo que se denota como extractivismo.

Las fuerzas de la resistencia que corresponden a este ciclo, tomaron la forma de movimientos sociales, dirigidos en contra de la política económica de los regímenes neoliberales formados en esta coyuntura —movimientos cuya base se encontraba en el campesinado, las comunidades indígenas y en un vasto semiproletariado de trabajadores rurales sin o con poca tierra. El activismo de estos movimientos hacia finales de la década de los 90, resultó en un desencanto generalizado y un fuerte rechazo a la política neoliberal como doctrina y modelo económico (por ser excluyente), generando así las condiciones necesarias para la emergencia de un nuevo ciclo de desarrollo y resistencia —y de un posterior ciclo progresista en la política, basado en el activismo estatal inclusivo (véase el capítulo 3).

La nueva geoeconomía de capital

El argumento central de este capítulo es que la fase actual en el desarrollo capitalista de las fuerzas productivas, está asociada con el avance del capital extractivo, relacionado con el despliegue del capital industrial, y que las operaciones de este capital, en la periferia latinoamericana del sistema mundial, han introducido una nueva dinámica de desarrollo, con implicaciones negativas tanto para el medioambiente como para los modos de vivir de las comunidades directamente afectadas por estas

operaciones. Más concretamente, se argumenta que los avances del capital en el sector agrícola han transformado el paisaje rural, alterando las relaciones sociales de la producción y del poder, amenazando o cerrando el acceso a la población rural, principalmente a los pequeños agricultores y los pueblos indígenas, a los bienes comunes, como la tierra, el agua, las vías fluviales y el bosque con sus recursos forestales, y poniendo en riesgo no sólo el modo de vivir campesino y de las comunidades rurales, sino la existencia y cultura ancestral de los pueblos indígenas. Sin embargo, como en todas las fases en la evolución del capitalismo, estas dinámicas han desatado una ola de protestas y han generado poderosas fuerzas de resistencia, cuyas dinámicas contribuyen a dar forma a la trayectoria del cambio social en la región.

En el discurso teórico y político sobre el extractivismo —o el neoextractivismo, con referencia al modelo utilizado por los regímenes “progresistas” de centroizquierda en la primera década del nuevo milenio—, se trata de una estrategia de desarrollo nacional, que depende de la IED en la adquisición de tierras y en la extracción de recursos naturales, como también en la exportación de estos recursos en forma primaria. Esta estrategia extractivista no es nueva para América Latina. En los años sesenta fue objeto de una crítica lanzada desde la perspectiva de la “teoría de la dependencia”, que atribuyó el atraso en las dinámicas de desarrollo a una estructura económica, en la cual los países de la periferia exportaban mercancías en forma primaria a cambio de la importación de bienes industrializados fabricados en el centro del sistema (Borón 2008; Dos Santos 2003).

Basados en esta teoría, varios países de la región iniciaron en los años sesenta y setenta una política de industrialización por sustitución de importaciones, fundamentada en la regulación del capital y la protección de las empresas y productores nacionales. Sin embargo, con la instalación de un nuevo orden mundial, constituido por un programa de reformas estructurales en la macroeconomía (la globalización neoliberal) en la década de 1980, se desencadenó una dinámica contraria, que dio lugar a una mayor dependencia. La tabla 2 nos proporciona una representación gráfica de este proceso, lo que podría describirse

no sólo en términos de una nueva dependencia, sino como la nueva geoeconomía de capital basada en la expansión del capital extractivo en la región.

Tabla 2. Exportaciones de productos primarios (porcentaje del total de las exportaciones)

	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Argentina	67.5	69.5	71.2	68.2	69.2	67.8	67.9	67.9	74.3
Bolivia	72.3	84.2	86.7	89.8	92.8	92.6	94.7	94.4	94.5
Brasil	42.0	47.4	47.0	49.5	55.4	63.6	65.0	65.2	60.1
Chile	84.0	83.2	86.8	89.0	88.8	89.6	85.8	85.9	85.3
Colombia	65.9	62.2	62.9	64.4	68.5	77.9	82.5	82.4	74.5
Ecuador	89.9	89.7	90.7	90.4	91.7	90.2	91.0	93.8	92.5
Paraguay	80.7	85.1	87.3	84.1	92.1	89.3	91.2	90.5	90.6
Perú	83.1	83.0	83.1	88.0	86.6	89.1	85.4	85.3	96.9
Uruguay	58.5	63.7	68.4	68.7	71.3	74.3	75.9	76.3	77.9
Venezuela	90.6	86.2	86.9	92.7	95.6	95.7	98.3	-	-

Fuente: CEPAL (2012 y 2016); para las estadísticas de 2014, CEPAL (2015, 102).

La tabla también nos ofrece una idea del grado de complejidad y del nivel de diversificación productiva alcanzado por las economías latinoamericanas; una mejor medida de desarrollo económico que la reprimarización de las exportaciones, aunque estén estrechamente vinculadas. Con referencia al índice de complejidad económica, América Latina se compone principalmente de economías simples, en el sentido de estructuras productivas que carecen de redes complejas de conocimiento. No obstante, las diferencias entre los países en este índice son significativas. Se destaca Brasil por su rango relativamente alto (55 de 122 países), lo que indica un mayor nivel de diversificación productiva o industrialización, que otros países de Sudamérica. El rango de Colombia (61) y Uruguay (60) indican un nivel inferior, pero un avance sobre el nivel de industrialización o complejidad (diversificación productiva) en comparación con Bolivia, Ecuador y Perú, países con economías profundamente arraigadas en el extractivismo.

Si bien la tabla 2 nos ofrece una imagen clara de la continua dependencia de muchos países de la región de la exportación de recursos naturales en forma de productos básicos primarios, la tabla 1 nos ofrece una gráfica de la nueva geoeconomía de capital —es decir, del predominio del capital extractivo en el proceso de acumulación y un patrón de crecientes flujos de capital hacia la periferia sudamericana, donde una variedad de factores (el auge de los productos primarios, gobiernos ansiosos para aprovechar su ventaja comparativa en recursos naturales) confluyeron para crear condiciones favorables para el surgimiento de un capital extractivo y primarización de las exportaciones—, una reprimarización en unos casos (Cypher 2010). Varios cambios en la economía mundial, en particular el surgimiento de China como potencia económica y la consiguiente expansión de la demanda mundial de recursos naturales, coadyuvaron a avanzar en este proceso. La nueva geoeconomía del capital tiene dos atributos significativos: 1) la preponderancia del capital extractivo en el proceso de desarrollo, lo que se manifiesta en una dependencia pronunciada en la IED y las exportaciones de productos básicos primarios; y 2) la concentración económica y el creciente poder del capital monopolístico y financiero (Delgado y Martín 2015; Murmis y Murmis 2012; Sotelo 2009).

En el contexto latinoamericano, la preocupación de tantos gobiernos para impulsar y construir una alternativa de desarrollo sostenible e inclusiva, se asienta sobre un dilema fundamental: ¿cómo beneficiarse de la fenomenal riqueza de los recursos naturales de la región, recursos como los hidrocarburos, metales y minerales, y los productos de agroextracción, sin asumir los altos costos sociales y ambientales que conlleva un modo de acumulación extractivo?

Los proyectos extractivos suelen incluir inversiones a gran escala (a menudo extranjeras) en la adquisición de tierras, concebida como “acaparamiento de tierras” en el discurso de los estudios agrarios críticos (Borras *et al.* 2012; Murmis y Murmis 2012); así como concesiones para explorar y extraer minerales y metales para la exportación en forma primaria, proyectos de desarrollo de infraestructura emprendidos por corporaciones multinacionales, además de otras actividades de estas corporaciones que

generan poco empleo y dan como resultado una economía de enclave con escasos vínculos con el aparato de producción nacional. El extractivismo en este contexto, plagado de contradicciones y resultados de desarrollo relativamente limitados, requiere una expansión territorial, que conduce a un total desprecio y violación de los derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas situados en la frontera extractiva, así como al desplazamiento de la población desposeída de sus medios de producción o la destrucción de su modo de vivir y el medioambiente. El resultado, según los estudiosos latinoamericanos de extractivismo como Gudynas (2010, 2011a, 2011b y 2017), Acosta (2009 y 2011) y Svampa (2019), es una proliferación de economías de enclave en condiciones de acumulación por desposesión y despojo (Araghi 2010; Harvey 2007). En los años noventa, en condiciones de la apertura a la economía global y los avances del capital en forma de inversiones extranjeras directas, millones de campesinos y productores pequeños —denominados por el Banco Mundial como “los pobres del campo”—, habían perdido acceso a sus medios de producción y su modo de vivir como agricultor o la multiactividad que caracteriza a la economía campesina. Los agronegocios producían y exportaban productos agroalimenticios, como maíz, a precios tan baratos que los agricultores de Chiapas y el sur de México fueron empujados a la pobreza. Los zapatistas tenían razón: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue una sentencia de muerte para los agricultores indígenas; y en el sector manufacturero la historia era la misma: con la pérdida de la protección del Estado, el naciente sector moderno industrial fue destruido, cerrando la puerta a los inmigrantes rurales en búsqueda de un modo de supervivencia. El saldo de estas dinámicas de desarrollo capitalista fue la transición de la pobreza rural a una nueva pobreza urbana.

La geoeconomía del capital extractivo

La nueva geoeconomía de capital en la región tiene sus orígenes en la política neoliberal de reformas estructurales en la macroeconomía en la década de 1980. En el contexto de estas reformas, las restricciones re-

gulatorias sobre el movimiento y los flujos de capital fueron eliminados, desatando una gran afluencia de capital hacia la región. La primera ola de inversión en América Latina ocurrió en la década de 1990, cuando hubo un aumento de seis veces en los flujos de capital en forma de IED en los primeros cuatro años de la década, y luego en los años de 1996 a 2001 (CEPAL 2012, 71). Otra afluencia se produjo en la primera década del nuevo milenio, en condiciones de altos precios para los productos primarios y un auge de exportaciones sudamericanas.

El auge de los productos básicos trajo un cambio radical en el panorama del desarrollo nacional. Los países exportadores de productos en forma primaria, especialmente en América del Sur, donde los gobiernos habían adoptado la extracción de recursos naturales como una estrategia de desarrollo, se beneficiaron sustancialmente del rápido crecimiento de los ingresos por exportaciones y del crecimiento económico. Las tasas anuales de crecimiento habían oscilado entre 4.5% y 7.2% (5% en promedio), en los años de 2002 a 2008 (CEPAL 2009). Al mismo tiempo, después de un largo periodo de desempeño mediocre, la inversión en el sector de extracción de recursos y productos básicos de materias prima se recupera y, en los últimos años, se acelera. En los últimos veinte años, América del Sur ha sido objeto de grandes inversiones por parte del capital extractivo internacional. Según el Banco Mundial (Liebenthal, Michelitsch y Tarazona 2005, 20), en el periodo de 1990 a 1997, la inversión mundial en exploración minera creció en 90%. Sin embargo, para América Latina este crecimiento fue del 400% y para Perú del 2000% (Lust 2015). En 1997, América Latina atrajo el 40% de las inversiones mineras totales (De Echave 2008, 21), mientras que en 2010 ocupó el cuarto lugar en inversiones mundiales en exploración minera (Panfichi y Coronel 2014, 395).

Los destinos principales para la IED en la década de 1990 y en la primera década del nuevo milenio, fueron los servicios (particularmente, bancarios y financieros) y los recursos naturales (la exploración, la extracción y la explotación de hidrocarburos y minerales). El sector de los servicios representaba casi la mitad de estas inversiones en América Latina, pero la tabla 1 apunta hacia una expansión relativamente mayor

del capital extractivo en la primera década del nuevo milenio. A pesar de la crisis financiera mundial de esta época, los flujos de IED alcanzaron un máximo histórico (128.300 millones de dólares) en 2008, en el apogeo de esta crisis. Esto fue un fenómeno extraordinario, teniendo en cuenta que los flujos de esta forma de capital en todo el mundo se habían reducido en 15%.

Esta tendencia anticíclica marcó la continuación del auge de los productos primarios hasta alrededor de 2012, cuando Brasil, la mayor economía de la región y el mayor receptor de los flujos de capital, entró en crisis (un ciclo de crecimiento económico negativo cero en 2012). Sin embargo, como se muestra en la tabla 3, el fin del auge de los productos primarios no dio lugar inmediatamente a una reducción de los flujos de IED; para eso tuvimos que esperar hasta 2015. En este año, América Latina y el Caribe experimentaron una caída general del 10% en los flujos de capital, pero la contracción de la IED fue particularmente aguda en aquellos países que habían sido los mayores receptores de esta inversión, a saber, Brasil, donde cayó 23%, y Colombia, donde cayó 26% (CEPAL 2016, 48).

Tabla 3. Flujos y entradas netas de IED en América Latina (ciclo 1999-2008)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2010	2012	2014
Argentina	10.4	2.2	2.2	1.7	4.1	5.2	5.5	6.5	8.0	11.3	15.3	5.1
Bolivia	0.7	0.7	0.7	0.2	0.1	-0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	1.1	0.5
Brasil	32.8	22.5	16.6	10.1	18.2	15.1	18.8	34.6	45.1	88.5	86.6	96.9
Chile	4.9	4.2	2.6	4.3	7.2	7.0	7.4	14.5	16.8	15.5	28.4	22.3

Tabla 3. Flujos y entradas netas de IED en América Latina (ciclo 1999-2008)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2010	2012	2014
Colombia	2.4	2.5	2.1	1.7	3.0	1.0	6.7	9.1	10.6	6.4	15.0	16.3
México	18.0	29.8	23.7	16.5	23.7	21.9	19.3	27.3	22.0	26.4	45.9	25.7
Perú	0.8	1.1	2.2	1.3	1.6	2.6	3.5	5.3	4.1	8.5	11.9	7.9
Venezuela	4.7	3.7	0.8	2.0	1.5	2.6	-0.6	0.7	1.7	1.6	6.0	0.3

Las cifras están en mil millones de pesos. Fuente: Arellano (2010, 13 y 57) (con datos de la CEPAL); para los años de 2008 a 2014, CEPAL (2016, 79).

El crecimiento de la IED a América del Sur fue impulsado por dos factores: 1) los precios de las materias primas. Estos valores se mantuvieron altos durante la mayor parte de este periodo, atraieron una inversión de capital extractivo en búsqueda de recursos y provocaron un ciclo de crecimiento económico en la subregión sudamericana. De hecho, la IED en los recursos naturales, como proporción de la inversión total, siguió superando las de capital industrial y se concentró en los países con el sector extractivista más dinámico. Sólo cuatro países —Argentina, Brasil, Chile y Colombia— representaban más del 80% de los flujos totales de IED. 2) La extracción de minerales. El sector extractivo, en particular la minería, absorbió la mayor parte de estas inversiones. Por ejemplo, en 2009, América Latina recibió el 26% de las inversiones mundiales en exploración de minerales y metales (Sena-Fobomade 2011). Junto con la expansión de inversiones en la extracción de hidrocarburos y productos agroalimentarios (y biocombustibles), la extracción de minerales y metales constituye la fuente más importante

de ingresos de exportación para la mayoría de los países de la región en la actualidad.

De hecho, el capital extractivo representa la mayor proporción de IED en América del Sur (Unctad 2007, 122-123). En cuanto a Bolivia, donde el régimen actual aprobó una ley que declaraba que los recursos naturales del país eran propiedad del pueblo y que exigía que el Estado fuera su guardián y asumiera el control sobre su explotación —visto por algunos como una forma de nacionalización—, más del 90% de las exportaciones de minerales fueron realizadas por empresas del sector privado, en su mayoría extranjeras. De aquí que el centro de gravedad de la IED en el sector extractivo en términos de escala y crecimiento haya sido América del Sur.

La tabla 3 proporciona una representación estadística de estos flujos, en el contexto de condiciones que cambiaron rápidamente. Estas estadísticas muestran un cambio pronunciado hacia un aumento de las inversiones en el desarrollo de los recursos naturales. El sector de los servicios atrajo un gran flujo de inversión de capital, pero, según los datos proporcionados por la CEPAL (2016), se desprende claramente que una gran parte de las inversiones en este sector eran totalmente improductivas, ya que no aportaban ningún valor a la producción. En la década de 1990, al menos el 40% de estas inversiones implicaron la compra de empresas estatales privatizadas y activos públicos lucrativos; y, en las últimas dos décadas, un porcentaje similar de inversiones extranjeras directas no sirvió para ampliar la producción, sino para comprar y adquirir activos ya existentes, lo que llevó a un notable grado de concentración económica y formación de capital monopolista que no agrega ningún valor a la producción global (Delgado y Martin 2015; CEPAL 2016).

La nueva geopolítica del capital

En el nuevo milenio, las condiciones cambiantes dieron lugar a una dinámica novedosa basada en los avances de capital extractivo en el proceso de desarrollo. Estos avances tienen dos dimensiones sobresalientes.

La primera es la concentración de capital y la formación de monopolios en el desarrollo de las fuerzas productivas, por medio de avances apreciables en el conocimiento científico y tecnológico orientados a la expansión de las fuerzas productivas en forma de innovación técnica. Debido a la concentración de este capital en el centro del sistema, el impacto en la economía regional en la periferia del sistema ha posibilitado la formación de una fuerza laboral altamente calificada, con el traslado al centro del sistema de esta fuerza (en centros de innovación científico-tecnológica, como Silicon Valley), a través de la migración internacional (Delgado 2018).

La segunda dimensión de la nueva geoeconomía del capital en la región, es el avance de capital extractivo en el sector agrícola y la interacción de este capital en forma de agronegocios, orientados al mercado mundial con la economía campesina enfocada a la producción de alimentos para el mercado local. Debido el mecanismo del capital monopolista y las condiciones de esta interacción de capitales en el sector agrícola, la clase capitalista en el sector se encuentra bien posicionada para capturar no sólo la plusvalía, sino también la renta tecnológica (ganancias de la alta productividad) y gran parte de la renta de los recursos naturales —la renta generada en la extracción de recursos no renovables (por ejemplo, hidrocarburos) en forma de la tributación minera o regalías.

En el plano político (la nueva geopolítica del capital), el activismo de los movimientos sociales campesinos en la década de 1990, en la resistencia contra la agenda neoliberal, dio lugar a un amplio desencanto y rechazo del neoliberalismo como doctrina económica y modelo de desarrollo. A finales de la década, el neoliberalismo estaba a la defensiva y, en el nuevo milenio, dio paso a una sucesión de regímenes posneoliberales orientados hacia lo que se entiende como un “desarrollo inclusivo”, logrado por el activismo del Estado.¹⁹ El activismo estatal se refiere al uso que realizan los gobiernos de las rentas recaudadas y recogidas en el proceso de exportaciones de productos primarios, para financiar los programas

¹⁹ Véase el tercer capítulo, que aborda la cuestión de la política progresista en cuanto al extractivismo.

de reducción de la pobreza. Las dinámicas de esta “política” y de la participación de los gobiernos en la renta petrolera y minera, son abordadas en el discurso teórico y los debates sobre el neoextractivismo y los ingresos fiscales (Acosta 2011; Gudynas 2009, 2011a y 2011b; Svampa 2019; Veltmeyer y Petras 2015), y también en las investigaciones sociocientíficas sobre la distribución de la tributación y renta minera, y la participación en esta renta de las comunidades en la frontera extractiva.²⁰

En cuanto a la geoeconomía del capital extractivo, los altos precios de los productos básicos han sostenido una tendencia al crecimiento continuo de las exportaciones (un auge de las materias primas de 2002 a 2012), mientras que las oportunidades de aumento de los beneficios impulsaron la inversión mundial hacia la exploración y extracción (perforación, minería, procesamiento intensivo, recolección, etc.) de minerales industriales, metales preciosos, hidrocarburos, productos agroalimentarios y biocombustibles. En la búsqueda incesante de ganancia extraordinarias, estas actividades, lideradas por las corporaciones multinacionales de esas industrias, han ampliado la frontera extractiva en zonas remotas donde siguen existiendo grandes reservas no explotadas de minerales, y fuentes de energía y productos agroalimentarios.

En condiciones de un auge de los productos primarios en el mercado mundial y el rechazo generalizado del neoliberalismo tanto en los círculos políticos como en el sector popular, el extractivismo (que incluye la primarización de las exportaciones) se convirtió en la forma dominante de acumulación de capital y desarrollo nacional en la región. América Latina proporcionaba condiciones ideales para la expansión del capital extractivo: una alta proporción de tierras con mano de obra, altos rendimientos de las inversiones y gobiernos dispuestos a conferir un trato favorable a las corporaciones capitalistas, en relación con las restricciones regulatorias, las rentas de recursos, contratos a largo plazo

²⁰ Sobre esto, en el caso de Perú véase en particular Landa (2017), y para una discusión mas general sobre el impacto fiscal de la explotación de los recursos naturales no renovables y su impacto indirecto en las comunidades, específicamente en términos de inversiones en infraestructura —mejoras en infraestructura educativa, de salud y vial en las zonas extractoras—, véase Gómez, Jiménez y Morán (2015).

que proporcionan seguridad legal para las inversiones y la repatriación de beneficios, y cooperación en las relaciones de conflicto con las comunidades en la frontera extractiva.

Reparto del botín: la plusvalía y la renta de recursos

52

En el proceso de desarrollo capitalista —en todas sus formas y modalidades de acumulación—, un factor crítico que requiere mayor investigación y análisis tiene que ver con lo que podemos caracterizar como la *cadena de explotación*; es decir, los eslabonamientos en los mecanismos de apropiación del excedente —el valor generado en el proceso de la extracción y producción.

El componente principal de este *excedente* es la plusvalía, que se refiere a la contribución de la clase trabajadora al proceso de producción y el producto social, o sea, el valor generado en el proceso laboral por la explotación de la capacidad o el poder de trabajo. El mecanismo de explotación es la relación salarial entre capital y trabajo, o el salario que representa no el valor total, sino el del poder de trabajo, que se calcula como la utilidad de toda mercancía, es decir, por las horas de utilización de esta fuerza productiva (fuerza de trabajo) en el proceso de producción. El capital se apropia del excedente, que podemos entender como una explotación económica. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta la condición particular de esta explotación en América Latina y otras regiones de la periferia del sistema mundial. En estas regiones y países, una parte sustancial de los costos de la reproducción social de la fuerza laboral está cargado a las comunidades rurales y a los trabajadores mismos con sus familias. Por lo tanto, el salario recibido por los trabajadores en estas condiciones no representa el valor de la fuerza de trabajo en los mercados capitalistas, lo que permite una sobreexplotación (remunerar el trabajo en un nivel inferior al valor de su fuerza de trabajo).

Cuando se considera el hecho de que los precios de los productos generados por los productores directos en la agricultura en la periferia de los mercados capitalistas, en general, también están por de debajo de su valor, podemos entender la dificultad que América Latina tiene para escapar de la condición de subdesarrollo económico en un contexto global y regional; una condición arraigada en una relación de sobreexplotación y dependencia.²¹

La explotación por el mecanismo de la relación salarial entre capital y trabajo, y adicionalmente por la estructura centro-periferia del sistema mundial, es una condición vital del capitalismo en todas sus expresiones. Sin embargo, esta condición de explotación no capta la totalidad de la relación capital-trabajo en cuanto a su funcionamiento en el contexto de los avances recientes de capital extractivo —el capitalismo extractivista. En este contexto debemos tomar en cuenta y calcular la contribución significativa de la naturaleza al valor de los productos básicos en los mercados capitalistas. Para calcular este valor hay que considerar e incluir no sólo la contribución de la clase trabajadora (plusvalía), sino también el valor de los recursos naturales extraídos en el proceso de desarrollo capitalista; la contribución, podemos decir, de la naturaleza, con un valor que está apropiado (en la cadena de explotación) no en forma de plusvalía, sino como renta de suelo y subsuelo: la renta de recursos que está apropiada por el capital en forma de sobreganancias en la comercialización de los recursos naturales (la renta es determinada por la intensidad laboral y por la intensidad de capital o la renta tecnológica). No hay que olvidar que el Estado también es participe en el reparto del excedente, por medio de los mecanismos de regalías y recaudación de impuestos.

El punto teórico aquí es que en el caso del capitalismo extractivo, los mecanismos de explotación y de la apropiación del excedente son más complejos y amplios que en el caso del capital industrial, en el que el

²¹ Sobre esta problemática, véase en particular el análisis de Marini (1973) construido dentro de los marcos de una teoría de dependencia, que representa una contribución fundamental latinoamericana a los estudios del desarrollo.

excedente es captado y apropiado principalmente en forma de plusvalía, es decir, el valor agregado en el proceso laboral. En el caso de capitalismo extractivo, la plusvalía generalmente representa una contribución mucho menor del valor captado en la renta extractiva —la renta de recursos del suelo y subsuelo. Junto con el valor atribuido a la tecnología (la renta tecnológica), la renta extractiva de recursos representa gran parte del valor total de las mercancías de materia prima, permitiendo al capital sobreganancias en sus inversiones productivas. Esto en particular se puede observar en los casos de Bolivia y México, en los que las multinacionales en el sector extractivo, además de captar la plusvalía generada en la minería y en la extracción de hidrocarburos, están bien posicionadas para apropiarse de la renta generada en el proceso de formación de los precios de las mercancías, provocando ganancias extraordinarias. Ese es el punto teórico de este análisis.

El punto empírico es que en el caso del capital industrial —en las economías periféricas en el sur global—, generalmente apropian apenas 20-30% del producto social en forma de ingreso nacional, con tasas de ganancia sobre las inversiones que son menos del 15%.

En muchas economías en el Norte Global, el factor productivo “trabajo” recibe como remuneración para su contribución entre 40% y 60% del producto social en forma de su participación en el ingreso nacional. En América Latina, en la época neoliberal la clase trabajadora (salarios) estaba en condiciones de recibir solamente entre 20% y 15% del producto social en forma de ingreso nacional; mientras que el capital en el sector extractivo estuvo y está en condiciones de apropiarse hasta del 70% del valor total de las materias primas en los mercados capitalistas, que representa ganancias extraordinarias. En este contexto, la clase trabajadora, en muchos casos, apenas recibe 10% de los beneficios del producto social en forma de ingreso nacional.

Es evidente, y varias investigaciones lo confirman, el hecho de que la clase trabajadora no participa sustancialmente en el botín de la gran minería. Por ejemplo, en el caso no atípico de las compañías mineras en Argentina y Chile, los salarios se estima que representan apenas 6% del valor de las exportaciones mineras (Solanas 2007, 2). A pesar de los

altos precios de las materias primas en los mercados capitalistas, la clase trabajadora no ha participado de las ganancias de la venta del producto de su trabajo. Cypher (2010, 588), por ejemplo, concluye en sus investigaciones que “los trabajadores no han sido beneficiados nada del *boom* de las *commodities*”.

Un índice de salarios promedio reales en el sector formal del mercado laboral en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y Venezuela, muestra algunos resultados desalentadores. Utilizando el 2000 como año base, los datos de la CEPAL arrojan un aumento acumulado en los salarios promedio de sólo el 0.46% para 2006 (CEPAL 2007, cuadro A-28). Al respecto, Cypher (2010, 588) informa que después de cuatro años de auge de las exportaciones (de 2002 a 2006), el índice del valor de los salarios reales en el sector extractivo había crecido en menos del 0.5%. Asimismo, estudios realizados por Petras y Veltmeyer (2009) en Brasil, así como en Bolivia y Ecuador, apuntan a resultados desalentadores similares. En el caso de México —según el auditor general en 2012— el Estado se apropiaba apenas del 1.2% del valor total del producto extraído y exportado en la minería, dejando la porción gruesa de la torta para el capital (López 2012).

Al considerar la alta composición orgánica del capital en el proceso de extracción y la baja propensión de usar mano de obra (trabajo) en el proceso de producción (en comparación con el sector industrial), la participación de la clase trabajadora en el botín de extracción de recursos naturales, aunque difícil de calcular con exactitud, también va a ser muy bajo. En el caso de Bolivia —donde el gobierno progresista de Evo Morales nacionalizó la riqueza de hidrocarburos y minerales como un recurso que pertenece no al Estado, sino al pueblo—, se estima que la clase trabajadora recibe menos del 10% del valor del mercado mundial del producto exportado.

En cuanto a la participación del Estado en la distribución de la renta, el botín de la naturaleza y el patrimonio nacional, por medio de los mecanismos de las regalías y la recaudación de impuestos por la tributación minera, se estima que el Estado ha podido apropiarse entre el 10% y 20% del producto exportado en forma de ingresos fiscales derivados de

la exportación y venta del patrimonio nacional. Por lo tanto, el Estado es un beneficiario del modelo extractivista. Sin embargo, los principales beneficiarios de las operaciones productivas del capital extractivo han sido los capitalistas en el sector —las empresas multinacionales, los inversionistas y los grandes comerciantes de productos básicos que se alimentan como parásitos. Por ejemplo, *Financial Times* (18 de abril de 2013) había informado que los grandes vendedores en el negocio de activos y contratos de futuro en el sector extractivo, se habían apropiado en la cadena de valor de 250 mil millones de dólares, aproximadamente, en apenas cuatro años (2004-2007) del ciclo de auge de los productos básicos (Blas 2013).

Con respecto a este punto, en el año 2000 las empresas multinacionales y los comerciantes del sector extractivo obtuvieron utilidades por 2.100 millones de pesos, y en 2012 alcanzaron los 33.5 mil millones de pesos. Si bien algunos comerciantes disfrutaron retornos de más del 50% o 60% a mediados de la década de 2000, en el contexto de la “crisis financiera global” en 2008, un año que experimentó una recesión en la venta de algunos productos básicos, todavía tenían ganancias que promediaban entre el 20% y 30%, lo que no está mal para cualquier estándar comercial.


Conclusión

El extractivismo, entendido como una modalidad de acumulación y desarrollo económico, no es nuevo. América Latina tiene una larga historia que podemos rastrear desde el inicio de la era del colonialismo europeo y la formación del capitalismo como un sistema mundial. Este ha adoptado diversas formas, según la dinámica cambiante del proceso de desarrollo de las fuerzas productivas.

En la coyuntura actual de este proceso, podemos ver el extractivismo —o, mejor dicho, extractivismos— como una forma de capitalismo entre otros. Este se compone de diversas estrategias y modalidades de acumulación dependiente en la extracción de recursos naturales y su ex-

portación a mercados capitalistas en forma primaria, así como también del uso de los recursos fiscales generados en el proceso para lograr una forma más inclusiva de desarrollo, es decir, posneoliberal o poscapitalista.

En este contexto, el capital extractivo, o el neoextractivismo, es un factor predominante en el camino y la estrategia que siguen tanto los regímenes progresistas como los neoliberales para lograr un desarrollo más inclusivo y sostenible. En la nueva geoeconomía, el capital extractivo existe en combinación con otros tipos de capital —monopolista industrial y financiero, para ser preciso. Como en cualquier coyuntura en el proceso de desarrollo capitalista, los extractivismos deben entenderse en su contexto histórico y regional.



Capítulo 3. El ciclo progresista: la geopolítica del capital extractivo

La intención de este ensayo es proporcionar un análisis de la dinámica de desarrollo y la resistencia del capital extractivo. Nos adentramos en lo que podemos entender como la nueva geopolítica del capital en la región, que se ha perfilado como un ciclo progresivo en la política; un ciclo formado en condiciones de cambio en la marea política, provocado por el activismo de los movimientos sociales en la década de 1990. Este ciclo progresivo, caracterizado por la búsqueda y construcción de alternativas al modelo neoliberal, se desarrolló durante un periodo de diez años (2002-2012) en un nuevo contexto de desarrollo. Este contexto presenta dos características. Una tiene que ver con la reconfiguración del poder económico en la economía global, como resultado del ascenso de China y otros mercados emergentes —los llamados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica). El otro factor crítico de cambio en el régimen político fue el activismo de los movimientos campesinos —o lo que quedaba de este después de la violenta embestida de las fuerzas de desarrollo capitalista en la década de 1990. Lo que había era un semiproletariado de comunidades indígenas y de trabajadores rurales sin tierra, formados bajo las condiciones del desarrollo capitalista de la agricultura (véase el siguiente capítulo). El activismo de los movimientos campesinos generó condiciones de desencanto generalizado con el neoliberalismo, y su rechazo como doctrina y modelo económico. La clase política de la centroizquierda aprovechó esta situación, tomando poder (control del aparato del Estado) a través del mecanismo electoral de la política democrática con la oferta y promesa de una nueva política orientada a un desarrollo más inclusivo. El resultado, un tanto sorprendente, de esta

investigación es que una vez que la izquierda de la clase política conquistó el poder, a través de condiciones generadas por el activismo de los movimientos campesinos e indígenas, marginó o apartó a esos mismos movimientos que le ayudaron a conquistar el poder. Esto fue evidente en Ecuador, pero también en Bolivia, donde el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) al inicio fue conocido como un “gobierno de movimientos sociales”. En su primer mandato, Evo Morales contaba en el apoyo de los movimientos que lo llevaron al poder, pero en el segundo y tercer mandato la política de Morales estuvo marcada por tácticas opresivas y antidemocráticas de reacción contra los mismos movimientos. Tales tácticas incluyen una represión violenta de la protesta indígena contra proyectos ambiental y socialmente destructivos (como la marcha del Territorio Indígena y el Parque Nacional Isiboro Sécore [Tipnis])²² y la estigmatización de ambientalistas, críticos y miembros de la oposición como “contrarrevolucionarios”, “colonialismo predatorio” o secretamente aliados con las potencias imperialistas.

Dinámica política del desarrollo capitalista

Los gobiernos formados en este ciclo progresista (una marea “rosa” o “roja” de gobiernos progresistas) —en particular en Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador— en el contexto de buscar una alternativa al neoliberalismo, construyeron un nuevo modelo económico sobre dos pilares: 1) el *nuevo desarrollismo* (un desarrollo más inclusivo por una política de reducción de la pobreza) y 2) el *extractivismo*, es decir, un *nuevo extractivismo* definido por el modelo de exportación primaria y la asignación de recursos fiscales derivados de las exportaciones para financiar

²² La relación conflictiva entre el gobierno y los movimientos que llegó a tener una transcendencia internacional, fue el caso del Tipnis, un parque nacional con una biodiversidad de importancia mundial. En 2008, el proyecto de Morales de firmar un acuerdo con Brasil para financiar y construir una carretera de 177 km a través del territorio legal de tres grupos indígenas y 64 comunidades, desató un conflicto transcendental que mostró los límites del progresismo dentro de la política extractivista.

programas de desarrollo social (Gudynas 2010; Svampa 2019; Veltmeyer y Petras 2015). Estos programas dieron lugar a una reducción del 44% en la tasa de pobreza en América Latina en 2002, al comienzo del auge de los productos básicos y el ciclo progresista, al 23.1% en 2010 (CEPAL 2010, 11). Entre los años 2000 y 2017, la región Andina, con una participación activa en el proyecto de los progresistas en los casos de Bolivia y Ecuador, redujo la incidencia de pobreza extrema en 24.6 puntos porcentuales; mientras América Latina lo hizo en 14.0 puntos porcentuales (Wanderley 2020, 6).²³

Antes de continuar con este análisis, es necesario establecer el principio que cada expansión de las fuerzas de desarrollo genera fuerzas de resistencia paralelas, las cuales se pueden movilizar en diferentes direcciones, ya sea izquierda o derecha. Por lo tanto, en el vórtice de estas fuerzas, se pueden ver las directrices de varios modelos y opciones para un futuro mejor. Uno de ellos es el nuevo extractivismo, un modelo construido sobre la base del neodesarrollismo y extractivismo, el modelo preferido por los gobiernos de la centroizquierda (los “progresistas” o los “progresivos”).

El régimen del Partido de Trabajadores (PT), formado por Lula da Silva y Dilma Rousseff (2005-2013), representa una forma paradigmática de este modelo. Otra opción que apareció en el vórtice de las fuerzas de cambio —dependiendo de otra concepción del modelo económico y estrategia de desarrollo—, está representada por Chile y, también, con diferentes matices y aspectos, otros países de la costa del Pacífico alineados con la política imperialista de Estados Unidos (Perú, Colombia

²³ Existe una fuerte correlación entre el ciclo progresista en la política y el patrón de una reducción significativa de la tasa de pobreza, particularmente en la región Andina. Sin embargo, la orientación ideológica y el modelo económico evidentemente no eran los únicos factores que explican la dinámica de esta reducción en la incidencia de la pobreza: Bolivia es el país de la región Andina que mostró la mayor reducción de pobreza extrema entre 2000 y 2017 (pasando de 41.4% a 11.8%, lo que implicó una reducción total de 29.4%). Pero tanto Perú como Colombia, países que no tenían un régimen progresista y seguían una línea neoliberal en la política, mostraron una reducción en la tasa de pobreza en este periodo: 25.8% en el caso de Colombia, y 20.5% en el caso de Perú (Wanderley 2020, 6).

y México). Este modelo implica una continuidad con el modelo neoliberal del libre mercado construido en la década de 1970 por los “Chicago Boys” de Augusto Pinochet, para planificar el desarrollo de las fuerzas de producción en Chile. El gobierno de Chile en ese momento (la era neoliberal), representado por Michelle Bachelet, era nominalmente socialista —basado en la concertación entre partidos neoliberales y socialista logrados en la década de 1990, pero cuyas políticas no son diferentes de los regímenes neoliberales tradicionales, excepto con menos dogmatismo y más pragmatismo.

Si Argentina y Brasil en el ciclo progresista representan el caso paradigmático del nuevo desarrollismo, Venezuela, Bolivia y Ecuador representan variaciones de un modelo alternativo más radical y antisistémico: el socialismo del siglo XXI; y en el caso de Bolivia y Ecuador, un modelo construido en el espacio entre la concepción indígena del *buen vivir* (o *vivir bien*) y el neoextractivismo, la versión progresista del extractivismo. Estos tres países avanzaron en el proyecto de recuperar la tradición ideológica antiimperialista y, al mismo tiempo, construir una sociedad diferente, otro mundo basado en un desarrollo iniciado desde abajo, desde las comunidades. Sobre esto, véase la discusión en el capítulo 6.

La nueva geopolítica del capital en América Latina

El surgimiento de un ciclo progresista en la política, que coincidió con un auge de los productos básicos en los mercados capitalistas, es el resultado del activismo de los movimientos campesinos e indígenas en la década de 1990, los cuales movilizaron fuerzas de resistencia contra la agenda política neoliberal. Al final de la década, el activismo de estos movimientos (por ejemplo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador [Conaie]) creó un clima de desencanto generalizado y el rechazo del neoliberalismo como modelo y agenda política, creando condiciones para el ascenso de la centroizquierda al poder y la aparición de un ciclo progresista asociado con regímenes guiados por la nueva política social de reducción de la pobreza, según el pos Consenso de Washington sobre la necesidad de un desarrollo más inclusivo.

Los “gobiernos progresistas” o “progresivos” son los que fueron erigidos en la primera década del nuevo milenio, en el contexto de un giro de izquierda en el péndulo de la política electoral. Incluye a Venezuela con la elección de Hugo Chávez en 1998, el régimen de PT formado en Brasil por Lula y Rousseff, la administración de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina (2003-2015), y en particular los gobiernos formados por Evo Morales en Bolivia (2006-2019) y Rafael Correa en Ecuador (2007-2017). La “marea rosa”, que arrastró el régimen formado por José Mujica en Uruguay y el de Fernando Lugo en Paraguay, se caracteriza por gobiernos de tinta izquierdista, formados con un discurso antineoliberal y la promesa de revertir el régimen neoliberal en la búsqueda de un desarrollo posneoliberal más inclusivo. La complejidad y particularidad de cada caso debe respetarse al analizar estos gobiernos. Pero aun así está claro que las experiencias más radicales de alternativas al neoliberalismo (como Venezuela, Bolivia y, en algunos aspectos, Ecuador), no pueden compararse con experiencias menos radicales —se puede decir más “rosa” que “rojo”—, como en los casos de progresismo en Brasil y Argentina marcados por una política orientada al neodesarrollismo. Para un análisis crítico de esas experiencias, véase Gaudichaud, Webber y Modonesi (2019).

En Latinoamérica desde 2003 en adelante (1998, en el caso de Venezuela), varios gobiernos se propusieron promover políticas alternativas al modelo neoliberal, inaugurando un ciclo progresista bajo una política que se implementó en términos de tres conceptos: 1) el neodesarrollo, un modelo que tuvo sus manifestaciones más claras en Argentina y Brasil; se caracteriza por una nueva política social focalizada en la reducción de la pobreza; 2) en el contexto de Bolivia y Ecuador, la ucronía del vivir bien o buen vivir en solidaridad social y armonía con la naturaleza; y 3) el socialismo del siglo XXI, basado en la concepción de la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez en el contexto de Venezuela.

Dada la base generalmente baja del gasto social en toda la región en ese momento (con la excepción de Chile), los gobiernos posneoliberales lograron rápidos avances en el bienestar, a través de la política de uso de recursos fiscales derivados de la exportación de los productos bási-

cos. En Venezuela, donde abundan los recursos naturales de alto valor como el petróleo, en la década de 1990 se lanzó una impresionante serie de programas de mitigación de la pobreza, especialmente en las zonas urbanas. Incluía la introducción de la educación universal y la atención médica, a través de lo que se denominan “misiones”, que fueron descentralizadas a los municipios que sustituyen a los programas estatales. Incluyeron la Misión Ribas (educación de adultos), la Misión Vuelvan Caras (cooperativas económicas), la Misión Guaicaipuro (titulación de tierras indígenas), la Misión Barrio Adentro (salud comunitaria), la Misión Mercal (mercados de alimentos subsidiados) y la Misión Milagro (operaciones oculares, que ofrece cirugía gratuita en Cuba a ciudadanos venezolanos y latinoamericanos).

En Bolivia y Ecuador, la afluencia de recursos procedentes de los impuestos en la exportación, también permitió un aumento sustancial del gasto en asistencia social, aunque no a niveles comparables al de Venezuela. En Bolivia, la renegociación forzada de contratos dentro del sector energético en 2005, fue seguida por la Ley de Hidrocarburos en 2008, que introdujo un impuesto de regalías del 18% y un impuesto directo del 32%. Al mismo tiempo, el Estado aumentó su propia participación en el sector energético, y las ganancias de las exportaciones de energía financian los nuevos programas sociales. Además, en Ecuador el gobierno de Correa aumentó los impuestos a la exportación y renegóció los contratos con las compañías petroleras, para generar un superávit para el gasto en bienestar social. En ambos países, los programas de asistencia social se financiaron, en gran medida, de los programas de transferencia monetaria a los hogares pobres. En Bolivia, los nuevos programas incluyeron un esquema de transferencia monetaria para niños en edad escolar, vinculados a la asistencia académica (el Programa Juan Pinto), introducido en 2006, que llega a más de un millón de niños. Bolivia también se había beneficiado de una especie de “bienestarismo transnacionalizado” o subsidios de política social de Venezuela.

Mientras tanto, Argentina también introdujo un impuesto del 20% sobre los ingresos de exportación de productos agrícolas e hidrocarbu-

ros, así como nuevos impuestos a las exportaciones mineras, que se convirtieron en la fuente de financiamiento para los programas de emergencia introducidos después de 2002, aunque no sin una fuerte oposición de las élites. El impuesto sobre las ventas y los ingresos de exportación permitió a los gobiernos de Kirchner introducir o extender programas específicos de transferencia de dinero en efectivo, incluido el Programa Jefas y Jefes de Hogares Desempleados.

La política progresista en el contexto del auge de los productos básicos (2002-2012) tenía dos aspectos. Uno fue el nuevo desarrollismo, basado en el pos Consenso de Washington sobre la necesidad de lograr un desarrollo más inclusivo por medio del activismo del Estado y una nueva política social focalizada en la reducción de la pobreza. El otro pilar del modelo fue el enfoque teórico y político sobre la macroeconomía del sistema capitalista que lo apoya: el neoestructuralismo, un modelo de desarrollo posneoliberal construido por los economistas de la CEPAL en respuesta estratégica al modelo neoliberal. Este modelo efectivamente es una síntesis del neoliberal, es decir, la idea de la necesidad de una integración en la economía global (la globalización), con el bien del estructuralismo, el enfoque teórico sobre el desarrollo capitalista (y el Estado desarrollista) construido en los años sesenta y setenta por los economistas de CEPAL.

Neodesarrollismo

Argentina, Brasil y, hasta cierto punto, Chile, casos paradigmáticos de este modelo, permiten ver con mayor claridad la estrategia y política macroeconómica y social implementada desde 2003 hasta el final del auge de las materias primas en 2012 —y la sucesiva reversión del péndulo de la política electoral a la derecha en los años 2015 a 2018.

Sin embargo, antes de reflexionar sobre el proceso de reconstruir dicho modelo en la práctica, es pertinente establecer los antecedentes y sus orígenes en el pos Consenso de Washington construido a finales de la década de 1980, a sólo seis años de ser anunciado el nuevo orden mun-

dial (y la política neoliberal de ajustes estructurales); es decir, un periodo de *globalización* (integración en una economía global del capitalismo del mercado libre), *privatización* de los medios de producción y las empresas, *liberalización* de los flujos de capital y el comercio, *desregulación* de los mercados y *descentralización* de los órganos de gobierno, a fin de promover la participación social o popular desde la sociedad civil.

Chile

Podemos ver a Chile como un caso de un estado de bienestar, es decir, no neoliberalismo clásico al estilo de la dictadura de Pinochet, sino como un caso de liberalismo social y pragmático que propone un tercer camino entre capitalismo y socialismo, un capitalismo con rostro humano. No obstante, otros autores opinan que las reformas sociales de bienestar implementada por los diversos regímenes de concertación, no habían cambiado ni la estructura del sistema ni los fundamentos que apoyan el régimen neoliberal. Así podemos ver el modelo chileno como una variedad de neoliberalismo (pragmático o sincrético, lo que unos han denominado como un “capitalismo regulado”), al menos en cuanto a la dimensión económica, que incluye un énfasis en la política de estabilidad de los indicadores macroeconómicos como mecanismo fundamental de equilibrio económico, y vinculado a la búsqueda del crecimiento económico, sin tener en cuenta cómo se distribuye este crecimiento en la población (como en el enfoque heterodoxo y neoestructuralista sobre el estado de bienestar).

En otro nivel, el modelo chileno ha buscado cómo promover la participación social en el proceso de desarrollo para asegurar un crecimiento económico con equidad —una reforma que establece un eslabón vital, pero perdido en la cadena del modelo neoliberal (Boisier *et al.* 1992). En el mismo ámbito, el modelo chileno busca el incentivo para el emprendimiento ciudadano, apostando por políticas públicas focalizadas que fortalezcan los mecanismos para acelerar la creación y mantenimiento de pequeñas y medianas empresas (pymes). En este mismo contexto, busca la promoción de la economía familiar, el cooperativismo y una economía social y solidaria que apoye a las medianas y grandes empresas.

En la dimensión social, el modelo siguió las directrices de una nueva política social establecida por el pos Consenso de Washington y elaborado por Lula, líder del PT en este tiempo y presidente de Brasil, en términos de una política de transferencia directa de dinero a los pobres (Valencia 2013). El consenso incluye no sólo una nueva política social centrada en la reducción de pobreza, sino también un rechazo de la concepción neoliberal de las virtudes del libre mercado. Pero en el caso de Chile, Michelle Bachelet, presidente del país en ese momento y miembro del Partido Socialista en el gobierno de concertación, mantuvo el compromiso con el neoliberalismo en los años de su mandato. Su sucesor en la presidencia, Sebastián Piñera, quien no era un neoliberal pragmático sino un ideólogo convencido, también mantuvo este acuerdo. En resumen, en cuanto a la macroeconomía, bajo la administración Bachelet-Piñera (2005-2013), Chile se puede considerar como un caso pragmático o sincrético del neoliberalismo —aunque Gudynas (2009), entre otros, entiende el modelo chileno como un caso híbrido, lo suficiente progresivo como para incluirlo dentro del arco de países progresistas.

Brasil

Con referencia a la administración de Lula da Silva y Dilma Rousseff (2005-2013), podemos ver a Brasil como un caso paradigmático de neodesarrollismo. Bresser (2006, 2007 y 2009) señala que en la dimensión económica se propone encontrar un equilibrio entre la macro- y microeconomía, promulgando la política neoliberal de estabilidad de indicadores macroeconómicos como también la promoción de la economía familiar y solidaria, en alianza con la gran empresa en el sector privado. Al mismo tiempo, se acepta la premisa neoliberal que el desarrollo implica y requiere un proceso de crecimiento económico, pero, con referencia a las experiencias de los países emergentes (países recién industrializados) en Asia, insisten en que este proceso afecta no sólo al mercado, sino al Estado en su búsqueda por asegurar una condición social de “crecimiento con equidad”.

En cuanto el mercado externo, parece que la estrategia siguió las directrices neoestructuralistas de la CEPAL, buscando la inserción en el mercado global con productos de mayor valor agregado, y el fortalecimiento de la industria nacional, estableciendo a propósito alianzas e inversiones público-privadas. En la dimensión social podemos ver las directrices de dos políticas: la primera, con referencia al pos Consenso de Washington, establece una nueva política social orientada a la reducción de la pobreza. El mecanismo de esta política era una transferencia directa de dinero a los pobres en el contexto del programa Bolsa Familia. La segunda política social perfilada por el modelo tiene que ver con el neoextractivismo, es decir, la política de canalización de los recursos fiscales adicionales derivados de la exportación de los productos básicos para financiar los programas de reducción de la pobreza.

El neoextractivismo en este contexto puede entenderse como una combinación de neodesarrollismo y extractivismo (Burchard y Dietz 2014; Svampa 2019; Gudynas 2009; Lander 2014). Un ejemplo de este modelo es el caso de Venezuela, donde el presidente Maduro el 7 de agosto de 2020 instruyó al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras para “aterrizar las propuestas” del movimiento campesino del país, incorporando los nueve vértices de la Gran Misión Agrovenezuela, el uso del petro para financiar la producción y pagar los cultivos, así como la tierra y la semilla. “El proyecto productivo es el conuco y sus escalas y el petro es otro vértice directo”, declaró Maduro al ordenar una reconfiguración completa de los lineamientos que se establecieron en el relanzamiento del programa (Olvera 2020).

En 2012, con la caída de los altos precios de las materias primas en los mercados capitalistas, los límites del modelo progresista (neodesarrollismo y neoextractivismo) quedaron al descubierto. Muchos críticos en la izquierda habían argumentado la precariedad e insostenibilidad de basar el gasto social y los programas de redistribución en recursos finitos y mercados volátiles. Pero la caída de los precios, junto con una evidente maldición de los recursos, lo dejaron claro.²⁴

²⁴ Existe una literatura abundante sobre la llamada “maldición de los recursos naturales” (véase Acosta 2009). La mayor parte explora y describe la correlación entre la abun-

El socialismo del siglo XXI

El concepto de socialismo del siglo XXI proviene de una formulación de Hugo Chávez. Pero la idea y el proyecto de reconstruir el socialismo en condiciones de la crisis en el siglo XXI, también se hace eco del socialismo comunitario concebido por Evo Morales como su “práctica política” (García 2010), pero moldeado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP 2011), como un “nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo” promovido por el gobierno para “iniciar una transición a un modo de producción socialista”. Esta concepción del socialismo, lo que podemos entender como una forma de desarrollismo procrecimiento con equidad, tiene un eco en Ecuador en el contexto de la “revolución ciudadana”, anunciada por Rafael Correa. Aquí, a pesar de concebir el socialismo como una forma de desarrollismo procrecimiento, se lo asocia paradójicamente con el concepto de *sumak kawsay* (buen vivir o vivir bien en Bolivia) en un proyecto de “biosocialismo republicano” (Ramírez 2010).

No está claro lo que significa la práctica del socialismo comunitario en el contexto de Bolivia (García 2015), porque a la vista no incluye las comunas de Venezuela, ni el cooperativismo ni el desarrollo local de los modelos de la economía social y solidaria (Coraggio 2011); ni siquiera incluye el buen vivir, que encarna una cosmovisión indígena y sigue siendo una poderosa crítica del desarrollo capitalista vigente.

dancia de recursos naturales y el estancamiento económico, expresado como un crecimiento económico lento o como enfermedades generalizadas del desarrollo, como la pobreza, la corrupción y los conflictos sociales. El problema, sin embargo, no es la abundancia en sí. Hay muchas experiencias de éxito económico y bienestar social en países dotados de una gran cantidad de recursos naturales, y algunos casos de éxito reciente basados en esa riqueza. El problema parece surgir de la concentración de tal abundancia y sus ingresos, por un lado, y las condiciones sociales e institucionales específicas, por el otro. De hecho, estas condiciones incluyen lo que Laserna (2011) define como la “trampa rentista”, que se refiere a la convergencia de tres factores: concentración de rentas, instituciones débiles y desigualdad social. La trampa rentista, en la opinión de Laserna, impide el desarrollo porque, una vez en movimiento, recrea sistemas institucionales débiles y reproduce la pobreza y la desigualdad.

Podemos entender lo que significa el socialismo del siglo XXI en el contexto de Bolivia, por medio de una lectura de varios escritos de Álvaro García (2012a, 2012b y 2013), vicepresidente de Bolivia durante el régimen progresista liderado por Evo Morales. Evidentemente, este incluye una transición del nacionalismo de recursos formulado en términos de una ley que establece que la riqueza de los recursos naturales del país, incluyendo en particular los hidrocarburos, pertenecen “al pueblo”, a una industrialización de estos recursos y a una distribución equitativa de los beneficios del crecimiento económica, un especie de posdesarrollo híbrido que combina el capitalismo (una apertura hacia la inversión extranjera y la industrialización) con el socialismo (una nacionalización de recursos) y el extractivismo (explotación de los recursos naturales del país). García (2010) presenta una síntesis de las directrices y el concepto de socialismo comunitario. Este concepto es parte de un discurso teórico e ideológico, no de la práctica política. A nivel de práctica de la política implementada por el régimen de Morales y García, es más correcto hablar de “capitalismo extractivo” (Webber 2015) —el propio García escribe sobre un capitalismo andino y amazónico.²⁵

Desde el año 2000 en adelante en Venezuela, organizaciones populares, comunidades e incluso el Estado mismo han desarrollado varias iniciativas locales de autogobierno. De estas experiencias, en 2005 surgieron los consejos comunales como una forma de autoadministración a nivel de vecindario, seguido por las comunas en 2007 como el nivel de autogobierno por encima de la institucionalidad de un Estado socialista. A nivel local de las comunidades, también surgió la institución del cooperativismo. En 1998, el año en que Chávez fue elegido presidente, sólo

²⁵ En cuanto la práctica, a fines de 2011, Morales propuso la extensión de la exploración y explotación de gas a aproximadamente 12 millones de hectáreas, un área cuatro veces mayor que la de 2009. De esta área, cerca del 5% fue cedida íntegramente a multinacionales. Las nuevas medidas gubernamentales introducidas en 2012 llevaron el nivel de extracción de gas en el país a niveles sin precedentes. Asimismo, en la minería, el gobierno anunció iniciativas para la expansión a gran escala de la actividad minera más allá de las zonas tradicionales del altiplano, o altiplano occidental, donde la minería se desarrolla desde la época colonial. Un gran parte de esta nueva minería implicará la apertura de nuevas fronteras en el Amazonas (Webber 2014).

había ochocientas cooperativas; pero en un espacio de sólo seis años (en agosto 2005), el número de cooperativas había crecido a casi 84 000. El desarrollo de estas cooperativas fue seguido por la construcción de Empresas de Producción Social (EPS), fruto de una colaboración y el activismo del Estado, las comunas y los consejos comunales —la última vista por Chávez como la célula fundamental de la Revolución Bolivariana y, por lo tanto, del socialismo del siglo XXI.

Lo significativo del camino hacia el socialismo construido en un contexto de crisis, que es común para América latina pero que se experimenta en condiciones extremas en Venezuela, es el modelo económico utilizado para traspasar este camino no sólo por Venezuela, sino por todos los gobiernos progresistas. Debido a su dependencia de las exportaciones de productos primarios y de la inversión extranjera, todos los gobiernos “progresistas”, incluidos Bolivia y Ecuador, donde la administración ha defendido explícitamente los derechos de la naturaleza y los derechos territoriales de los pueblos indígenas, han recurrido a un modelo basado en el extractivismo y, por lo tanto, una estrategia para el crecimiento económico (es decir, desarrollismo procrecimiento y extractivista).

Bolivia, como Ecuador, presenta un caso emblemático de esto. Véase, por ejemplo, el exvicepresidente boliviano Álvaro García, quien defendió repetidamente la extracción minera y petrolera en tierras indígenas y campesinas, y en áreas de alta biodiversidad, invocando a Marx y Lenin —las ideas de la “hermandad universal” del primero, y la concepción de la tecnología como fuerza revolucionario del segundo. De la misma manera, Rafael Correa, cuando era presidente, defendió repetidamente la minería y extracción de petróleo en las mismas áreas, a pesar de los impactos socioambientales negativos y la resistencia de los pueblos afectados. Asimismo, Correa, para justificar la explotación petrolera en la región de Yasuní, un territorio indígena de alta diversidad biológica, sostuvo que los derechos de la naturaleza en la Constitución eran sólo “supuestos derechos”, que tienen un estatus muy por de abajo del derecho del pueblo a no tener que vivir en pobreza (Acosta y Cajar 2018).

Buen vivir y las paradojas del desarrollo

La tercera modalidad de una nueva geopolítica del capital en la región, tiene que ver con una concepción de los pueblos indígenas en la región Andina de Suramérica de cómo “vivir bien” en solidaridad social y armonía con la naturaleza. En sus formulaciones originales, lanzadas desde Bolivia y Ecuador, el concepto de buen vivir no sólo rechaza el crecimiento económico como un fin en sí mismo, sino también la idea de desarrollo en cualquiera de sus expresiones, que en cualquier caso siempre incluye el crecimiento económico y la acumulación de capital como condiciones esenciales. Por lo tanto, no busca unir la concepción de una evolución lineal del tradicionalismo a la modernidad en sus diversas dimensiones y formas de pensamiento occidental. La idea de buen vivir acepta la pluralidad de valoraciones y reconoce los valores intrínsecos en la naturaleza. Por consiguiente, la dualidad entre sociedad y medioambiente se disuelve en una multitud de relaciones diferentes. Además, según Gudynas (2009) en su revisión del concepto, señala que es una postura intercultural que resulta de una articulación entre algunos componentes del conocimiento indígena y las ideas críticas de la modernidad. La categoría alcanzó el estatus constitucional en Ecuador y Bolivia, y ahora cuenta con el apoyo de varios movimientos sociales en la búsqueda de justicia social, ecológica y ambiental (véase, por ejemplo, Acosta 2012).

Está claro que la perspectiva del buen vivir habría obligado a las administraciones progresistas a iniciar transiciones lejos del desarrollo contemporáneo, reduciendo el extractivismo, por ejemplo. Sin embargo, resulta que estos gobiernos optaron por profundizar sus estrategias de desarrollo basadas en la apropiación masiva de los recursos naturales. Aunque no eran administraciones conservadoras o neoliberales, su adhesión a este núcleo básico dio lugar a formas alternativas de perseguir el crecimiento y organizar la distribución de excedentes, generando todo tipo de contradicciones y conflictos en el campo de la justicia social, ambiental y ecológica.

La obsesión con el crecimiento y el desarrollismo con sus altos impactos sociales y ambientales, generó todo tipo de críticas desde la pers-

pectiva del buen vivir (Gudynas 2017). Ante estas críticas, los gobiernos progresistas, junto con activistas políticos y diversos académicos (tanto del sur como del norte), lanzaron una ofensiva teórica para redefinir el buen vivir como una variedad de socialismo, para hacerlo funcional al desarrollo y al crecimiento. En otras palabras, para algunos partidarios del socialismo del siglo XXI, la adhesión al crecimiento y al desarrollo fue tan poderosa que las valoraciones múltiples del medioambiente y los derechos de la naturaleza se volvieron inaceptables. Por ejemplo, como señala Gudynas (citando a Cabieses 2012), esto llevó a Correa a preguntar en qué lugar del *Manifiesto del Partido Comunista* o en el socialismo se rechaza la minería, para defender el extractivismo contra los ambientalistas. Del mismo modo, Álvaro García defendió repetidamente la extracción minera y petrolera. De ahí surgen posturas como el “biosocialismo” del buen vivir (Ecuador) o el “desarrollo integral” de vivir bien (Bolivia) (Ramírez 2010). De esta manera, los gobiernos progresistas optaron por alinearse con el desarrollismo en favor del crecimiento; muchos intelectuales apoyaron esta postura y generaron argumentos teóricos para explicarla.

Neoextractivismo y las paradojas del desarrollo

La economía política de los gobiernos progresivos está arraigada no sólo en el neodesarrollismo (el proyecto posneoliberal de un desarrollo más inclusivo), sino también en el extractivismo, es decir, en una política de exportación del producto social en forma de recursos naturales sin procesarlo en un proceso de industrialización, que agrega valor al producto y genera ganancias de capital. En cuanto al funcionamiento de este modelo exportador primario, en lo que Svampa (2013) denomina “el consenso de *commodities*” y una estrategia neoextractivista, véase la tabla 3 y también el debate sobre el tema. Aquí sólo nos detiene para una discusión breve de las dinámicas políticas de este neoextractivismo, que implica una relación de conflicto entre las comunidades en la frontera extractiva con las empresas multinacionales del capital extractivo, y también una relación de subordinación y dependencia entre los gobiernos con las empresas multinacionales en el sector.

Tomamos como ejemplos de esta problemática Bolivia y Ecuador, dos países que representan no sólo la concepción indígena de cómo vivir bien en condiciones de solidaridad y armonía con la naturaleza, sino la forma más radical y paradigmática del neoextractivismo. Además de compartir más de una década de experiencia con el modelo y la política neoextractivista, los dos países andino-amazónicos comparten una biozona megadiversa con un patrimonio ambiental excepcional. A pesar de este gran potencial natural, las economías latinoamericanas no han logrado superar la dependencia de la explotación de minerales, hidrocarburos y alimentos desde tiempos coloniales hasta la actualidad. Más bien, el auge de los productos básicos en los mercados capitalistas ha llevado a una profundización de la dependencia de los dos países en la exportación de su patrimonio y riqueza en recursos naturales. Los gobiernos de Morales y Correa compartían el proyecto de convertir su patrimonio de recursos naturales en un proceso de desarrollo sostenible, utilizándolo como palanca de acumulación para financiar no sólo sus programas sociales orientados a la reducción de pobreza, sino también para lograr el desarrollo de las fuerzas de producción —un ritmo de crecimiento económico con equidad y un desarrollo sostenible de sus recursos naturales.

El equilibrio de una década de esfuerzos para lograr un desarrollo más inclusivo y sostenible en función de una política extractivista —neoextractivista en el caso de los gobiernos progresistas—, es una mezcla. Por un lado, la expansión de las exportaciones de bienes primarios, principalmente recursos energéticos y minerales de los países andinos, a tasas superiores a la media de América Latina y el Caribe, dio lugar a una bonanza económica entre 2004 y 2013 con tasas excepcionales de crecimiento económico de corto plazo y holgura fiscal de los gobiernos.²⁶ Esto condujo a mejoras significativas en los indicadores sociales,

²⁶ En 2010 y 2011, América del Sur alcanzó una tasa de crecimiento promedio del 6.4%, con Paraguay llegando al 15%, Argentina al 9.2% y Uruguay al 8% —tasas de crecimiento vinculadas a la expansión de la economía de soja. El crecimiento económico agregado ha sido muy estable en Bolivia, con un promedio del 4.9% entre 2006 y 2012, con un ápice inicial de 6.1% en 2008 y un mínimo de 3.4% en 2009, en las

principalmente de pobreza y desigualdad. Tendencia que se estancó, e inclusive retrocedió, con la desaceleración de la economía mundial a partir de 2013. En cualquier caso, es evidente que el factor determinante en la reducción de la pobreza no fue el neodesarrollismo o el modelo posneoliberal, sino una “nueva política social” construida dentro de los marcos del modelo de neodesarrollo y la estrategia neoextractivista prevista por el mismo modelo.

Aparentemente, como Gonçalves (2019, 104-135) encontró en sus investigaciones sobre la cuestión de la desigualdad y la pobreza, el modelo de desarrollo económico perseguido por el régimen progresista (por lo menos en el caso de Bolivia) no hacen ninguna diferencia en cuanto la estructura del sistema, señalando uno de los límites del progresismo —del proyecto de “cambiar el mundo desde arriba” (Machado y Zibechi 2016). Por otro lado, la reducción de la tasa de pobreza no cambió la estructura social de la desigualdad. Adicionalmente, el costo ambiental del crecimiento a corto plazo fueron significativos, con un impacto negativo en cuanto los equilibrios ambientales locales. Esto tiene que ver con la deforestación, pérdida de biodiversidad, alta intensidad del consumo de agua y energía, y de la contaminación del agua y el suelo (Wanderley, Vera y Benavides 2020).

Estos impactos negativos socioecológicos están asociados con un nuevo ciclo de conflictos sociales y políticas en los territorios de la frontera extractiva (véase la discusión en el capítulo 6). Además, los desequilibrios ecológicos en este proceso de desarrollo han tenido amplios efectos en toda la región y a nivel global. Esto incluye la intensificación de las sequías, las inundaciones, los eventos naturales extremos y el calentamiento global. También es sorprendente —o tal vez no— que estos resultados se hayan producido en el camino hacia los avances legales y reglamentarios en la protección del medioambiente y los derechos co-

consecuencias inmediatas de la crisis mundial. En 2013, el país alcanzó un nuevo récord reciente de crecimiento del 6.8%, y se colocaba entre los tres primeros países de América Latina en 2014 en términos de crecimiento del producto interno bruto.

lectivos de los pueblos indígenas, en los países andinos y amazónicos (Wanderley, Vera y Benavides 2020).

Con el fin de promover una bonanza económica, el persistente debate latinoamericano sobre la superación del patrón de crecimiento extractivista basado en la explotación de recursos naturales (minerales, hidrocarburos y monocultivos de productos básicos), se renueva en alto volumen y alta intensidad, principalmente dirigido a la exportación de materias primas de bajo valor agregado (Gudynas 2015). Este debate se ha enriquecido con la incorporación de nuevas dimensiones y temas. Se sumaron nuevos aportes desde la perspectiva ecoterritorial vinculada a la defensa de los territorios y de los bienes comunes, el indigenismo vinculado a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y a las nociones de buen vivir, y la ecología social y política, entre otros (Svampa 2016). Según Wanderley y sus colegas (2020), el saldo del mal desarrollo en forma de extractivismo también incluye un estancamiento de los avances sociales logrados y unas movilizaciones asociadas con ecofeminismo y la despatriarcalización.

En conclusión, es evidente que, a pesar de un doble discurso de desarrollo y protección de los derechos de la naturaleza, y de las mejores intenciones, ni Bolivia ni Ecuador han logrado escapar la maldición de los recursos: las contradicciones del capital. Por lo tanto, para los dos países, como los otros de la región —ambos subordinados al modelo neoliberal en sus economías políticas progresistas—, no hay respiro ni tregua en cuanto de los dilemas del desarrollo capitalista, incluido el bajo crecimiento económico a largo plazo, la persistencia de altos niveles de desigualdad y exclusión social, y la aceleración de la depredación y la destrucción desenfrenada del ecosistema. Estos son problemas asociados con economías exportadoras de recursos naturales en forma primaria subordinadas a los ciclos globales de demanda y precios. Son problemas relacionados con la dependencia de los gobiernos con el capital global y el capitalismo —una relación que mantiene a los gobiernos y la población subordinados a las fuerzas poderosas que generan.

La política del extractivismo: los límites del progresismo

Todos los progresistas promovieron el extractivismo como estrategia nacional de desarrollo, incluso en los casos de Ecuador y Bolivia donde el extractivismo ha entrado en una aguda contradicción con el concepto de buen vivir, consagrado en la Constitución del Estado plurinacional e intercultural.

La “revolución ciudadana” de Correa promueve esencialmente la profundización de un modelo de desarrollo capitalista basado en la minería, el petróleo y la energía hidroeléctrica. Durante la década de su administración, Correa adoptó como megaproyecto el petróleo y buscó préstamos del Banco Mundial para financiar el modelo de crecimiento agromineral, mientras reprimía con dureza el movimiento indígena (Conaie) y los movimientos sociales urbanos disidentes. Como se explica en el capítulo 5, esta represión se originó en la adopción de un modelo extractivista de desarrollo capitalista y por su dependencia de la IED para acumular el capital que se requiere para financiar su proyecto político. Esto ha resultado en una aceptación y dependencia que ha llevado al gobierno a ponerse de lado de las corporaciones multinacionales en el sector extractivo en su conflicto con las comunidades en la frontera extractiva.

Capítulo 4. Extractivismo y la cuestión agraria

El extractivismo como actividad económica arraigada en la extracción de recursos naturales del subsuelo, tiene una larga historia desde tiempos inmemoriales, no obstante, en la región podemos rastrear su historia desde el colonialismo europeo en el siglo xv. También fue una fuente importante de acumulación de capital y enriquecimiento (explotación imperialista) en el siglo xix. Pero lo que llevó al extractivismo al centro del debate político, y al eje del estudio académico, fue la expansión inusitada de los flujos de capital extractivo (inversiones en la extracción de recursos naturales para los mercados capitalistas) en la década de los noventa, y la aceleración de actividades como la minería a cielo abierto, la explotación de petróleo en los bosques tropicales y la difusión de los monocultivos en la agricultura. La incidencia del extractivismo desde entonces se ha multiplicado exponencialmente, lo que se refleja en el gran volumen de estudios, informes y análisis, que han generado. Muchos informes en este contexto han documentado los impactos destructivos de estos extractivismos en las comunidades locales y el medioambiente. Otros los defienden, proclamando sus beneficios económicos. Toda forma de apropiación de los recursos naturales es el centro de análisis de los estudios críticos del desarrollo, del debate político y de la movilización ciudadana. En este capítulo se aborda esta problemática, analizando el contexto del sector agrícola.

Se argumenta que en este contexto aparece lo que se puede llamar “extractivismo depredador” (Hollender 2016), que se refiere a la expansión de las actividades extractivas en la agricultura, la silvicultura y la pesca, y también el control extranjero de las tierras cultivables, el agua y los recursos del subsuelo.

Extractivismo como modalidad de acumulación y desarrollo

El extractivismo tal como lo entendemos es un modo específico de acumulación y una forma de pensar sobre el desarrollo, que a su vez puede entenderse como un proceso, es decir, en términos de la dinámica de la evolución del sistema capitalista o como un proyecto diseñado estratégicamente para mejorar la condición social del pueblo o una población. Así entendido, y con un enfoque central en regiones o países ubicados en la periferia de lo que se puede calificar como sistema capitalista mundial, el extractivismo se refiere a una estrategia de inversión de capital extranjero en la adquisición de tierras o la extracción de recursos naturales, con el propósito de exportar y con el fin de generar un excedente, el cual puede ser utilizado como una fuente de ganancias o como ingresos que se pueden invertir productivamente o utilizar para financiar el gasto público — programas de reducción de la pobreza, en los casos de los gobiernos progresistas. El “desarrollo” en este contexto se basa en la movilización del capital, un recurso productivo que puede utilizarse para generar riqueza de una forma u otra, y que normalmente y, de hecho, necesariamente se encuentra en alguna combinación. Esto incluye capital financiero (en forma de dinero), capital natural (en forma de recursos naturales), capital físico (fabricado e incorporado en la tecnología, la infraestructura física, los edificios, la maquinaria, etc.) y capital humano (en forma de conocimiento científico y tecnología social, capacidad de innovación).

En un estudio reciente de las Naciones Unidas (PNUMA, UNU e IHDP 2012), se constató que generalmente el nivel de “desarrollo” de una nación se correlacionaba positivamente con un alto nivel de desarrollo humano, y negativamente con una dependencia en el patrimonio de recursos naturales de un país, lo que algunos economistas interpretaron como evidencia de lo que otros han conceptualizado como una “maldición de los recursos” (Acosta 2009 y 2012).

En términos generales, el proceso de desarrollo capitalista se asocia con la transformación de una sociedad de agricultores o campesi-

nos, con una cultura tradicional de comunalismo y un sistema de relaciones de producción precapitalistas, a un sistema moderno industrial con base en la relación capital-trabajo, es decir, en el intercambio de trabajo o mano de obra por un salario. Lo central de este proceso es la transformación del campesinado —pequeños productores directos en un proletariado industrial—, un proceso planteado por los estudiosos en el área que han nombrado la “cuestión agraria”, que tiene que ver con la problemática de si el campesinado tiene un futuro en el mundo capitalista.

El término “extractivismo agrario” se ha vuelto cada vez más recurrente en la literatura extractivista latinoamericana, para comprender las nuevas dinámicas y trayectorias del cambio agrario y desafiar los discursos dominantes, que caracterizan la forma actual de agricultura capitalista como desarrollo agrícola industrial. Si bien esto último implicaría un procesamiento de valor agregado, vínculos sectoriales y generación de empleo, el término agroextractivismo revela la naturaleza propiamente extractiva de la agricultura capitalista (y la economía rural de producción agroalimentario, y de productos animales y forestales), para resaltar sus implicaciones negativas del desarrollo rural. Esta distinción conceptual tiene implicaciones importantes para nuestra comprensión del significado actual de la clásica cuestión agraria cada vez más corporativizada, particularmente en el contexto de la apropiación de tierras contemporánea, los cultivos flexibles y el sistema agroalimentario.

La cuestión agraria ha sido sujeto de un gran debate, primero en la década de los setenta y de nuevo en 2012 (Bartra 1976; Bernstein 2012; Otero 1999). Se aborda esta cuestión en términos de la interacción y la dinámica contradictoria de dos formas de capital: capital industrial, acumulado en el proceso de explotación de la clase trabajadora, y capital extractivo, que se obtiene en el proceso de explotación de la riqueza natural y la degradación del medioambiente. Como en toda coyuntura del desarrollo capitalista, estos dos tipos de capital no existen en forma aislada. El objetivo de este capítulo es analizar las dinámicas de la interacción de estos dos tipos de capital en el sector agrícola; es decir, de volver a la cuestión agraria en el contexto actual del desarrollo capitalista en América Latina.

Agricultura para el desarrollo: la cuestión agraria

La evolución del capitalismo implica la transformación de una sociedad agraria, caracterizada por una cultura comunalista y relaciones de producción precapitalistas, en un sistema industrial moderno basado en la relación capital-trabajo. Como teorizó Marx, el capitalismo en este contexto tiene su origen en un proceso de “acumulación primitiva” (la separación de los productores directos de sus medios de producción), y un proceso asociado que tiene que ver con la conversión del campesinado en un proletariado industrial y la explotación de la oferta ilimitada de mano de obra agrícola excedente liberada en el proceso de desarrollo capitalista.

Sin embargo, a pesar de la centralidad de la relación capital-trabajo en este proceso de desarrollo, la evolución del capitalismo, en cierta medida, también se basó en los avances del capital “extractivo” —inversiones en la extracción de los recursos naturales— y en la forma en que estas dos modalidades de acumulación (capital industria y capital extractivo), en diferentes contextos regionales e históricos, se combinan en el proceso de desarrollo capitalista.

Resulta que la agricultura jugó y sigue desempeñando un papel crucial en el desarrollo del capitalismo, básicamente al proporcionar una fuerza laboral para la expansión de la economía capitalista basada en la industria moderna. Pero también ha sido un factor crítico en la evolución del capitalismo en la periferia del sistema, en la configuración de la geoeconomía del capital en diversos contextos regionales. En el caso de América Latina, esto implica la destrucción de las fuerzas productivas acumuladas en el sector industrial bajo los auspicios del estado de desarrollo. También implica una dependencia relativa en la extracción de recursos naturales, incluyendo productos agroalimentarios, y su exportación en forma primaria o con muy poco valor agregado por la mano de obra en el procesamiento de estos recursos.

Un resultado del desarrollo capitalista de la agricultura en condiciones de la periferia del sistema mundial —aparte de su papel como ex-

portador de materias primas y la transformación del campesinado en un proletariado—, es la formación de un semiproletariado de trabajadores rurales sin tierra, y la persistencia de la pobreza rural en condiciones de expansión de la agricultura. La vitalidad del sector resulta de la reproducción de una economía campesina de productores pequeños, orientados a la producción de alimentos para el mercado local. A pesar de los avances de capital en la agroindustria y la sobreconcentración de la propiedad en la tierra —en muchos casos, más del 70% de la tierra cultivable aún permanece en manos de una oligarquía de grandes terratenientes y filiales multinacionales—, el agricultor campesino continúa siendo un factor muy importante en el ámbito local y la economía nacional. En muchos casos representa hasta el 70% de la producción de alimentos destinados a los mercados locales. En términos generales, la economía campesina de la producción de alimentos para los mercados locales se combina con la agroindustria, cuya producción se destina a los mercados capitalistas.

Acaparamiento como mecanismo de acceso y despojo

En la extracción de hidrocarburos y en la megaminería, las dinámicas asociadas con el desarrollo de las fuerzas de producción por parte de los gobiernos anfitriones implican otorgar a las multinacionales una licencia para exploración, y un contrato para operaciones y ventas del producto. Por esta razón, la extracción de los recursos destinados a los mercados capitalistas depende de la relación entre el Estado y el capital; y la resolución de cualquier conflicto relacionado con los impactos socioambientales negativos y los reclamos de las comunidades también depende de esta relación. En este sentido, la dinámica del desarrollo y resistencia en la agricultura tiene diferentes modalidades a la de los otros sectores de la economía de enclave, formada en la frontera extractiva para obtener acceso a recursos y, de hecho, exprimir incluso la sangre del sudor y las lágrimas de los pobres del campo.

En la agricultura, el mecanismo que proporciona al capital acceso a los recursos en bruto es el *acaparamiento*: la inversión a gran escala de capital extranjero en la adquisición de tierras cultivables o productivas. Borrás *et al.* (2012) estiman que desde 2007 los inversores extranjeros han adquirido unas 220 millones de hectáreas de tierra cultivable, lo que les permite extraer los productos agrícolas requeridos por los consumidores en los países del norte global sin que los inversores tengan que ingresar al mercado, importar o comprar los productos de pequeños productores y agricultores.

De esta relación también depende la resolución de cualquier conflicto relacionado con los impactos negativos socioambientales y reclamos de las comunidades. Con respecto a esto, la dinámica de desarrollo y de la resistencia en la agricultura —las dinámicas de agroextracción, digamos—, tiene modalidades distintas, particularmente en relación con el problema de obtener acceso a los recursos y el derecho de extraerlos.

Un ejemplo de esto es la economía política de la producción de soja en América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y, en particular, Paraguay, donde 60-70% de la tierra agrícola se ha convertido de la producción de alimentos destinado a los mercados locales a la producción de soja, para exportarlo a los mercados capitalistas en forma de agro- o biocombustibles (Ezquerro 2016).²⁷ En la cosecha de 2010, la soja abarcó el 66% de la tierra cultivada en Paraguay, el 59% en Argentina, el 35% en Brasil, el 30% en Uruguay y el 24% en Bolivia.

En el caso de Uruguay, otro estado de la República de la Soja,²⁸ también ha convertido una gran parte de la tierra cultivable para la pro-

²⁷ La soja se encuentra en la intersección entre agroextractivismo y agroindustria. Paraguay exporta la mayor parte de la producción de soja en forma primaria o cruda, pero Brasil, el segundo mayor productor mundial de biocombustibles líquidos en el mundo, cuenta con una configuración sociotécnica integral de biocombustibles y una cadena completa desde la producción de caña de azúcar y etanol hasta combustible híbrido para automóviles, que funcionan con biocombustibles, con el apoyo de subsidios gubernamentales, un sistema regulatorio, investigación técnica y arreglos financieros (Novo *et al.* 2010).

²⁸ Sobre la República de Soja, véase Gudynas (2008). Para el caso de la economía política de la soja en Argentina, véase Giarraca y Teubal (2015); y para el caso paradigmático de Paraguay, véase Ezquerro (2016).

ducción de soja. En Bolivia, la soja es el cultivo máspreciado con casi 14 000 productores y 45 000 trabajadores —es decir, más que los involucrados en la producción de coca, la forma tradicional de agroextracción.

En Argentina, la producción de soja comenzó en la década de 1970. En 1980, se produjeron 3.7 millones de toneladas, lo que representa el 10.6% de la producción total de granos de Argentina. La producción aumentó a 11 millones de toneladas entre 1996-1997, cuando los transgénicos fueron “liberados” al mercado, y a 46.6 millones de toneladas entre 2007-2008. Bajo el mandato de los Kirchner (2003 a 2009), la soja creció de 12.4 millones de hectáreas a cubrir 18 millones. Ambos mandatarios alentaron la expansión del monocultivo de soja orientado a la exportación, y cobijaron el uso de variedades transgénicas, que también causó conflictos con los productores pequeños y campesinos enfocados hacia los mercados locales, quienes lucharon por prácticas más sostenibles. Con el fin de la administración de los Kirchner, la cosecha de soja de 2012-2013 fue de 50 millones de toneladas, lo que representaba más de la mitad de la producción total de granos de Argentina (Giarracca y Teubal 2015). Ahora más del 95% de la producción agrícola en el país se basa en semillas transgénicas con destino a las exportaciones. Actualmente, Argentina es uno de los tres principales exportadores de soja en el mercado mundial —exportada en forma primaria o procesada en forma líquida para el consumo en forma de frijoles, aceite y biocombustible (Giarracca y Teubal 2015, 54-55).

En la actualidad, la soja ocupa más de 20 millones de hectáreas de tierras de cultivo, que representan más de la mitad de la tierra cultivable de Argentina y el 18% de la producción mundial de soja. Un mapa construido por *La Angostura Digital* (<http://laangosturadigital.com.ar>) muestra la extensión y el grado de control extranjero del territorio nacional de Argentina. Según el mapa, casi 30 millones de hectáreas de las mejores tierras, suelos fértiles, cuencas hidrográficas, reservas naturales y reservas de minerales estratégicos en veintitrés provincias son de propiedad extranjera, y otros 13 millones de hectáreas están actualmente a la venta.

Esta condición es típica, con variaciones en los otros estados de la República de la Soja. Es una consecuencia importante del acaparamiento, que en la actualidad representa una característica importante y típica del agroextractivismo en todo el mundo (Borras *et al.* 2012). Otras dimensiones y consecuencias de este proceso de acaparamiento incluyen:

1. La privatización y la mercantilización de la tierra, y con ella la transformación de un sistema de derechos consuetudinarios, con respecto al uso de la tierra en títulos legales de propiedad privada de la tierra.
2. La racionalización del uso de tales propiedades demarcadas como una forma de capital (tierra como mercancía) al servicio de la acumulación de capital “por desposesión”.
3. La reducción del espacio disponible a los productores pequeños en la economía campesina —producción de alimentos para los mercados locales.
4. Formación de un nuevo “cercado”, que resulta en la separación de los productores pequeños de sus medios de producción y el abandono forzado del campo.
5. El abandono del campo causado por la degradación ambiental y social —la contaminación perniciosa del medioambiente y la salud de los habitantes de las comunidades en proximidad a las operaciones de agroextracción y de la agroindustria.
6. La expulsión de las poblaciones de la agricultura y de las zonas rurales (en su mayoría campesinos y agricultores de pequeña y mediana escala, y trabajadores rurales sin tierra). Al respecto, el proceso de sojización implica la desaparición de las granjas y la reducción del espacio disponible para la economía campesina, y la producción de alimentos orientados al mercado local.
7. La proletarianización de los campesinos y los productores agrícolas directos, lo que funciona (según David Harvey) como un mecanismo de “acumulación por desposesión”.
8. Una disputa por los territorios y la tierra cultivable, y la lucha de los productores pequeños y campesinos para sus derechos ecoterritoriales.

La agroextracción y el agronegocio

Antes de entrar en el tema de la agroextracción y su relación con la agricultura industrial, vale la pena, y de hecho es necesario, discutir brevemente el capital industrial y extractivo como dos modalidades distintas de acumulación. Aunque ambas modalidades dependen de la explotación del trabajo y la naturaleza, la segunda requiere cada vez menos mano de obra, ya que el desarrollo se basa cada vez más en avances de alta tecnología, que acentúan la intensidad del capital y la composición orgánica del capital. Esto implica que el conocimiento científico y la innovación tecnológica como fuerza de producción es mucho más “productiva” (en cuanto la tasa de productividad o el desarrollo), y, por lo tanto, la división internacional es muy desfavorable para los países que se encuentran en la periferia del sistema mundial.

En lugar de que se transfieran suministros ilimitados de mano de obra (trabajo) rural excedente al sector industrial, para efectuar una transformación productiva y social, el capitalismo extractivo en el contexto actual está generando un volumen de fuerza laboral y mano de obra que es excedente en relación con su utilidad para el capital (Li 2009). En otras palabras, en lugar de tener una reserva de trabajo que podría mantener deprimidos los salarios y que la acumulación de capital dependa en gran medida de la explotación laboral, la coyuntura actual se caracteriza por uno en el que el lugar o sitio de extracción (o sus recursos) son muy útiles para la acumulación, “pero las personas no lo son, para que el despojo se separe de cualquier perspectiva de absorción laboral” (Li 2009, 69).

En la actualidad, el capital extractivo es más prominente en los países en desarrollo, aunque Estados Unidos y Europa también han experimentado un proceso de desindustrialización y erosión de la clase media, a medida que las industrias manufactureras se trasladan a otras regiones con menores costos de producción, es decir, mano de obra más barata, como China. Desde el advenimiento de la globalización neoliberal en la década de 1980, los países en la periferia del sistema mundial han experimentado una caída en la participación manufacturera tanto en el

empleo como en el valor agregado, erosionando las ganancias que obtuvieron de las políticas de sustitución de importaciones en las décadas de 1950 y 1960, lo que se conoce como “desindustrialización prematura” (Dasgupta y Singh 2006; Rodrik 2016). Esto coincidió con la expansión de las actividades vinculadas al sector extractivo y un proceso de primarización de las exportaciones, facilitado por las políticas neoliberales de privatización, desregulación y liberalización del comercio, e impulsado por varias fuerzas de cambio y condiciones que convergieron para aumentar el peso del capital extractivo en el proceso de desarrollo.

Es casi imposible calcular con precisión la magnitud de los beneficios económicos asociados con la exportación de productos agroalimentarios y de biocombustibles, en medio de un auge de productos primarios y mercados en expansión. Pero, dado que en el sector agrícola ni el capital industrial ni el extractivo tienen que compartir las rentas apropiadas con el Estado, las rentas que en otros sectores extractivos (combustibles fósiles, minerales y metales) son sustanciales en forma de pago de regalías, los indicios indican que las ganancias asociadas con las exportaciones de productos básicos en el sector agrícola son tan altos como en otros sectores extractivos. Véase, por ejemplo, el informe del *Financial Times* del 18 de abril de 2013, que documentó el hecho de que los comerciantes de instrumentos financieros relacionados con las materias primas agrícolas, que están en la cima de la cadena de extracción de plusvalía o cerca de ella, habían acumulado grandes reservas de capital en el contexto de la actividad primaria y el auge de las materias primas.

Dinámicas de la agricultura industrial

Lo que domina la agricultura en América Latina es la intersección de capital extractivo e industrial en el desarrollo de las fuerzas de producción en el sector. El Informe de Evaluación Internacional del Conocimiento Agrícola, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (IAASTD 2009, 563-564), define la agricultura industrial como una “forma de agricultura que requiere mucho capital, sustituyendo maquinaria e insumos com-

prados para el trabajo humano y animal”. Está altamente mecanizado y especializado, a menudo basado en el cultivo de monocultivos de gran escala, dependiente de insumos externos industrializados y controlado bajo la producción del sector privado en contextos capitalistas. La transformación industrial de la agricultura, primero mediante la mecanización que redujo la necesidad de mano de obra, luego mediante la difusión de semillas híbridas y genéticamente modificadas, y finalmente la dependencia de los agroquímicos, ha llevado a “una serie de apropiaciones parciales y discontinuas de mano de obra rural y procesos de producción biológica” (Goodman, Sorj y Wilkinson 1987, 2).

La industria no sólo ha transformado la producción agrícola en su forma técnica, sino que también ha cambiado las configuraciones particulares de las relaciones productivas y las formas de apropiación del proceso productivo. Esto ha surgido a través de nuevas formas de uso de la tierra y control de la cadena de valor, que excluyen a la mayoría rural, y en el proceso de producción extraen valor (la riqueza de los recursos naturales) incorporados en la “naturaleza”. Una de las principales formas de control ha sido a través de la concentración del mercado y la consolidación de las compañías de semillas y productos químicos, lo que ha llevado a un oligopolio de mercado controlado en gran parte a nivel mundial por sólo cuatro corporaciones: BASF, Bayer (Monsanto), ChemChina (Syngenta) y DowDuPont. Juntas, estas compañías controlan el 75% del mercado mundial de agroquímicos, el 63% del mercado comercial de semillas y más del 75% de la investigación del sector privado en semillas y pesticidas (Grupo ETC 2015, 4).²⁹

Más que la mercantilización y el control de los insumos agrícolas, los “cuatro grandes” también controlan el acceso a la información

²⁹ Esta condición de capital monopolio en el sector agrícola en América Latina, refleja la dinámica global de una concentración de capital en forma de conocimiento científico e innovación tecnológica. Una representación visible de esta dinámica es Silicon Valley, pero en América Latina esta dinámica aparece como la nueva economía política de la agricultura, basada en la expansión y el avance del capital extractivo en el contexto de formación de una economía de la soja en el suroeste de Brasil y el norte de Argentina, así como más recientemente en Bolivia, Paraguay y Uruguay.

y las innovaciones (sobre esto, véase a Delgado Wise [2018]). Combinados, sus presupuestos para investigación y desarrollo agrícola (I + D) son veinte veces mayores que los del Consorcio de Centros Internacionales de Investigación Agrícola (CGIAR), y quince veces el presupuesto del Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para la investigación en ciencias de los cultivos, dándoles un control significativo sobre la industria agrícola (Grupo ETC 2015). Como argumenta Kloppenburg (2004, 10), la investigación agrícola ha sido “un medio importante para eliminar las barreras a la penetración de la agricultura por el capital”, al mercantilizar los insumos agrícolas y desplazar las actividades productivas fuera de la granja hacia un entorno industrial.

La industrialización de la agricultura se ha intensificado aún más a través de la mercantilización y financiarización de la tierra y la agricultura, ya que los actores nuevos y viejos se dedican cada vez más a la especulación y la cobertura. Esto no sólo ha reforzado las relaciones desiguales de poder existentes entre los agricultores, los agronegocios y los nuevos actores financieros muy alejados de la producción, sino que ha llevado a una mayor volatilidad de los precios de los alimentos en los mercados internacionales (Isakson 2014).

Esta concentración y control del mercado tiene implicaciones importantes para el medioambiente y las poblaciones rurales, especialmente los pequeños agricultores campesinos pobres en capital que se ven desplazados del proceso de producción y obligados a migrar. La agroindustria integra a los agricultores en sus procesos de producción y cadenas de valor, lo que requiere el uso (y la compra) de ciertas semillas e insumos químicos (aguas arriba), para cumplir con los requisitos estandarizados del mercado (aguas abajo) controlados por el mismo oligopolio del mercado agroindustrial. Estos nuevos arreglos institucionales vinculan a los agricultores con ciclos de deuda y dependencia, alterando su relación y acceso a la tierra, y otros factores de producción de formas más sutiles que el despojo físico o el desplazamiento (McKay 2018).

Todo esto plantea preguntas importantes sobre el grado en que la agricultura industrial realmente conduce a una forma de desarrollo

industrial de valor agregado en el campo, y dónde y quién se apropia el plusvalor y las rentas. En lugar de un proceso de industrialización, la agricultura industrial demuestra ser de carácter extractivo, ya que el proceso industrial se lleva a cabo en los componentes aguas arriba y aguas abajo de la cadena de valor en lugares lejanos y controlados por oligopolios corporativos. Referirse a este tipo de desarrollo agrícola como agricultura industrial es engañosa tanto analítica como políticamente y, por lo tanto, requiere una nueva conceptualización que enfatice estas características extractivas.

La agropecuaria y el neoextractivismo

Aunque la tendencia es asociar el extractivismo con la gran minería, la agricultura también es un gran campo para la extracción de recursos naturales y su exportación en forma primaria —es decir, para el extractivismo como lo entendemos ahora. Los primeros campos de agroextracción eran las plantaciones de azúcar, tabaco, café, cacao, palma y frutos tropicales, como el plátano, en el Caribe, Brasil, México y Centroamérica —explotados en condiciones de relaciones de producción precapitalista, con trabajo forzado y esclavitud.

En los años ochenta y noventa del siglo xx, el advenimiento de un nuevo orden mundial de gobernanza neoliberal (desregulación de los mercados, eliminación de las barreras al comercio libre, liberalización del movimiento y los flujos de capital), fue acompañado de una expansión de capital extractivo y las inversiones extranjeras en la adquisición de tierra cultivable (el acaparamiento), a propósito de mejorar el acceso a productos de agroextracción con una alta demanda en los mercados. En estas condiciones, la producción agrícola y pecuaria en América del Sur continúa expandiéndose, en particular aquella que está orientada a la exportación. Como observó Gudynas (2010, 37), las nuevas formas de producción y agroextracción son cada vez más intensivas y con mayores impactos territoriales, y por eso se asemejan más y más a otras formas de extractivismo: “intensas, amplias y masivas apropiaciones de recursos naturales que son

destinados a los mercados globales. De esta manera, la agropecuaria queda inmersa en procesos productivos que se asemejan a los que se observan en la minería o los hidrocarburos, caracterizados por economías de enclave”. “Sorpresivamente”, señala Gudynas, “este proceso ocurre bajo gobiernos que se definen como progresistas o de izquierda”, tanto como los gobiernos que seguían la línea neoliberal en su política (sorpresivamente, porque los partidos políticos de izquierda durante décadas habían denunciado el extractivismo y la formación de economías de enclave). Sin embargo, “este extractivismo es de un nuevo tipo, difiriendo en varios aspectos del que antes practicaban los gobiernos conservadores, y donde la asistencia social y lucha contra la pobreza juegan papeles importantes” (Gudynas 2010, 37). Y como en los casos de estos gobiernos conservadores, los nuevos atributos de agroextracción —el neoextractivismo progresista en América del Sur, lo que Gudynas describe como “capitalismo benévolo”— originan nuevas contradicciones y una ola de conflictos para la agropecuaria (Barski y Dávila 2008; Giarracca y Teubal 2015).


Conclusión

El análisis de la dinámica contemporánea de la extracción agrícola, lleva a concluir que Bernstein (2010, 82-84) fue sustancialmente correcto en sus proposiciones sobre el impacto de las operaciones de capital extractivo en la agricultura y la naturaleza de la cuestión agraria en el siglo XXI. Bernstein propuso que el comercio neoliberal y las políticas de liberalización financiera, implementadas en el marco del Consenso de Washington sobre las virtudes del capitalismo de libre mercado, conducirían a lo siguiente: 1) un cambio en el patrón mundial del comercio de productos agrícolas; 2) la creciente demanda de recursos naturales en el mercado mundial y el comercio de futuros de productos agrícolas (es decir, la especulación estimulada por el financiamiento), lo que llevaría a un aumento en el precio de los productos agroalimentarios y la inversión extranjera de gran escala en la adquisición de tierras con fines extractivos; 3) la concentración de capital en la industria agroalimentaria, marcada

por fusiones y adquisiciones; 4) el impulso de estas corporaciones para patentar los derechos de propiedad intelectual en material genético, que tendría un impacto devastador en el medioambiente, la salud de la población rural, la biodiversidad en la producción agrícola, los medios de vida basados en la producción rural y la agricultura a pequeña escala, y el acceso a pequeños agricultores familiares y campesinos para semillas y seguridad alimentaria; y 5) la formación de una nueva frontera de beneficios de la producción de agrocombustibles dominada por las corporaciones agroindustriales, lo que causa pérdida de seguridad alimentaria y soberanía.

Bernstein planteó una serie de consecuencias negativas del modelo agroindustrial corporativo y la creciente importancia asignada a las empresas transnacionales en la cadena de plusvalía global. Como afirman Acosta (2012) y Teubal y Palmisano (2012), el extractivismo en el sector agrícola es altamente rentable. Sin embargo, también es muy costoso en términos de los impactos socioambientales que asumen las poblaciones y comunidades contiguas a los sitios de actividades extractivas. Estos costos socioambientales son inherentes al extractivismo y, como sostienen Teubal y Palmisano, el proceso de despojo asociado con la expansión del capital extractivo aumenta el poder de los grandes terratenientes y las corporaciones multinacionales en los agronegocios.

Este “desarrollo”, facilitado por las políticas implementadas por los gobiernos orientadas a un modelo extractivo de desarrollo agrícola, también tiene que ver con los regímenes progresistas y su política neoextractiva. En este contexto, el capital no sólo encuentra una manera de superar la barrera que la agricultura ha presentada históricamente para la expansión del capitalismo, también resulta en la expulsión de los productores pequeños orientados al mercado local, reduciendo el espacio disponible para sus cultivos. De hecho, como sostiene Svampa (2015), funciona como un mecanismo para cercar el bien común y avanzar en la acumulación de capital. Otra conclusión que se saca del análisis de la dinámica del extractivismo agrícola, es que cada avance del capital en el proceso de desarrollo genera fuerzas de resistencia. El resultado de esto se analiza en el próximo capítulo.



Capítulo 5. Sangre de extracción: del infierno subterráneo al cielo abierto

Desde la conquista de los pueblos originarios y la época colonial, el desarrollo de América Latina ha sido impulsado por una estrategia de extracción de riqueza de los recursos naturales para beneficiar principalmente al poder imperial. En el contexto del colonialismo europeo, los recursos naturales de mayor interés para su mercantilización fueron el oro y la plata, aunque algunos productos de agroextracción, como frutas tropicales, sal y algodón, también ingresaron a los circuitos del capital mercantil y la explotación imperialista. Desde el comienzo, el extractivismo —o los extractivismos, según Gudynas (2020)— se centró en lo que podemos llamar la “gran minería” —primero en el infierno de las minas subterráneas, y después de varios siglos (en tiempos de la era neoliberal) en minas de cielo abierto. En cierta medida, la historia del desarrollo de las fuerzas de producción en la región ha sido la historia de la minería: en la época colonial, los Altos de Potosí en Bolivia llegó a ser uno de las ciudades más grandes y pobladas en el mundo, sostenida por la minería de plata; también en México (Zacatecas, etc.) y en el desierto chileno con el descubrimiento de las mayores reservas de cobre en el mundo, una historia ignominiosa de subyugación, explotación y subdesarrollo. En este capítulo se pretende reconstruir elementos claves y ejemplares de esta historia en el contexto de la minería.

El contexto histórico

Existe una confusión en los debates sobre extractivismo acerca de los conceptos de capitalismo e imperialismo. En muchas investigaciones y

publicaciones, los dos conceptos no están relacionados o se ven como intercambiables, cuando en realidad se refiere a dinámicas estrechamente relacionadas pero distintas. Por un lado, el capitalismo es un modo de producción con una dinámica de acumulación y explotación de la fuerza de trabajo; el imperialismo, por otro lado, se refiere a los poderes del Estado puesto en servicio de capital para establecer las condiciones necesarias para su acumulación y expansión en el proceso del desarrollo. Como ejemplo de esto, el Estado canadiense ha desempeñado en los últimos años un rol importante en la garantía de los avances del capital extractivo canadiense. Sobre este tema, véanse Tetreault (2013) y Gordon y Webber (2008), quienes han investigado las diversas modalidades y los mecanismos particulares del rol del gobierno canadiense en términos de imperialismo extractivo. Según estos investigadores, el rol imperialista del gobierno se manifiesta de diversas maneras, incluyendo el desvío de fondos de cooperación internacional para beneficiar y ayudar a las compañías mineras canadienses a defenderse de las fuerzas de resistencia, y avanzar en un modelo de autorregulación para facilitar sus operaciones en el sector de acuerdo con el esquema de responsabilidad social empresarial (RSE).³⁰

Sobre el rol del gobierno canadiense en la promoción de la RSE como estrategia de autorregulación y, por lo tanto, como una alternativa al modelo de regulación estatal presentado por los regímenes posneoliberales en América del Sur en su concepción de “extractivismo progresivo”, véase Kuyek (2007). En el marco de esta estrategia de RSE, las empresas mineras canadienses han recibido apoyo financiero directo de la agencia Export Development Canada (EDC) para sus operaciones en el extranjero en forma de seguros y préstamos. Por ejemplo, en 2008 EDC facilitó las actividades extractivas canadienses en América Latina por una suma de cuatro mil millones de dólares (Kuyek 2007, 208). A

³⁰ Este modelo de desarrollo sostenible y RSE que establece la necesidad de una gestión vital del sector privado, denominado por sus arquitectos “crecimiento inclusivo”, fue construido por diversos *think tanks* conservadores y neoliberales. Pero la versión canadiense (Government of Canada 2012) puede considerarse paradigmática.

través de la Agencia Canadiense de Cooperación Internacional (CIDA), el gobierno implementó en 2011 una política de cofinanciación de programas de responsabilidad social corporativa en las proximidades de las operaciones mineras canadienses en los países en desarrollo. Por lo tanto, Canadá comprometió 6.7 millones de dólares a proyectos piloto de RSE en Burkina Faso, Ghana y Perú, esencialmente para compensar a los lugareños por la destrucción ambiental y el alza o levantamiento social causado por las actividades mineras altamente rentables de IAMGold, Rio Tinto Alcan y Barrick Gold, respectivamente. Además, CIDA comprometió veinte millones a una iniciativa RSE en la región Andina (Bolivia, Colombia y Perú, para ser específicos), con el objetivo de “fortalecer la capacidad de los gobiernos y comunidades locales para implementar proyectos de ‘desarrollo sostenible’ y ‘mejorar el diálogo entre comunidades y el sector privado’”.

Empresas canadienses en la gran minería, así como el gobierno de Canadá, el guardián de los avances de capital en el sector, además de gobiernos en América Latina alineados con este capital (incluso los progresismos de Correa en Ecuador y de Morales en Bolivia), a menudo han tachado a las activistas en el sector como criminales, incapaces de entender que todo el mundo se beneficia de sus megaproyectos y sus operaciones de extracción. Sin embargo, desde la perspectiva ecológica o del concepto de buen vivir, esto es obviamente falso. Las grandes empresas multinacionales son las que se han podido apropiarse de gran parte de los beneficios de la explotación y el “desarrollo” de los recursos, y, hasta cierto punto, los gobiernos también se han podido apropiarse de una porción creciente de las rentas, con pocos beneficios pero a un gran costo para las comunidades y los trabajadores. Sobre este punto, Gudynas (citado en Cisneros 2011) enfatiza que la minería es el sector con la tasa de rentabilidad más alta del mundo con 37% —pero al mismo tiempo extremadamente destructiva para el tejido social y ambiental de las comunidades afectadas, y, de hecho, para el medioambiente y el sistema que sustenta la vida en el planeta. Por ejemplo, EnCana, una compañía canadiense de petróleo y gas, tenía el proyecto de construir un oleoducto a través de la Amazonía ecuatoriana que amenazaría a todo el ecosistema y representaría un grave

riesgo de derrames de petróleo. Pero una movilización masiva de los pueblos amenazados finalmente obligó a la compañía a retirarse de Ecuador en 2006. EnCana afirmó que Ecuador había sucumbido a la “enfermedad de Chávez” (Gwyn Morgan, citado en Gordon 2010, 232).

Al final, esta enfermedad se extendió a Chile, donde Barrick Gold, otro actor importante en la minería (particularmente para la extracción de oro), buscó expandir la controvertida mina Pascua Lama, cuyas operaciones anteriores a ambos lados de la frontera Chile-Argentina causaron graves daños ambientales a la economía indígena, contaminando el agua de la que dependían las comunidades. De encontrar un régimen más plegable en el gobierno progresista de Cristina Fernández de Kirchner, la compañía había trasladado algunas de sus operaciones de lavado de agua al lado argentino de la frontera. Aun así, Barrick fue condenado por el gobierno de Chile por violar 33 leyes ambientales en sus planes de minas, que incluían el traslado de tres glaciares de agua prístina para obtener un mejor acceso a los depósitos, como si estos glaciares no fueran elementos cruciales del ecosistema del desierto de Atacama. Para las setenta mil personas que viven en la región, los glaciares son una fuente importante de agua, ya que las precipitaciones son limitadas. Además de recurrir al uso de grandes cantidades de agua glacial (las aguas más prístinas del mundo), Barrick también planeó utilizar el proceso de lixiviación de cianuro, un proceso químico por el cual los minerales se separan y que presenta grandes problemas tanto para la minería a cielo abierto como bajo tierra. Los procesos modernos de lixiviación utilizan grandes cantidades de agua, a menudo privando a las comunidades locales del agua que necesitan para actividades agrícolas a pequeña escala. Además, el proceso deja cantidades significativas de arsénico y otros químicos tóxicos en los sistemas de agua alrededor de sus operaciones. Otras investigaciones en el sector —por ejemplo, las de Giarracca y Teubal (2015) en el caso de Argentina, y de Tetreault y sus asociados (2015) en el caso de México—, nos muestran un desarrollo similar.

Estos hechos, junto con casos mineros ampliamente publicitados en Perú, como Chile, un país minero clásico, indican que el acaparamiento de agua, un factor crítico no sólo en la minería sino también en

la agricultura, representa una nueva dimensión de la crisis global del sistema capitalista. Se estima que la escasez de agua potable, resultado de un proceso de acaparamiento y de la mercantilización y extracción, es un problema que ya afecta hasta una cuarta parte de la población mundial, con un profundo impacto no sólo en la dinámica del desarrollo sino en la resistencia. La tierra fue el objeto central de la lucha de clases en el siglo xx; en el siglo xxi se estiman que será el agua.

Aparte de la resistencia indígena, es probable que la frontera extractiva en la minería sea testigo de un levantamiento general de los oprimidos tanto en Perú como en toda la región, con la escasez de agua actuando como catalizador. A través de la legalización letal de la minería intensificada, el estado está exacerbando la crisis inminente de agua. Se estima que cada año la minería y la metalurgia liberan más de 13 mil millones de metros cúbicos de efluentes en las vías fluviales del Perú. Debido a esta contaminación del agua que obliga a comuneros abandonar sus comunidades, muchos peruanos que no pueden irse sufren enfermedades mortales; y en los Andes centrales, por ejemplo, la contaminación de los ríos por arsénico y otros metales pesados está causando enfermedades cancerígenas entre los adultos y niños. Trágicamente, los niños son los más vulnerables a los efectos agudos y crónicos de la ingesta de metales pesados y arsénico. Esto se debe al hecho de que los niños consumen más agua por unidad de peso corporal que los adultos.

No obstante, a pesar de los altos delitos medioambientales cometidos por empresas mineras como Barrick, y a pesar de la ola de protestas y conflictos que caracteriza el sector (49 en Chile en los años 2010-2016, una incidencia excedida sólo por México con 58 casos, y Perú sigue con 46 casos), no hemos visto muchas movilizaciones exitosas para bloquear las operaciones destructivas de capital minero. La lista de operaciones tóxicas del capital canadiense es extensiva —particularmente en América Latina, donde la minería canadiense se concentra.³¹ Por ejemplo, la represa de Chalillo en Belice, un proyecto de Fortis Inc., otra compañía

³¹ Sobre esto (el dominio del capital canadiense en el sector de la minería de metales), véanse Gordon (2010), Gordon y Webber (2008), y Veltmeyer (2012).

minera canadiense, envenenó el agua utilizada por las comunidades e inundó templos antiguos de los mayas, amenazando no sólo a varias especies de fauna sino a los pueblos indígenas.

Estos y otros megaproyectos destructivos han dado lugar a innumerables brotes de conflicto y enfrentamientos entre las empresas y las comunidades indígenas, que han sobrevivido a cientos de años de explotación imperialista y capitalista, y en las condiciones de desarrollo capitalista en el contexto actual buscan proteger lo que queda de su acceso a la tierra y reclamar sus derechos territoriales. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) ha documentado la extensión y la intensidad de estos conflictos. Su informe de 2018 documentó 284 conflictos publicados en el sector en 2017, con 301 proyectos en los que participan 234 comunidades en 20 países (OCMAL 2018). México tuvo el mayor número de conflictos (58), seguido por Chile (49), Argentina (28), Brasil (26) y Colombia (19).

Después de años y años, hasta siglos, de las operaciones destructivas del capital minero, con una intensidad acelerada en el contexto actual, no queda mucho espacio y oportunidad de buscar un entendimiento entre el capital extractivo y las comunidades indígenas sobre cómo proteger los derechos de la madre tierra y la naturaleza. El alcance y la totalidad de los impactos negativos y destructivos de los megaproyectos en la gran minería, ponen en peligro tanto el acceso de las comunidades al bien común y su modo de vivir, como su misma existencia; esto es aterrador al extremo, en particular en vista de la crisis climática, por no hablar del covid-19.

Del imperialismo y colonialismo al capitalismo extractivista

La problemática y la narrativa histórica sobre el extractivismo no tienen sus raíces en los orígenes del sistema capitalista, como muchos piensan, sino en lo que podemos llamar imperialismo; esto en el contexto de

la conquista europea de los pueblos indígenas del Nuevo Mundo y sus consecuencias a largo plazo, incluso la subyugación y superexplotación de los pueblos originarios que fueron desposeídos de sus tierras y marginalizados, además de utilizarlos como fuente de trabajo forzoso; y el saqueo y pillaje de la riqueza de los recursos naturales, tanto renovables como no renovables.

De manera general, ya hemos contado la triste historia de esta subyugación y explotación de la fuerza de trabajo y de la riqueza natural. Hay muchas narrativas de esta historia y de la prehistoria de los pueblos originarios en América, pero en su esencia —en términos del desarrollo entendido como la expansión de las fuerzas de producción— consiste en la extracción de recursos productivos, la mercantilización de estos recursos, la apropiación del excedente en forma de plusvalor, principal fuente de capital acumulado en el proceso, y la renta del suelo y subsuelo, que permitieron al Estado participar en la distribución y el reparto de botín. Según diversas narraciones, la totalidad de este excedente año tras año, y siglo tras siglo, ha sido enorme, suficiente para sostener a una gran parte de la clase dominante.

Para tener una mejor idea de lo que aquí se trata, resulta importante presentar unos estudios de caso más relevantes sobre el extractivismo en la megaminería y en la extracción de hidrocarburos, con el fin de exportarlos en forma primaria a los mercados capitalistas.

La megaminería en el caso de México³²

Siendo uno de los diez principales productores de hasta dieciséis diferentes minerales y metales, como el oro, y primer productor mundial de plata desde los tiempos coloniales, México es un país clásico minero

³² Esta sección toma elementos de Tetreault (2015). En la actualidad, la minería en México no tiene el peso en la economía que tiene, por ejemplo, en Perú y Chile, países mineros paradigmáticos. Sin embargo, la minería tenía un gran peso en la época colonial, y en la actualidad México ocupa un lugar prominente en la resistencia a la expansión de la frontera extractiva en el sector minero y en la incidencia de conflictos.

y lo ha sido por casi quinientos años. Los recursos minerales de México han sido codiciados desde la Conquista. Cuando Hernán Cortés partió a conquistar el territorio azteca en 1519, su misión era “rescatar oro” de los nativos. Al llegar a Tenochtitlán, en la Ciudad de México, le dijo al rey azteca Moctezuma que los españoles sufrían de una peculiar enfermedad que sólo el oro podía curar. En cierto sentido, esto era cierto: los conquistadores, así como los nobles y banqueros que los financiaban, estaban enfermos de codicia. El oro que adquirieron, sin embargo, parecía sólo exacerbar esta enfermedad, lo que llevó a una serie de atrocidades cometidas contra la población indígena.

Después de confiscar el oro azteca, los conquistadores comenzaron a explorar la Nueva España en busca de valiosos yacimientos minerales y no tardaron mucho en encontrarlos, sobre todo en la forma de plata. La primera mina de plata fue encontrada en Taxco en el centro de México, apenas dos años después de la caída de Tenochtitlán. Un par de décadas más tarde, se descubrieron ricos yacimientos hacia el norte, en Zacatecas (1546), Real de Monte (1552), Pachuca (1552) y Guanajuato (1550), entre otros lugares. Desde entonces, la minería ha sido una parte importante de la economía del país.

Los minerales de México han sido explotados por extranjeros durante siglos, primero por los españoles, y después de la Independencia (en 1821) por la capital británica, francesa y, especialmente, estadounidense. Esta tendencia se aceleró durante la dictadura de Porfirio Díaz (1877-1911), ya que el sector minero y otros se abrieron a la inversión extranjera y el saqueo. En vísperas de la Revolución, había más de mil compañías mineras que operaban en el país, de las cuales casi el 70% eran de propiedad estadounidense (Urías 1980, 953).

La proclamación de la Constitución de 1917 marcó el fin de la mayor parte de la agitación revolucionaria. Considerada como una de las más progresivas de su tiempo, incluyó medidas destinadas a establecer el control nacional sobre el sector minero. El artículo 27 de la Constitución establece que las reservas minerales pertenecen a la nación, y que sólo pueden ser explotadas por mexicanos (individuos o empresas) a través de concesiones otorgadas por el gobierno federal. En el mismo espíritu,

la Ley de Industrias Mineras fue aprobada en 1926, con el objetivo de aumentar la participación del Estado en los ingresos generados dentro del sector. Sin embargo, estas medidas se encontraron con una fuerte oposición y evasión fiscal por parte de las empresas mineras de propiedad extranjera, y, en última instancia, resultaron ineficaces. En 1930, al comienzo de la Gran Depresión, se hicieron modificaciones a la Ley Minera de México para dar cabida al capital extranjero, que controlaba el 85% de las minas en el país (Sariego, Reygadas, Gómez y Farrera 1988, 954).

Por lo tanto, no fue hasta 1961 que el dominio extranjero en el sector minero se vio efectivamente reducido a través de la proclamación de la “mexicanización” de la Ley Minera. Esta ley estaba destinada a hacer valer el control federal sobre el sector y dar acceso privilegiado al capital nacional a las reservas minerales. Su cláusula más importante establecía que todas las compañías mineras que operan en México deben tener al menos 51% de propiedad mexicana. También limitó los periodos de concesión a veinticinco años. De este modo, a finales de la década de 1970, el capital extranjero sólo representaba el 36.7% de las inversiones mineras. El resto provino de capital privado mexicano (48.2%) y el sector público (15.1%).

En 1975 se realizaron nuevas modificaciones con el fin de promover una mayor participación del Estado en el sector. De esta manera, en 1983 las empresas públicas controlaban alrededor del 40% de la producción minera en el país (Delgado y Del Pozo 2002, 26). Esta fue la culminación del “proceso de mexicanización”. Los principales beneficiarios eran un puñado de ricos empresarios y banqueros mexicanos que fueron capaces de obtener el control de las reservas minerales estratégicas y la infraestructura minera, ya sea directamente o mediante la gestión de préstamos a empresas públicas altamente endeudadas.

La crisis de la deuda de 1982 marcó el punto de inflexión de una estrategia nacional de desarrollo en el marco de la industrialización por sustitución de importaciones, con una fuerte intervención del Estado en la economía, a una estrategia neoliberal de desarrollo orientada al mercado, basada en los principios del libre comercio, la privatización y la desregulación. Delgado y Del Pozo (2002) identifican dos fases durante

esta transición, que ayudaron a fortalecer y consolidar la posición de las grandes empresas mineras mexicanas, antes de que el sector se abriera a la IED. La primera, de 1982 a 1988, se caracteriza por la aplicación de incentivos y exenciones fiscales (que aún están en vigor); y la segunda, de 1988 a 1996, es cuando se vendieron las reservas minerales y las empresas mineras de propiedad pública, con poca transparencia y a precios muy por debajo de su valor de mercado.

La liberalización del sector minero comenzó en 1992 con la promulgación de una nueva ley minera, que permitió una mayor participación extranjera en la exploración y explotación de minerales. Al mismo tiempo, los periodos de concesión se ampliaron de 25 a 50 años y los impuestos en el sector minero se redujeron considerablemente para atraer IED. Estos cambios, sin embargo, no tuvieron mucha fuerza hasta que fueron complementados por la Ley de Inversiones Extranjeras en 1996, que dejó la puerta abierta de par en par para la inversión extranjera, dando a las empresas todos los derechos y privilegios que disfrutaban sus homólogos mexicanos. Por último, en 1999 se hicieron algunas modificaciones a la Ley de Minería con el fin de simplificar los procedimientos administrativos.

Sin restricciones reales a la propiedad extranjera, con un régimen fiscal increíblemente bajo, procedimientos administrativos simplificados y leyes ambientales que no se aplican en la práctica, México se ha convertido en el destino número uno en América Latina para la IED en la minería. En 2005, el sector atrajo 256 millones de dólares en IED, lo que representa el 21.9% del total. En 2010 atrajo el doble (514 millones de dólares), equivalente al 15.5% del total de las inversiones mineras en México en el mismo año (Secretaría de Economía 2011, 32). Dado que las empresas mexicanas siguen controlando las reservas estratégicas del país en carbón y cobre, el capital extranjero, predominantemente canadiense, está buscando principalmente metales preciosos, como el oro y la plata. Al mismo tiempo, debido a que las tecnologías mineras modernas permiten la extracción de varios tipos de minerales de la misma veta, también están produciendo zinc, plomo, cobre y otros metales.

Durante los primeros cuatro años en el cargo del presidente Felipe Calderón, el número de concesiones otorgadas a empresas mineras ex-

tranjeras se duplicó, de 390 en 2006 a 757 en 2020. Entre 1994 y 2018, el gobierno federal otorgó 45 537 concesiones mineras al sector privado, con una superficie aproximada de 105 millones de hectáreas, más de la mitad del territorio del país (Tetreault 2020). Más del 80% de estas concesiones están asociadas con proyectos mineros que todavía están en fase de exploración, lo que significa que la mayor parte de la destrucción ambiental y la agitación social está por venir. Cabe mencionar también que el 63% de estos proyectos están asociados con metales preciosos, con aplicaciones industriales limitadas (Secretaría de Economía 2011, 22). En otras palabras, el medioambiente de México está siendo destruido, y la salud y los medios de vida de los pobres rurales se están sacrificando principalmente para producir joyas y artículos decorativos para los ricos, y para proporcionar un refugio seguro para el capital especulativo.

Durante la primera década del nuevo milenio, el gobierno federal entregó más de 56 millones de hectáreas de concesiones mineras a empresas privadas, equivalentes a más de una cuarta parte del territorio del país (López y Eslava 2011, 28). El artículo 6 de la Ley de Minería de México establece que las actividades mineras “tendrán preferencia sobre cualquier otro uso o explotación de la tierra”. Esto otorga al gobierno federal el derecho a expropiar tierras de pequeños agricultores y ganaderos, así como sitios sagrados de grupos indígenas, para promover operaciones mineras privadas. En esto ni las áreas protegidas, como las reservas naturales, plantean obstáculos a las empresas mineras, por su relación amistosa con los funcionarios del Estado.

Aunque no existen datos firmes al respecto, es evidente que esta relación amistosa refleja una coincidencia de intereses, rentismo o corrupción más que un beneficio para el país. Por un lado, los costos medioambientales y sociales son muy superior a los pocos beneficios percibidos por las comunidades y el Estado mismo. Con relación a ello, se puede citar una observación relevante del auditor general, según el cual el costo de una concesión minera en México y los beneficios percibidos por el Estado en forma de una participación significativa en la renta derivada de la exportación de minerales y metales, son meramente

“simbólicos”, en cuanto al pago de las multinacionales para una concesión que ni siquiera cubre los costos administrativos conexos. Según el informe, entre 2005 y 2010, el gobierno federal recogió 6.54 mil millones de pesos de las empresas mineras (equivalente a aproximadamente 503 millones de dólares en 2010, a un tipo de cambio de 13 pesos al dólar), lo que sólo representa el 1.2% del valor de la producción minera durante el mismo periodo: 552.4 mil millones de pesos (42.500 millones de dólares). A diferencia de otros países latinoamericanos, como Bolivia, que obligan a las empresas mineras a pagar al Estado un porcentaje de sus ganancias en regalías, hasta 2014 en México estas empresas sólo debían pagar una pequeña tarifa por el derecho a explorar y extraer minerales y metales. Finalmente, en 2014 una reforma a la ley incluía la obligación de pagar regalías, pero a un nivel mínimo.

La extracción de hidrocarburos en Bolivia y Ecuador

La minería desde tiempos coloniales ha sido el sector más importante en los avances del extractivismo en el proceso de desarrollo. Pero en el siglo XXI, la extracción de hidrocarburos en forma de gas natural y petróleo ha ganado a la minería en su valor estratégico para el desarrollo capitalista; esto refleja la centralidad y el peso económico de los sectores de transporte y la energía para la construcción de una economía moderna e industrial. En el contexto de América Latina como proveedor de estos recursos estratégicos, Bolivia y Ecuador representan casos paradigmáticos del neoextractivismo, la forma más consecuente y reciente del desarrollo capitalista en la coyuntura actual.

Un gran parte de la inversión extranjera de capital extractivo en esta coyuntura fue destinado a cinco países receptores: Brasil, México, Chile, Colombia y Argentina, en ese orden. Estos países juntos habían absorbido 222 mil millones de pesos en inversiones extranjeras en 2007 y 2008, años que vieron una disminución general en las inversiones ex-

trajeras en la escala mundial. Estas inversiones se comparan con 12.7 mil millones de pesos para Bolivia, Perú y Venezuela durante el mismo periodo, una norma que se mantiene durante la década, lo que sugiere una preferencia de estas inversiones por la extracción de minerales sobre los combustibles fósiles o la energía. También sugiere la apertura a la inversión extranjera (y no el tipo de régimen) como un factor crítico en la toma de decisiones relacionadas con la inversión de capital extractiva. Esto queda claro cuando se compara Colombia y México, países que habían mantenido su alineación con el modelo neoliberal y el poder imperial, con Venezuela, un país autodefinido como socialista, como receptores de las inversiones extranjeras de capital extractivo.

También podemos ver las preocupaciones de los inversores sobre el tipo de régimen en Bolivia, un país minero tradicional, pero con grandes reservas de gas natural y petróleo de alta demanda en los mercados capitalistas. En el contexto del “ciclo progresista” en la política, Bolivia mantuvo una postura de apertura hacia la inversión extranjera y ofreció condiciones muy favorables a los inversores, incluyendo la estabilidad macroeconómica (con reservas de divisas grandes en el contexto de la región). Pero, en su política antiimperialista y populista en cuanto a los recursos naturales (que pertenecen al pueblo), el régimen de Evo Morales y Álvaro García rechazaron el capitalismo de mercado libre y se guió por el socialismo del siglo XXI.

Bolivia como receptor de capital extractivo, es decir, las inversiones extranjeras en la extracción de sus grandes reservas de hidrocarburos y de varios minerales (incluyendo litio, un mineral que ha despertado grandes expectativas en cuanto su potencial para convertirlo en un país industrial, y también los productos de agroextracción como la soya), es un caso ejemplar de lo que podemos llamar el “neoextractivismo”. Sobre esto véanse a Gudynas (2009) y Svampa (2015). Asimismo, está el caso de Ecuador: no es un país minero, y su emergencia como exportador de petróleo es relativamente reciente —desde los años setenta, cuando realizó la transición de una economía de enclave en base de exportación de banano a un exportador de petróleo. No obstante, Ecuador es un caso paradigmático de la aguda contradicción entre el modelo extractivista

y la concepción de vivir bien, embutido en la Constitución de un país multiétnico y plurinacional. Esta vital contradicción es la razón de haber seleccionada a Ecuador y Bolivia como casos de la investigación de la dinámica de desarrollo y de la resistencia.

El caso de Bolivia

Al asumir el poder en 2006, Evo Morales, al igual que otros jefes de Estado constituidos en el ciclo progresista, se encaminó hacia una estrategia de desarrollo extractivista, invitando a las empresas multinacionales del sector extractivo a invertir en la exploración y extracción de petróleo, gas y minerales industriales. El gobierno siguió esta estrategia de colaboración con inversionistas y empresas extranjeras, en el marco de una política de nacionalismo en el acceso a recursos estratégicos, como hidrocarburos y minerales. En 2006, el gobierno declaró con fuerza de ley que los recursos pertenecen al pueblo, y al mismo tiempo enfatizó la importancia del sector extractivo en su política de desarrollo nacional.

La importancia y el papel que jugó el extractivismo en el gobierno bajo la administración de Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García, se puede apreciar leyendo varias de las publicaciones de este último entre 2010 y 2012, años en los que el gobierno era muy criticado por sus estrategias de desarrollo. En estas publicaciones, García (2012 y 2015) presentó la estrategia extractivista del gobierno como parte de un análisis alternativo de desarrollo orientado al socialismo comunitario. En el discurso desarrollista del vicepresidente, esta alternativa también se presentó en términos de la concepción indígena de la Pachamama, es decir, de cómo vivir bien en solidaridad social y armonía con la naturaleza. Sobre esto véase Gudynas (2014b), quien concibe el posdesarrollo como crítica del desarrollo en su forma convencional, y *sumak kamsay* o vivir bien como alternativa. Sin embargo, en su análisis del proyecto de gobierno queda bastante claro que García entiende el desarrollo de manera muy convencional como el crecimiento de las fuerzas de producción con el objetivo de capturar el excedente económico, lo que generaría recursos fiscales y un tipo distinto de valor que permitiría salir del neoliberalismo y capitalismo.

Según García (2011, 31-32), el “objetivo económico fundamental de la nacionalización de los recursos” era crear condiciones que permitieran al gobierno apropiarse de la ganancia, un excedente económico imprescindible para poder financiar e impulsar el proyecto, y, al mismo tiempo, superar la condición inicial del “neoliberalismo”, que García entendía como un control privado y esencialmente extranjero del excedente, una exclusión política de grupos como los campesinos o indígenas y una subordinación del Estado al capital. Para crear estas condiciones efectivamente (por una coincidencia de intereses: ganancias para las empresas y recursos fiscales para el Estado), propuso una alianza entre el Estado y las empresas multinacionales del sector extractivo. En esta alianza, las empresas extranjeras resultan ser la “madre” del proceso de extracción y desarrollo, y el Estado un “padre vigoroso que redistribuye la riqueza que le pertenece al pueblo” (García 2012a, 118).

De hecho, el importante rol que desempeñan estas empresas en el sector extractivo se refleja en la gran cantidad de corporaciones multinacionales que aún operan en el país, muchas de ellas con contratos de exploración y perforación a largo plazo, a pesar de la declaración formal en 2011 por parte del gobierno de que la riqueza de los recursos naturales del país pertenecía al pueblo y que los ricos yacimientos minerales del país eran una “bendición”, que permite al Estado (“el pueblo”) regular la industria a nivel nacional y local —una forma radical de nacionalismo de recursos orientados hacia el socialismo comunitaria.

Otra indicación del rol central que desempeñan las corporaciones multinacionales en el sector extractivo de Bolivia, es la continua dependencia del Estado en los mercados capitalistas tanto en sus operaciones extractivas como en la comercialización y venta del producto social. Si bien en un modelo que ha sido elogiado por la ONU por otorgar a la madre tierra (los derechos del mundo natural) un estatus igual al pueblo, el gobierno elaboró una estrategia e intentó implementar una política que obliga a estas compañías a invertir parte de su capital en el procesamiento y en la industrialización de los recursos extraídos. En esto es evidente que las multinacionales tienen la ventaja y el poder en su relación con el Estado. Una clara indicación de esto es la división del botín de las

exportaciones entre el gobierno y estas empresas. Aunque es difícil calcular con precisión, parece que en el sector minero, por ejemplo, menos del 20% del valor del producto social en el sector extractivo es apropiado por el gobierno en forma de renta del subsuelo y de los recursos (derechos de exportación, impuestos y regalías); el resto es acaparado por las compañías en forma de ganancias, por los inversionistas como dividendos y por las grandes casas de comercialización de los productos básicos en forma de ganancias extraordinarias. Al mismo tiempo, los altos costos sociales y ambientales, y los impactos destructivos de las operaciones del capital extractivo, son asumidos por las comunidades contiguas a los sitios de extracción y los enclaves económicos que se forman a su alrededor.

En los últimos años, los líderes de algunos movimientos sociales pusieron en tela de juicio el modelo de exportación extractivista, con que implicaban también elementos de la oligarquía agraria y el sector de pequeñas explotaciones familiares comerciales. Esto resultó en la fragmentación del Pacto de Unidad con la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el Consejo Nacional de Allys y Markas de Qullasuyu (Conamaq). Las facciones más críticas del Conamaq y el CIDOB, que se separaron para formar nuevos movimientos “orgánicos”, estaban preocupadas de que el modelo extractivista requiriera establecer relaciones de dependencia con corporaciones transnacionales y bancos de desarrollo multilaterales, violando las salvaguardas ambientales y sociales legales, y aumentando la medida en que la economía de Bolivia estaba vinculada a mercados globales volátiles e instituciones de política neoliberal. En respuesta, el MAS se esforzó por deshabilitar y deslegitimar la capacidad de estas organizaciones de representar de manera independiente a los grupos indígenas.

El caso de Ecuador

Ecuador bajo la presidencia de Rafael Correa, como Bolivia bajo la presidencia de Evo Morales, podemos considerarlo un caso paradigmático de extractivismo progresivo, o neoextractivismo. Antes de la era neoliberal,

la economía de enclave de Ecuador dependía de la producción de varios monocultivos, principalmente la banana, de la cual era el primer exportador del mundo. Pero el descubrimiento de nuevos campos petroleros en el oriente después de 1967 transformó al país en un productor mundial de petróleo, y trajo grandes aumentos en los ingresos del gobierno a partir de 1972.

El periodo previo a la elección de Rafael Correa en 2006 como presidente, coincidió con un levantamiento de los movimientos sociales asociados con la Conaie, que encabezó la resistencia contra la agenda neoliberal del gobierno en la década de 1990. La campaña antineoliberal y antiimperialista de Correa, muy parecida a la de Morales en Bolivia, se basó en este malestar social causado en gran parte por la política neoliberal, y su éxito, al final, dependió del apoyo de los movimientos sociales del país. Antes de 2006, la Mesa Agraria (una coalición de cuatro organizaciones campesinas e indígenas) había firmado un acuerdo con Correa en el que se comprometía, tras la elección, a iniciar una “revolución agraria” —algo parecido al proyecto legislativo iniciado por el régimen de Evo Morales, pero nunca realizado. El proyecto incluía, aparte de la repartición de la tierra a los sin tierra, la soberanía alimentaria, una demanda centrada en la democratización del acceso a la tierra y al agua, y en los recursos estatales para la reactivación y el estímulo de la economía “campesina”. Pero, a diferencia de Morales, Correa (que fue reemplazado por Lenin Moreno en 2017) carecía de raíces profundas tanto en la sociedad civil como en los movimientos sociales y, por eso, una vez en el poder trató de desmovilizar el activismo indígena y campesino. Por lo tanto, a diferencia del proyecto de Evo Morales y Álvaro García, el proyecto de Rafael Correa de formar AP representaba un proyecto keynesiano y tecnocrático más que un proyecto de transformación social.

En el contexto de Ecuador, las actividades extractivistas promovidas e impulsadas por el gobierno de Correa causaron estragos ecológicos y sociales, en particular en el oriente, generando profundas interrogantes sobre la sostenibilidad de la estrategia neoextractivista. Pero los beneficiarios de los ingresos derivados de la extracción de recursos y las exportaciones de crudo, en mayor parte, habían sido distanciados

especialmente de sus impactos ecológicos y sociales directos. Quedaron, como señala Herrera (2017), “afuera de la línea de fuego” del capital extractivo.

Siguiendo el caso de Ecuador, al esconderse de la vista del público, y disfrazando los impactos destructivos de las actividades extractivas en un discurso engañoso, el régimen compensatorio de Correa (y de Moreno) ha logrado deslegitimizar las voces de oposición tanto de los críticos como de los movimientos sociales. Los opositores al extractivismo en este contexto fueron denigrados como “terroristas”, enemigos del pueblo y de la “revolución ciudadana” (De la Torre 2013). Un indicio de esto fue el arresto en 2017 de cientos de manifestantes indígenas y campesinos por protestar pacíficamente contra las políticas petroleras y mineras del régimen. Estas protestas fueron una respuesta a la declaración del gobierno de un Estado de emergencia en la provincia de Morona Santiago, en el oriente, donde el gobierno había desplegado fuerzas militares y policiales para desplazar y despojar energéticamente al pueblo indígena shuar, cuyo territorio ocupa las tierras destinadas para la minería y varios proyectos extractivos (Riofranco 2017).

En resumen, a diferencia de Bolivia, en el caso de Ecuador no se trata tanto de la cooptación del liderazgo de los movimientos sociales, sino de engañar a los líderes de los movimientos con políticas estratégicamente enfocadas en la reducción de la pobreza y en lograr un desarrollo con una política de asistencia social (para más detalles, véase Dávalos y Albuja 2015). El resultado de esto ha sido el divorcio progresivo de los líderes de los movimientos sociales de su base de masas, en el caso de organizaciones como la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (Fenocin), la Conaie y la Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari).

Estas políticas “progresistas” han neutralizado más o menos cualquier tendencia contrahegemónica adentro de organizaciones como la Fenocin. Por lo tanto, a partir de 2013 el discurso y las estrategias políticas de la Fenocin han cambiado significativamente, al convertirse en un partidario vocal de Correa y su “revolución ciudadana”. Pero, en lugar de pedir la transformación radical de la estructura agraria de Ecuador me-

diante la expropiación y redistribución en masa, el liderazgo actual de la organización utiliza la soberanía alimentaria, de acuerdo con su definición reformista, como una herramienta política para negociar proyectos y recursos para su membresía, así como las medidas diseñadas y promovidas para “revitalizar” la productividad de la agricultura campesina; es decir, para hacer que el campesinado acomodado o pequeño-burgués sea más competitivo. Al concebir al Estado como el motor del desarrollo económico y social, el proyecto de Correa respondió a una serie de demandas populares nacionales, clave de la membresía de la organización campesina para mecanismos de protección contra la competencia globalizada en el sector agroalimentario (junto con medidas de bienestar complementarias para campesinos semiproletarizados). Pero esta respuesta política efectivamente debilitó las demandas más contrahegemónicas del movimiento por la soberanía alimentaria y por el modelo alternativo y anticapitalista, articulado por los principales líderes campesinos (Herrera 2017). Sin duda, este era el objetivo de Correa.

Conclusión

Se nos ha dicho muchas veces —y nuestro recorrido por la historia del desarrollo capitalista en América Latina lo demuestra— que la región tiene una abundancia y riqueza de recursos naturales sin igual en el mundo. Además, académicos en el campo del desarrollo nos dicen que América Latina es la región con mayor desigualdad en el mundo, en cuanto a la distribución social de la riqueza y los ingresos derivados de las exportaciones de esta riqueza y actividades económicas en el desarrollo de las fuerzas de producción. Algunos pueden pensar que esto se explica en términos del dinamismo extractivo en la región, es decir, el resultado inevitable de una dependencia extendida de la extracción, explotación y exportación de los recursos naturales para el desarrollo de las fuerzas productivas; esto en lugar de la explotación, el crecimiento del capital humano y otras fuerzas productivas más fructíferas respecto al desarrollo, como la innovación tecnológica. Sin embargo, esta expli-

cación no es adecuada, porque no incluye un análisis de la dinámica del desarrollo capitalista y la resistencia que le corresponde.

El desarrollo, o la falta de ello, no se puede explicar sin tener en cuenta la interacción y la correlación de estas fuerzas. La conclusión al respecto es que el desarrollo capitalista en la región ha tenido una excesiva dependencia del extractivismo. La explicación es muy compleja, pero incluye las dinámicas desatadas en los años ochenta en los avances en el proceso de desarrollo. Primero, el proceso condujo a la destrucción de las fuerzas productivas en la industria y la agricultura, lo que resultó en una afluencia de capital en forma extractiva, es decir, capital en busca de recursos naturales para explotar y convertir en mercancías. Esto resultó en el fortalecimiento de una estructura económica centro-periferia, que condujo a una relación subordinada a las fuerzas de desarrollo capitalistas. En segundo lugar, este proceso expuso a la región a múltiples contradicciones del sistema capitalista en condiciones de crisis sistémica, que, como se ha mostrado, son más agudas en el sector extractivo, particularmente en la minería, que tiene una larga y triste historia en la región.

Capítulo 6. Resistencias y alternativas

En este último capítulo se revisa de manera general la dinámica de la resistencia a los avances del capital, en el proceso de desarrollo y los proyectos de un futuro alternativo u otro mundo posible derivados o asociados con esta resistencia. Estos proyectos incluyen alternativas construidas “desde arriba” en los bastiones de la clase política, es decir, en el campo de la política electoral, que ofrece alternativas en forma de un modelo de la economía política y de la política social, dentro los límites permitidos por la correlación de fuerza entre las clases sociales. En este ámbito, la resistencia latinoamericana ha tomado dos formas principales: el neodesarrollismo, que respeta la institucionalidad del sistema capitalista, y el socialismo del siglo XXI, que busca transformar el sistema o ir más allá del neoliberalismo, si no del capitalismo. Estos proyectos se construyeron en un ámbito de rechazo del neoliberalismo y el capitalismo del mercado libre.

Sin embargo, la gran mayoría de propuestas dirigidas a otro mundo y futuro posible provienen de la sociedad civil, el movimiento campesino e indígena del sector agrícola y las fuerzas de resistencia incubadas en las comunidades locales de la frontera extractiva. Esto indica que las ideas y los proyectos de una sociedad mejor y un desarrollo más inclusivo, equitativo y sostenible, otro mundo de justicia social y ambiental, no se originan en la intelectualidad de la izquierda, sino en las fuerzas de la resistencia a los avances del capital y el capitalismo en el proceso de desarrollo. O, para ser más preciso, el discurso teórico de la izquierda sobre otro mundo posible, y los proyectos que aparecen y que se perfilan en este discurso, refleja y deviene de las experiencias impregnadas con

fuerzas de la resistencia. Este capítulo tiene como objetivo recapitular y reconstruir las directrices de estas resistencias y alternativas.

En previsión de una discusión sobre alternativas nacidas en un contexto de resistencia a los avances de capital en la era neoliberal, podemos ubicar estas alternativas en tres categorías. El primero proviene de experiencias asociadas con la construcción de un nuevo orden mundial en la década de 1980, que resultó en una verdadera invasión de capitales en forma de inversión extranjera y la destrucción de fuerzas de producción en la industria y la agricultura, con el consiguiente repunte de fuerzas de resistencia en los sectores más afectados por esta afluencia de capital: el campesinado, o lo que quedó de él, un semiproletariado de trabajadores rurales sin tierra, desposeídos y empobrecidos. Las alternativas construidas en este contexto tienen que ver con la resistencia a los avances del sistema capitalista en la economía, es decir, propuestas progresistas de un modelo alternativo posneoliberal o posdesarrollo. En este contexto, la resistencia de los noventa se concretó como un rechazo de la agenda neoliberal. Pero en la década de 2000 y más allá, la resistencia se concretó en la construcción de un modelo alternativo al agronegocio empresarial orientado a los mercados capitalistas —un modelo basado en los principios de una revolución agroecológica y de soberanía alimentaria (Altieri y Toledo 2011).

Con este modelo, los campesinos han tratado de escapar, construir una alternativa al proceso de desarrollo capitalista, controlado por los grandes agricultores y los oligopolios corporativos, y lidiar con las fuerzas del mercado de un modo que fuese beneficioso para ellos. Sus estrategias al respecto se pueden clasificar en tres tipos: evasión, integración y creación de mercados (Vergara y Kay 2017). Para comprender la naturaleza de estas alternativas, debemos evaluar sus consecuencias en las formas en que los hogares y las estrategias colectivas se entrelazan y refuerzan entre sí en sus comunidades. En esto también es crucial determinar si la iniciativa en la construcción de un modelo alternativo y la particular combinación de estrategias que ha encontrado el movimiento en la actualidad, es capaz de proporcionar un bienestar decente para ellos, proteja su control sobre la tierra y recursos naturales, y contribuya a democratizar los hogares y las comunidades campesinas.

Dinámica de las resistencias

Este libro comenzó con la propuesta teórica y el principio de que la crisis del sistema, como cualquier crisis, genera fuerzas de resistencia que se pueden movilizar a la derecha o a la izquierda, dependiendo de las circunstancias particulares de la situación en la coyuntura. En el capítulo 2 se establece el fundamento de que a cada avance en el desarrollo capitalista corresponden nuevas fuerzas de resistencia, un principio que se concreta con la identificación de tres ciclos de desarrollo-resistencia en el periodo de posguerra de desarrollo, incluyendo dinámicas de desarrollo y resistencia propios de la coyuntura y situación actual, caracterizada por el avance de capital extractivo en la periferia del sistema. Este avance corresponde a los progresos en la acumulación de capital monopólico, en forma de conocimiento científico e innovaciones tecnológicas, particularmente en el sector agrícola en el contexto de una articulación del capital industrial (agroindustria) y el capital extractivo (agroextracción). Estos avances, como se plantea en el capítulo 4, en la coyuntura actual del desarrollo capitalista en América Latina se manifiesta en dos formas. Una es la formación de una fuerza de trabajo altamente cualificada que, por falta de oportunidades en la región para aprovecharla, se emigran en gran medida o se trasladan al centro del sistema, donde se concentra este capital humano. El otro es en la formación de una resistencia que, en la década de los ochenta, en forma de movimientos sociopolíticos y antisistémicos acumuló la fuerza suficiente para detener el avance de capital en la agenda neoliberal (en la macroeconomía), y, en la coyuntura actual, lidera la resistencia a los avances de capital en el sector agrícola.

Posteriormente, se analiza la resistencia de este actor colectivo, el campesino, en la construcción de un modelo de desarrollo alternativo en la agricultura; un ejemplo consecuente que trasciende los límites del sistema capitalista. Por ahora, se hace hincapié en la resistencia asociada con el avance de capital extractivo en la minería, la forma clásica y más consecuente de extractivismo en América Latina y en la sustracción de hidrocarburos (petróleo y gas natural) para el mercado mundial. Estos extractivismos han generados fuerzas de resistencia, que todavía dominan el panorama político en América Latina.

El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra: la resistencia de los campesinos

La construcción en la década de 1980 de un nuevo orden mundial, basado en los principios del capitalismo del libre mercado promulgado por los teóricos del neoliberalismo, abrió un nuevo ciclo tanto en la dinámica de las fuerzas de desarrollo como en la dinámica de la resistencia. La resistencia en este contexto fue liderada por el movimiento campesino —un movimiento construido por los pobres del campo, un semiproletariado de trabajadores rurales sin tierra y las comunidades indígenas en la frontera extractiva. El activismo de estos movimientos en la década de 1990, particularmente en Chiapas, Ecuador, Bolivia y Paraguay (véase Petras y Veltmeyer 2005 y 2011), fue una condición esencial para la formación del ciclo progresista en la política, es decir, el activismo del centroizquierdo de la clase política. En contraste con la resistencia de los otros grupos del sector popular, el movimiento campesino ha tenido un éxito notable en aglutinar las fuerzas de la resistencia en el campo, y en ofrecer una alternativa al capitalismo en el desarrollo de las fuerzas de producción en la agricultura. La agricultura ha sido un obstáculo para los avances del sistema capitalista. Se supone que esta barrera tiene que ver con fuerzas estructurales que impiden el avance del capital en el sector. Pero las investigaciones de varios sociólogos muestran que la principal barrera a los avances del capital ha sido el activismo de los campesinos en oponerse al capitalismo para construir un modelo alternativo a la agricultura.³³

Vergara y Kay (2017 y 2018) señalan que la resistencia campesina ha tomado, y sigue tomando, formas muy diferentes contra la agenda neoliberal, que dominaba la política en la década de 1990, y contra los avances del capital agroindustrial (los agronegocios) y el agroextractivismo en el nuevo milenio. Incluye, por ejemplo, la dinámica de lucha ejemplificada por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), un poderoso movimiento político-social brasileño de inspiración

³³ Sobre las dinámicas de esta resistencia, véase Vergara (2014).

marxista, que ha luchado por la reforma agraria y la justicia social desde la década de 1980, liderando la lucha contra los avances de capital agroindustrial y agroextractivo, el cual orientaba su producción hacia el mercado mundial. Al contrario, el MST representaba los intereses de los millones de campesinos y productores pequeños que representaban hasta el 70% de la producción local de alimentos. A propósito, el MST y la intelectualidad del movimiento campesino, en su resistencia a los avances del capital y el capitalismo en el campo y la agricultura, ha protagonizado un modelo alternativo de producción para los mercados locales, un modelo con sus pilares en la soberanía alimentaria y una revolución agroecológica (véase Altieri y Toledo 2011).

La resistencia y el activismo del movimiento campesino incluye la formación de alianzas en el campo, no sólo en América Latina sino a nivel internacional a través de Vía Campesina, un movimiento de campesinos que aglutina la resistencia de diversos sectores con representación de 26 países de África, Asia, América Latina y Europa.³⁴ La dinámica de este movimiento incluye la elaboración de un modelo alternativo de organizar la producción en la agricultura y la lucha contra las fuerzas de desarrollo capitalista, con apoyo activo del Estado, en forma de agronegocios corporativos.

La formación de un movimiento que aglutina las fuerzas de resistencia de trabajadores rurales sin tierra, es una manifestación notable de la fuerza de la resistencia en el medio rural, generada por los avances del capital industrial y extractivo en el campo, y el consiguiente despojo de los pequeños agricultores y trabajadores rurales que se autoidentifican como campesinos. Pero es sólo una de varias formas de esta resistencia. Otras formas de resistencia de los “pobres del campo” (según el discurso de los economistas con el Banco Mundial), incluyen el abandono del campo y la agricultura en busca de una forma alternativa de vivir en la ciudad o más allá en el extranjero —principalmente en Estados Unidos. La investigación de esta dinámica en el contexto de México, que impulsa el Banco

³⁴ Sobre la dinámica de este movimiento, véase en particular Martínez y Rosset (2008 y 2010).

Mundial en su estrategia de cómo salir de la pobreza y, al mismo tiempo, alimentar al sistema capitalista con una fuerza laboral, muestra la inmensa escala de este proceso. El proceso ha producido una ola gigantesca de migración internacional de sur a norte, que incluye una dinámica de convertir al campesinado en un proletariado internacional, para formar un ejército de reserva de mano de obra excedente para el sistema capitalista.

A pesar de la gran cantidad de trabajadores rurales sin tierra, que han emigrado por la fuerza del campo, o que son parte del movimiento campesino, un grupo internacional de investigadores de la pobreza rural sugiere que la persistencia de la precariedad en América Latina indica otra forma de resistencia en el campo poco estudiado.³⁵ Se refiere a un gran número de campesinos pobres expulsados de la tierra, que se han resistido a los avances del capital en el sector agrícola de forma cotidiana, lo que Scott (1987) había sostenido es la forma más común de resistencia. Esta consiste en pisar a rastras, incumplimiento, hurto, robo, deserción, ignorancia fingida, calumnia, incendio premeditado, sabotaje, huida, etc. Efectivamente, en un trasfondo de desobediencia, esta resistencia se materializó como una falta de respeto a la autoridad.

Además de estas expresiones de resistencia, que incluyen movimientos organizados por los trabajadores rurales sin tierra, la resistencia en áreas de agroextracción incluye una lucha de las comunidades para reclamar sus derechos territoriales y disputas territoriales relacionadas con esta lucha. Un ejemplo de esta dinámica es el caso del pueblo Kolla, en las provincias del noroeste de Argentina. Las comunidades indígenas de esta zona tienen una larga e intensa historia de reclamo de territorios, que fueron usurpados por un ingenio azucarero perteneciente a una de las principales familias oligárquicas del norte. Este ciclo de reclamos comenzó en la década de 1980, pero continuó en 2012 con una lucha extendida contra el ingenio azucarero Patrón Costas.

Otro ciclo similar de luchas para disputar y reclamar acceso a la tierra y el territorio, tiene que ver con la larga historia de resistencia

³⁵ Sobre esto véase Boltvinic y Archer (2016), quienes ofrecen una síntesis de un debate no resuelto sobre la cuestión agraria en la actualidad.

de los pueblos mapuche (“pueblo de la tierra”) en Argentina y Chile. Estas comunidades indígenas, principalmente en Río Negro y Neuquén, se han organizado en las últimas décadas para recuperar sus tierras y defender los bienes comunes dentro de su territorio. Esta es una región con una amplia extensión para el cultivo de soja y una biodiversidad notable, incluidos minerales y petróleo, y ha sido objeto de diversas confrontaciones con intereses económicos, que son los principales agentes de saqueo y despojo en el territorio. Estos intereses siguen actuando con la complicidad de las provincias que no protegen a las comunidades, ni regulan la venta y concesión indiscriminada de tierras y bienes comunes (Giarracca y Teubal 2015, 70-72).

A parte de los reclamos de las comunidades de sus derechos eco-territoriales y la lucha para obtener acceso a la tierra para sus cultivos, está el repudio al saqueo de los recursos naturales, a la contaminación, a la degradación de la salud de los habitantes y del medioambiente, y a la deforestación masiva que en años recientes está asociada con la expansión del modelo de soja en la frontera extractiva. Con respecto a esto se mencionará sólo un ejemplo. En el último trimestre de 2007, el año en que se puso en vigencia la ley nacional sobre la protección ambiental mínima de los bosques nativos, se emitieron nuevos permisos para talar un total de 130 602 hectáreas en los rangos forestales. De 2004 a 2007, se cortaron 807 509 hectáreas de tierras forestales. Estas cifras se refieren sólo a datos oficiales, pero presumiblemente gran parte de la deforestación se llevó a cabo sin los permisos correspondientes. Por lo tanto, se puede suponer con seguridad que, como en la Amazonía de Brasil, muchas más hectáreas fueron deforestadas.

En febrero de 2009, la Suprema Corte de Justicia, en respuesta a un reclamo presentado en 2008 por las comunidades indígenas y campesinos de los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria en Salta, ordenó la suspensión de la deforestación autorizada en el último trimestre de 2007. El tribunal invocó el principio de precaución. Fue en este momento que las comunidades kolla de Salta organizaron la Coordinadora de Organizaciones y Comunidades Kollas Autónomas, que incluía a todas las comunidades de esa provincia (Qullamarka), for-

taleciendo así la protesta por sus derechos y autonomía en sus territorios. Esto les permitió organizar una serie de disputas contra modelos extractivistas, incluida la deforestación de sus territorios.

Resistencia en la frontera extractiva

La minería, tanto en los países mineros clásicos como Perú, Bolivia y México, donde ha sido un factor predominante en la economía desde siglos, y Brasil y Argentina que en los últimos años han visto la expansión inusitada de la minería a cielo abierto, ha sido y es la principal fuente de resistencia en forma de violentos enfrentamientos entre empresas del sector extractivo y las comunidades. El OCMAL ha documentado más de 184 conflictos violentos en la minería sólo en los años de 2006 a 2010, con 284 conflictos publicados en 2017 (OCMAL 2018). Estos conflictos involucraron a 222 comunidades en nueve países y 301 proyectos mineros (véase la tabla 4). También implicaron a gobiernos y Estados de todo tipo, tanto progresistas (Argentina, Bolivia y Brasil en este momento) como neoliberales (Colombia y México). Perú, un país minero por excelencia, como Chile y México, respecto a su régimen político es un caso ambiguo e híbrido: ni progresista o posneoliberal, ni neoliberal en el sentido estricto (neoliberalismo con activismo estatal). En cualquier caso, vale la pena concentrarse en el caso de Perú en relación con la resistencia en la minería, donde la dinámica de los conflictos es bastante típica. Presenta sobre todo resistencia en contra del extractivismo, en particular los conflictos que tienen que ver con la relación del Estado con el capital (las empresas multinacionales) y con las comunidades. En muchos casos tiene que ver con la criminalización de la protesta.

Tabla 4. Conflictos socioambientales relacionados con la minería (2006-2017)

Países	Conflictos	Proyectos	Empresas	Comunidades
Argentina	28	46	43	37
Bolivia	10	13	7	21
Brasil	26	44	37	34

Tabla 4. Conflictos socioambientales relacionados con la minería (2006-2017)

Países	Conflictos	Proyectos	Empresas	Comunidades
Chile	49	112	42	34
Colombia	19	48	21	20
Ecuador	9	9	4	5
Guatemala	10	10	7	4
México	58	96	17	15
Perú	46	86	42	28

Fuente: OCMAL (2018). https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/conflicto.

En septiembre de 2017, los conflictos en la minería representaron alrededor del 70% de todos los conflictos sociales documentados por el OCMAL, y el 62% de las confrontaciones de carácter socioambiental (por el agua, en la mayoría de los casos) ocurrieron en el sector, lo que indica que el medioambiente es el mayor objeto de reclamos en la lucha. El ritmo y la escala de estos conflictos alcanzaron su punto máximo en 2009 con 270 conflictos, y su punto más bajo con 167 en 2017, con un promedio de diez nuevas disputas por año entre 2014 y 2017. Así, la dinámica de estos conflictos es una dimensión importante de la resistencia en la frontera extractiva, aunque por ser localizados y sin una política de alianzas, estos conflictos no constituyen estrictamente un movimiento social, como por ejemplo la lucha de los campesinos por la tierra o la lucha ecoterritorial de las comunidades indígenas en la economía enclave de la frontera extractiva.

Es posible analizar el extractivismo de Perú, un país minero por tradición, en términos de cuatro dimensiones: 1) los impactos sociales y ambientales de los proyectos mineros, 2) la rentabilidad de las inversiones mineras, 3) la estrategia de desarrollo y el régimen de políticas relativas a la extracción de recursos, y 4) la lucha continua de las comunidades y los trabajadores contra el capital extractivo transnacional. La situación de Perú demuestra que en los casos de extractivismo, en el contexto actual, de una transición del neoliberalismo, o el capitalismo del mercado, a un desarrollo más inclusivo y al neoextractivismo,

el capital es el que domina. Por ejemplo, en Perú, como en todos los demás casos de extractivismo, sea en forma clásica (neoliberalismo) o en forma progresista (neoextractivismo y posneoliberal), el Estado ha concesionado grandes extensiones de tierra a las multinacionales para sus operaciones extractivas, bajo un régimen de autorregulación o con una regulación muy débil en términos de protección ambiental y los derechos territoriales de las comunidades.

Respecto a esto, Bebbington *et al.* (2011) han documentado la dinámica de la resistencia al extractivismo y la expansión de la industria extractiva de minerales. El presidente Ollanta Humala llegó al poder en junio de 2011 con la promesa de apoyar a las comunidades locales contra las compañías mineras (con el lema “agua antes que oro”). Las comunidades locales e indígenas en Perú resistieron y se opusieron violentamente a la expansión planificada de las operaciones mineras por parte de un consorcio de Newmont Mining Corporation, la Compañía de Minas Buenaventura de Perú y la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial. Pero en esta lucha, Humala tomó el lado de las multinacionales sobre las comunidades. Después de sólo tres meses en el cargo, envió tres mil soldados a la zona de conflicto, dejando muy claro que, aunque el gobierno acordó ordenar una revisión de los planes para la expansión de la mina, el país no detendría el proyecto de 4.8 mil millones de dólares.

El caso de Perú demuestra claramente la dinámica asociada con la expansión de la megaminería en América Latina en las últimas décadas, en condiciones de fuerte demanda de minerales industriales en los mercados capitalistas. A continuación, según un foro de comunidades y grupos afectados por las operaciones del capital minero y de la industria de extracción de recursos, que se celebró en Lima en noviembre de 2010 (el Foro de los Pueblos Indígenas Minería, Cambio Climático y Buen Vivir), la explotación de los recursos minerales en 2009 y la siguiente década había alcanzado niveles nunca antes experimentados. Esto afecta particularmente a la región Amazónica, que tiene una inigualable diversidad natural y abundantes depósitos de oro, bauxita, piedras preciosas, manganeso, uranio, etc., codiciados por empresas multinacionales del sector minero.

Otra preocupación era la conexión percibida entre las corporaciones multinacionales del sector, una serie de fundaciones y las ONG, con una supuesta preocupación humanitaria o religiosa por el medioambiente y los medios de vida de los pueblos y comunidades indígenas. Al respecto, Eddy Gómez Abreu, presidente del Parlamento Amazónico Internacional, declaró que disponían de pruebas incontrovertibles de estas transnacionales y fundaciones, al ver las supuestas preocupaciones ecológicas, religiosas o humanitarias, colaborando en el esfuerzo por extraer minerales estratégicos, así como espionaje y experimentos médicos ilegales sobre la población indígena (Sena y Fobomade 2011). En efecto, alegó que las empresas mineras utilizaban regularmente fundaciones y otras ONG como una de sus tácticas para obtener el consentimiento de la población local a sus proyectos y operaciones, y manipularlas. Si es cierto, estos cimientos y las ONG continúan la larga y sórdida historia de los misioneros europeos en las Américas de expropiar las tierras de los indígenas, pero de una forma actualizada.

Las tácticas de las empresas mineras en la lucha de clases incluyen visitar a la comunidad con el propósito de recopilar información y evaluar la situación local (por ejemplo, el grado de oposición) bajo falsos pretextos, como miembros disfrazados de una ONG interesada en el bienestar de los indígenas; organizar reuniones públicas con la ayuda de aliados locales o funcionarios “amistosos”; sobornar a los funcionarios gubernamentales con la promesa de empleos y fondos de desarrollo social; fabricar una “licencia social” (negociando con un grupo local que apoya el proyecto, aunque no representativo de la comunidad); crear un grupo de apoyo cuando no existe un grupo sumiso o de quejas dentro de la comunidad; ofrecer a las comunidades un bono económico que se puede utilizar para financiar la inversión en proyectos de salud, educación, afianzamiento hídrico, seguridad alimentaria y otros; buscar apoyo para un proyecto minero propuesto, ofreciendo un empleo remunerado a los miembros desempleados de la comunidad y trabajar para contratistas locales o contratos de servicios; comprar terrenos con acceso a las concesiones; infiltrarse en la comunidad y espiar a la oposición; y litigios estratégicos contra la participación pública, acusaciones falsas,

intimidación, amenazas de muerte y acciones paramilitares. En última instancia, las empresas mineras cuentan con la violencia directa de las fuerzas militares, paramilitares y/o policiales para superar la oposición a sus operaciones mineras altamente lucrativas.

Además de la protección estatal, las empresas mineras también utilizan la violencia regularizada, siempre y cuando sea necesario para facilitar sus operaciones. Por ejemplo, a finales de diciembre de 2018, la empresa de seguridad contratada por la mina Glencore, atacó a la comunidad de Alto Huarca y apuntó específicamente a mujeres. En abril del mismo año, varios policías y funcionarios de la mina Glencore Antapaccay, cuarenta en total, intimidaron y utilizaron métodos coercitivos contra la comunidad de Alto Huarca, con el objetivo de desalojarla de sus propias tierras y permitir la expansión prevista de los proyectos mineros.

Para ver la realidad vivida por estas comunidades, otras cercanas a la minería y sus operaciones extractivas, y ponerla en su contexto (la expansión del capital extractivo), es importante tomar en cuenta que desde la perspectiva de las comunidades no es sólo cuestión de la salud de sus miembros y el control soberano sobre su territorio nacional, sino el entorno del que dependen para su modo de vivir, sin hablar de la vida misma. En este sentido, Mayoral (2011) informó que más de un millón de personas en la cuenca amazónica sufren enfermedades derivadas de la exposición y la ingestión de sustancias tóxicas y cancerígenas, como el mercurio. En el mismo sentido, Alarcón (2011) documentó evidencia científica de que la ciudad peruana de Oroya es una de las diez metrópolis más contaminadas del mundo, con altos niveles de plomo y azufre en el aire, y altos niveles de carcinógenos basados en la minería y relacionados, como el cadmio, el arsénico y la antinomia en el suelo, los productos alimenticios agrícolas y el suministro de agua; toxinas que también se detectaron en otras ciudades y comunidades circundantes (PNUMA 2010).

Un ejemplo de esto es la minería en la provincia Espinar-Cusco. Un informe titulado *Diagnóstico de la salud ambiental humana en la provincia Espinar-Cusco*, publicado en condiciones de propagación del virus covid-19, documentó que las personas en la región cercana a la

mina tenían niveles detectables de cuatro materiales tóxicos en sus cuerpos: arsénico, mercurio, plomo y cadmio. Además de la degradación directa de la salud humana, la minería en Espinar ha contaminado “aguas superficiales y sedimentos de los cursos de agua Camacmayo, Tintaya y Collpamayo” (Iqbal 2020). Y, como en la mina de Antapaccay, con una producción (es decir, extracción) de 80 000 toneladas de cobre por día, detectaban impactos ambientales de un extractivismo sumamente agresivo, como “la pérdida de biodiversidad (vida silvestre, agro-diversidad), contaminación del suelo, desborde de desechos, contaminación o agotamiento de las aguas subterráneas” —las primeras fueron objeto de protestas de las comunidades afectadas, y el último de preocupaciones de una inminente crisis causada por la extracción de agua.

La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami), una de las principales organizaciones que participan en el Foro de los Pueblos Indígenas Minería, Cambio Climático y Buen Vivir, denunció el hecho de que a finales de 2010 la gran mayoría de los sitios ancestrales en su territorio estaban en manos de compañías mineras y petroleras, que se han dado hasta el 72% del territorio nacional de Perú, con el propósito de explorar y explotar los recursos naturales del país. La Conacami alertó a los participantes del foro de las acciones del gobierno —en ese momento bajo el control del predecesor neoliberal de Humala, el presidente Alan García—, al declarar treinta y tres megaproyectos como de “interés nacional”, y así dar un paseo fácil con respecto a la necesidad de presentar un estudio de impacto ambiental. Los acontecimientos posteriores en el marco del régimen extractivista establecido por Humala, indicaron que nada había cambiado: el gobierno continuó al margen del capital extractivo contra las comunidades locales en el proyecto de desarrollo de recursos naturales (Kozak 2012).

Estos y otros informes de este tipo reflejan el hecho de que Perú, junto con Ecuador, son algunos de los principales sitios latinoamericanos de lucha de clases por la extracción y explotación de recursos naturales. Un importante punto focal continuo en esta lucha se relaciona con la mina Conga, la mayor operación de extracción del país y una de las más grandes de toda la región. Esta expansión de la mina, conocida

como el Proyecto Conga, una iniciativa conjunta entre la Newmont Mining Corporation, con sede en Denver, y la peruana Buenaventura (y la CFI del Banco Mundial), ayudaría a la compañía (y al gobierno) a cumplir el objetivo de producir siete millones de onzas de oro y cuatrocientas millones de libras de cobre para 2017; un importante impulso tanto a las rentas de recursos (regalías e impuestos) recaudadas por el gobierno como a los beneficios de la compañía.

Sin embargo, estas inmensas rentas y beneficios tendrían el costo de devastar la tierra, el agua y los medios de vida de las comunidades indígenas locales que rodean las operaciones mineras. En diciembre de 2011, Humala declaró el estado de emergencia de sesenta días después de que estallaran una serie de violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en Cajamarca; una huelga general y bloqueos de carreteras paralizaron la región. En ese momento, gran parte de la ira se derivó de un regaño realizado por Humala, un expopulista de izquierda-nacionalista y radical en el molde de Evo Morales. Humala se pronunció en contra de las empresas mineras extranjeras durante su campaña electoral para la presidencia, e incluso insinuó la posible nacionalización de la industria. Sin embargo, desde que asumió el cargo en el verano de 2011, se ha puesto del lado de las empresas mineras en su conflicto con las comunidades indígenas.

En febrero de 2012, al mismo tiempo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se enfrentaba a una situación similar en Argentina, la resistencia al Proyecto Conga continuaba, tomando la forma de una marcha nacional por el “agua y vida”; una movilización que obtuvo un amplio apoyo público, así como la participación activa de diversos grupos y sectores sociales.

Los miles de manifestantes que llenaron el centro de Lima durante la marcha, pidieron al gobierno que cancelara el proyecto por temor a que los estanques y embalses de la mina se filtraran a los suministros locales de agua. En el momento de la redacción de este trabajo, esta oposición ha logrado que el gobierno suspenda el proyecto. Si lograra detener un proyecto que el gobierno ha declarado de importancia estratégica, también proporcionaría un gran impulso a las fuerzas de resistencia en

toda la región, y sería visto como una gran victoria para el pueblo en una lucha de clases contra el capital, uno de los pocos éxitos en los últimos años. Además, señalaría un cambio en la correlación de las fuerzas de clase, una de las varias razones por las que la resistencia probablemente no tendrá éxito: hay mucho en juego, tanto para las compañías mineras como para el Estado. Lo más probable es que el gobierno se movilice en apoyo del capital minero, y tome medidas para crear las condiciones que permitan que el proyecto continúe, ya sea por cooptación o represión.

Desarrollo alternativo o alternativas al desarrollo

En el capítulo 2 se estableció el principio de que cada avance en el proceso de desarrollo da como resultado la generación de nuevas fuerzas de resistencia. En este capítulo se avanza la hipótesis de que en el último ciclo de desarrollo y resistencia en la era neoliberal, las fuerzas de oposición toman la forma no sólo de movimientos antisistémicos —luchas de clase para la tierra y trabajo, y, en el contexto actual, una lucha eco- y socioterritorial para conseguir el acceso al bien común y los derechos territoriales de la comunidad—, sino también de propuestas concretas para lograr un posdesarrollo y experimentos en la construcción de otro mundo, es decir, un desarrollo más inclusivo, equitativo y sostenible. A continuación, se resumen las alternativas más consecuentes atentadas o logradas en el contexto actual del último ciclo de desarrollo-resistencia.

El socialismo del siglo XXI: las economías social, solidaria y ecológica

Una característica del socialismo del siglo XXI, para diferenciarlo del socialismo del siglo XX, ha sido la construcción de una economía solidaria y comunitaria; es decir, avanzar el socialismo hacia una forma de desa-

rrollo local comunitario con el activismo de las organizaciones de base (“desde adentro y abajo”). En los casos de Ecuador y Bolivia, el proyecto de socialismo comunitario tenía dos vertientes: el desarrollo local en términos de construcción de una economía solidaria y comunitaria, y el concepto indígena de buen vivir, es decir, de cómo vivir bien en solidaridad social y armonía con la naturaleza. No obstante los casos de éxito en la construcción de economías sociales y solidarias con base en el comunismo y desarrollo local (en particular, las caracoles de las zapatistas), es evidente que en el caso de Bolivia y Ecuador el proyecto “socialista” de posdesarrollo en forma de desarrollo comunitario (construcción de economías solidarias y comunitarias) se convirtió, como argumenta Silvia Vega (2019), profesora de la Universidad Central de Ecuador, en una “apuesta fallida” por causa de las contradicciones del sistema capitalista en forma de extractivismo.

Como sostiene Acosta (2009), el extractivismo, incluso en su forma progresista en Bolivia y Ecuador, es una maldición más que una bendición, profundizando la crisis del sistema en lugar de resolverla. Por sus pecados, podemos decir, los proyectos de Evo Morales y Correa sufrieron de un desfase entre el discurso y las planificaciones estatales efectivamente desarrolladas. Véase, por ejemplo, la evaluación hecha por Acosta (2013) y Dávalos y Albuja (2015) sobre la política nacional y el modelo de desarrollo perseguido por el presidente Correa. Igualmente revelador es el libro de Vega (2019) sobre los casos de proyectos impulsados por Correa y Morales.

Los proyectos de desarrollo nacional de Morales y Correa, como el proyecto de Revolución Bolivariana de Hugo Chávez, fueron construidos en los marcos del socialismo del siglo XXI —un socialismo sostenido en el caso de Venezuela por una conciencia revolucionaria fundada en una ética socialista de desarrollo humano, pero en los casos de Bolivia y Ecuador por una larga experiencia en América Latina con la construcción de una “economía social, solidaria y ecológica” (Barkin 2021). Además de las resistencias y alternativas formadas en la esfera política del desarrollo nacional, y las fuerzas de resistencia que han surgido en la frontera extractiva, América Latina constituye un gran campo de expe-

rimentación, con modelos alternativos de economía social y solidaria a nivel de desarrollo local.

Actualmente, a lo largo de América Latina, existen grupos y comunidades que están organizando vías alternativas para asegurar su supervivencia y la de sus comunidades en el contexto de crisis en que viven. Lo que ha surgido en este contexto de experimentación con la construcción de una alternativa al desarrollo capitalista, es el concepto de una economía social y solidaria fundada en el cooperativismo, el desarrollo local, y, en algunos contextos (por ejemplo, Argentina, Chile, Bolivia y Perú), la autogestión de los trabajadores. Según Barkin y Sánchez (2017), este proyecto y las estrategias que lo encarnan reflejan una larga historia de experimentos de este tipo, pero en el contexto actual han surgido específicamente entre grupos y comunidades campesinos e indígenas, que se han organizado colectivamente en áreas rurales que, al mismo tiempo, han forjado economías sociales que demuestran su compromiso con la solidaridad social; lo que Barkin (2021) define como “economía ecológica desde abajo”.

La proliferación de estas iniciativas, argumenta Barkin, refleja un reconocimiento de la importancia del desarrollo humano y la relación de los procesos socioeconómicos con el medioambiente; relación recuperada en el concepto indígena del buen vivir (Acosta 2012; Gudyas 2013 y 2014a). Pero, más que eso, reflejan los esfuerzos de muchas comunidades por buscar una alternativa a las condiciones provocadas por la expansión de capitalismo en su forma actual de extractivismo. En estas condiciones, los diversos experimentos en la construcción de una economía social y solidaria reflejan la intención de las comunidades indígenas y campesinos de la frontera extractiva de enfrentar lo que los zapatistas han llamado la “hidra capitalista”.

Existen diferentes formas de entender el surgimiento de esta alternativa. Según Barkin y Sánchez (2017), esto refleja el activismo de un “nuevo sujeto colectivo”, una nueva fuerza revolucionaria o agencia transformadora. Sin embargo, hay quienes lo ven como una estrategia elaborada por el Banco Mundial y otras agencias de Cooperación Internacional, en busca de una válvula de escape de las presiones sobre los

gobiernos de la región de los migrantes internos, los “pobres del campo” cuya respuesta a la modernización de la agricultura (trabajo y migración) excede la capacidad del sistema. En torno a esta perspectiva, estos organismos internacionales de Cooperación Internacional desarrollaron una nueva estrategia basada en el capital social de los pobres y su empoderamiento en el desarrollo local y comunitario, y en el marco institucional de la descentralización. Un tercer enfoque teórico y analítico sobre la economía social y solidaria representa una fuerte tendencia dentro de la intelectualidad de izquierda, que, en la década de los noventa, tomó como referencia al zapatismo —no desde su levantamiento en 1994, sino desde su empeño por construir una sociedad alternativa al margen del sistema capitalista. La izquierda en este contexto respondía a un desencanto en el sector popular (“¡Que se vayan todos!”), y rechazó al partido político como instrumento para su gestión y práctica, a favor de la “acción social”.

Sea como fuere, la expansión del capital extractivo en el proceso de desarrollo resultó no sólo en un nuevo ciclo progresista en la política, sino también en una afluencia de experimentos en la construcción de una economía social y solidaria, una economía ecológica construida desde abajo, que, según Barkin, se basa en principios ampliamente consensuados en el movimiento social popular: principios de autonomía, solidaridad, autosuficiencia, diversificación productiva y gestión sostenible de los recursos territoriales y regionales.

La voz indígena y la ucronía del buen vivir

Díaz y Chacón (2014) analizan uno de los aspectos centrales de los conflictos socioambientales: la relación capital-naturaleza. Los autores reflexionan sobre el concepto indígena de buen vivir en cuanto las posibilidades que abren las experiencias constitucionales de Ecuador y Bolivia, al situar a la naturaleza como nuevo sujeto de derecho, y para pensar un horizonte civilizatorio alternativo y endógeno para la región, basado en formas de organización comunitaria y solidaria que tengan como meta o referencia modélica elementos propios de la cosmogonía de los pueblos

indígenas latinoamericanos. Debido a la contradicción entre ese concepto y la práctica política del gobierno de Rafael Correa, que aseguró la incorporación del concepto de los derechos de la naturaleza en la Constitución, se discutió el buen vivir como una idea, una ucronía, en vez de una experiencia o modelo. En todo caso, se pueden discernir las pautas de un modelo basado en el paradigma de este concepto, que se construyen en una confrontación con el modelo de la modernidad, el progreso y el desarrollo occidental, en un movimiento descolonizador indígena.

En la práctica, el proyecto de buen vivir construido en Ecuador y Bolivia no ha podido avanzar, principalmente por la relación contradictoria de este con el modelo neoextractivista primario-exportador utilizado por los gobiernos progresistas de Evo Morales y Rafael Correa. Debido a la contradicción entre la práctica y la teoría e ideología del indigenismo, ambos gobiernos entraron en una relación conflictiva con el movimiento indígena, que al menos en el caso de Bolivia mantuvo el neoextractivismo como guión de su práctica.

Conclusión

Este libro comienza con la observación de que cada fase o ciclo extendido en el desarrollo de las fuerzas productivas en condiciones de crisis, conduce al surgimiento de nuevas fuerzas de resistencia. Queda por ver si las fuerzas de resistencia a los avances del capital financiero y extractivo son suficientes para poder generar un proceso contrahegemónico, o si apuntan en la dirección de una distopía ante la crisis sistémica en curso. También se plantea la hipótesis de que en el contexto actual, la dinámica de esta resistencia expone contradicciones que están empujando al sistema hacia y más allá de sus límites. La idea aquí es que en el vórtice de estas fuerzas no sólo aparecen condiciones de conflicto político, sino propuestas alternativas de cómo salir de la crisis y encaminarse hacia otro mundo de desarrollo inclusivo y justicia social y ambiental. En efecto, se propuso que la resistencia conduce a alternativas, argumento que en este capítulo se sostiene en el contexto de los avances del capital

extractivo en la minería y en la extracción de hidrocarburos, los dos sectores de mayor importancia para el desarrollo en América Latina.

Se concluye que la resistencia a los avances de capital en el proceso de desarrollo ha tomado y sigue tomando diferentes formas. Se puso la resistencia en cinco categorías de mayor relevancia: 1) el proyecto de neodesarrollismo construido a propósito de incidir en el rumbo de la macroeconomía por la clase política; 2) la múltiple resistencia del movimiento campesino en el ámbito rural y la agricultura; 3) la resistencia cotidiana de los pobres del campo que habían decidido no migrar de su ámbito rural y buscar cómo pueden sobrevivir en los intersticios del sistema capitalista; 4) la resistencia en forma de dejar atrás o ir más allá del mercado y el Estado en la construcción de una economía social y solidaria; y 5) la resistencia de las comunidades en la frontera extractiva en una forma de enfrentar directamente los impactos negativos y destructivos de los proyectos y las operaciones del capital extractivo, y en la formación de un movimiento ecoterritorial.

En efecto, se llega a la conclusión de que la resistencia más trascendente en el contexto actual ha tomado la forma no de una lucha de clase por la tierra y el trabajo como en el transcurso del siglo xx, sino una lucha ecoterritorial de los indígenas y campesinos, los pobres del campo que han optado por el camino de la resistencia en lugar de la emigración, en una fuerza de trabajo para el sistema capitalista. Esta lucha incluye relaciones conflictivas con empresas capitalistas y multinacionales del sector, protestas por los impactos socioambientales negativos y destructivos de las operaciones extractivas, y una demanda por obtener acceso al bien común y respeto de sus derechos territoriales.

En el intento de medir la fuerza de esta resistencia, se enfrentó la cuestión de si las comunidades en la frontera extractiva, como sostiene Barkin, constituyen un nuevo actor o sujeto colectivo revolucionario, es decir, una fuerza contrahegémica con capacidad para liderar un proceso de cambio revolucionario o una transformación social. No se pudo afirmar la tesis de Barkin, propuesta en un debate no resuelto, lo que requiere más investigación y más estudios de caso. Pero lo que ha podido comprobarse es que la resistencia de las comunidades en la frontera

extractiva constituye un rico repositorio de propuestas y experimentos en la construcción de otro mundo. Es demasiado temprano para poder evaluar el balance de las fuerzas de esta resistencia, pues requiere una mirada más cercana y una investigación más profunda.

Reflexiones finales

América Latina tiene una larga experiencia con el extractivismo como forma de acumulación de capital y en el desarrollo de las fuerzas de producción. El primer caso histórico en la época del colonialismo y el extractivismo europeo, tenía que ver con una política y práctica imperial; es decir, tomó la forma de imperialismo extractivista —el saqueo de la riqueza y los recursos naturales extraídos del territorio de los pueblos originarios e indígenas, que, con la apropiación de su riqueza natural, fue violentamente desposeído de la tierra y sus medios de producción, y sometido a condiciones de esclavitud y sobreexplotación. En la era poscolonial, con la dependencia lograda a principios del siglo XIX, encontramos otra forma de extractivismo —la apropiación de la tierra y la extracción de sus recursos naturales— dentro del sistema capitalista. En esta coyuntura histórica, los investigadores han observado el surgimiento de un proceso de desarrollo capitalista, con una dinámica asociada con el desarrollo capitalista de las fuerzas de producción, y el surgimiento de fuerzas de resistencia relacionadas con este progreso. El desarrollo capitalista de las fuerzas de producción en la región, como en otras partes del mundo, comenzó con la separación de los pequeños productores, la mayoría de los cuales producían y trabajaban en relaciones de producción precapitalistas en una economía campesina, de sus medios de producción y el bien común, lo que resultó en el empobrecimiento de los campesinos y forzosamente su emigración a centros urbanos en busca de otra forma de vida —el trabajo asalariado—, que resultó en la formación de un proletariado, o más bien en condiciones de expansión del capital en la década de 1980, un semiproletariado de trabajadores rurales

sin tierra, que, junto con las comunidades indígenas en el caso de Ecuador, montaron poderosas fuerzas de resistencia en la década de 1990.

La conclusión principal de mis investigaciones sobre la dinámica del desarrollo en América Latina a lo largo de tres décadas de la era neoliberal (la década de 1990 y lo que viene en el nuevo milenio), fue una correspondencia entre las fuerzas de desarrollo capitalistas y las fuerzas de resistencia a esta dinámica. La conclusión sirvió como una hipótesis para guiar la investigación de campo. La hipótesis era que cada avance de capital en el proceso de desarrollo despierta o genera nuevas fuerzas de resistencia.

En primera instancia, esta hipótesis se constató al descubrir y reconstruir las dinámicas de tres ciclos de resistencia al desarrollo capitalista en la era neoliberal. El primer ciclo se desplegó en la década de 1980, con la implementación de un modelo neoliberal en la política macroeconómica de varios gobiernos dentro los marcos del Consenso de Washington sobre las virtudes del capitalismo de libre mercado —un proceso que avanzó (en México, Brasil, Perú y Argentina) en forma radical en la próxima década.³⁶ El desarrollo capitalista en este contexto incluyó 1) la destrucción de las fuerzas de producción en la agricultura, y en algunos casos en la industria (particularmente en México y Brasil); 2) la expansión de los flujos de capital en forma de inversiones de capital extranjero (el capital extractivo a un ritmo creciente); 3) la reprimarización de las exportaciones del producto social, fortaleciendo la estrategia extractivista en la política; y 4) la formación de un semiproletariado de trabajadores rurales sin tierra, que, junto con las comunidades indígenas en Ecuador (y México, en el caso del zapatismo), llegaron a liderar la resistencia contra el modelo neoliberal y la agenda política —un mecanismo para asegurar que el capitalismo no avanzara en la región.

Al parecer, la resistencia en estas condiciones y la articulación tomó dos formas principales. Uno fue la formación de un movimiento campesino, con su expresión más significativa en el MST, cuya resistencia se manifiesta en la dinámica política de las ocupaciones de la tierra (véase

³⁶ Acerca de esta dinámica, véase Petras y Veltmeyer (2001 y 2005).

Robles y Veltmeyer 2105), y en la construcción de un modelo alternativo de desarrollo en la agricultura basado en la revolución agroecológica y una política de soberanía alimentaria —una política acordada con el movimiento campesino global (Vía Campesina). Otra expresión de resistencia frente a los avances del capital en la década de 1990, fue el movimiento campesino e indígena contra la agenda neoliberal. Este movimiento fue lo suficientemente fuerte como para detenerla y generar una desincronización con el neoliberalismo, que creó condiciones que permitieron a la clase política de centroizquierda asumir el poder, resultando en la formación de un ciclo progresista en la política.

En las dos décadas del nuevo milenio pudimos detectar otro ciclo de desarrollo y resistencia, que corresponde a los avances en el capital extractivo y el extractivismo en la agenda de los gobiernos progresistas y neoliberales. Esta dinámica tomó la forma de neoextractivismo, un modelo de dos patas: 1) el neodesarrollo en forma de una nueva política social orientada a la reducción de la pobreza (para lograr un desarrollo alternativo más inclusivo), y 2) el extractivismo en la forma de financiar una estrategia de reducción de la pobreza (por capturar la renta del suelo y de los recursos).

En esta investigación se llegó a la conclusión acerca de la dinámica del desarrollo capitalista y de la resistencia en la frontera extractiva. En el capítulo 2 se reconstruyó la dinámica de la nueva geoeconomía capital en América Latina, mientras en el capítulo 3 se describió la dinámica correspondiente en la política, es decir, un ciclo progresista. Con esto se constata el papel preponderante del movimiento campesino en la resistencia —en detener la agenda neoliberal de muchos gobiernos y en ofrecer en la práctica un modelo alternativo de desarrollo de las fuerzas de producción en la agricultura (en forma de una economía de producción para alimentos orientada al mercado local). Se concluyó que el campesinado, en forma de trabajadores rurales sin tierra, constituye la principal barrera a los avances del capitalismo en la agricultura. Sin embargo, esta resistencia no pudo impedir ni la expansión del capital extractivo ni la agroextracción en forma de una economía de soja en el Cono Sur (Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil). Esta dinámi-

ca incluyó la conversión de la tierra para cultivar productos agroalimentarios en la producción de agrocombustibles. Esta expansión, facilitada por la interacción entre el capital agroindustrial y extractivo, y la alianza entre el capital y el Estado, ha dado lugar a una reducción del espacio para la producción campesina y un nuevo mercado del bien común. Esta dinámica ha permitido otro ciclo de acumulación por desposesión, y, en este contexto, la expulsión y la emigración de los pobres del campo los ha convertido en un ejército de reserva para los mercados laborales del sistema capitalista.

El análisis en los capítulos 4 y 6 ha permitido reconstruir la dinámica asociada con la expansión de la frontera extractiva. En el capítulo 4 se analizó la dinámica asociada con la agroextracción y la expansión del capital extractivo en la agricultura. En el capítulo 5 se reconstruyó la dinámica de capital extractivo en el desarrollo de las fuerzas de producción en la minería, el sector de mayor importancia tanto para el extractivismo clásico como para la nueva geoeconomía del capital. Se discutió el caso de México, no tanto porque represente el ejemplo más importante o sobresaliente de un país minero, sino porque permite reconstruir la dinámica histórica de diversos ciclos en el extractivismo en la minería, desde la época colonial hasta la era neoliberal. En el capítulo 6 se describió la dinámica de las fuerzas de resistencia (en forma de conflictos entre las comunidades y las empresas multinacionales) que corresponden a este “desarrollo”.

Los casos de Bolivia y Ecuador, en términos de la dinámica de desarrollo y la resistencia en la minería y en la extracción de hidrocarburos, han permitido presentar las conclusiones relevantes para entender tanto las oportunidades como los límites del extractivismo como modelo y estrategia de desarrollo nacional —un desarrollo alternativo que es inclusivo y sostenible, y que señala otro mundo de justicia social y ambiental. La relevancia de estos dos casos del extractivismo es que representan la forma más radical y progresiva de combinar el desarrollo con el neoextractivismo, lo que permite identificar y exponer las contradicciones fundamentales del sistema capitalista y de los extractivismos.

La característica sobresaliente del extractivismo en Bolivia y Ecuador es que tiene su base en los movimientos —en las comunidades y el movimiento indígena. No sólo fue un factor detonante en la formación de un régimen progresista en la política, sino que resultó³⁷ en la construcción de un país multiétnico e intercultural con un compromiso constitucional para proteger los derechos de la naturaleza, un elemento vital de la concepción indígena del buen vivir o vivir bien. En ambos casos, este compromiso constitucional dio lugar a una aguda contradicción entre esta concepción indígena de cómo vivir en condiciones de solidaridad y armonía con la naturaleza, y el modelo extractivista de desarrollo nacional. En ambos casos, bajo la presidencia de Evo Morales en un caso y la de Rafael Correa en el otro, el gobierno siguió un camino construido sobre la base de una alianza con capital global (inversionistas y empresas multinacionales) en el sector extractivo. Y ambos gobiernos, al final del camino, perdieron su base en las comunidades y movimientos indígenas al seguir una política extractivista que contradice su compromiso con el buen vivir y una forma alternativa de desarrollo o posdesarrollo.

En el último capítulo del libro se abordó la cuestión de las alternativas que han emergido en el contexto de la resistencia a los avances de capital extractivo en el proceso de desarrollo. Estas alternativas, o formas de posdesarrollo, incluyen propuestas para un desarrollo más inclusivo en forma de una nueva política social centrada en la reducción de la pobreza; propuestas de una alternativa no sólo al neoliberalismo, sino también bajo formas antisistémicas (buen vivir, socialismo del siglo XXI, etc.). También esto incluye una referencia a diversas experiencias con la construcción de una economía social y solidaria (Coraggio 2011), y a

³⁷ Con el fin del auge de los productos básicos, los gobiernos progresistas, con excepción de Bolivia, perdieron su dinámica de crecimiento económico y fueron subyugados a la reacción de la derecha, lo que puso fin a los progresismos. Entre 2012 y 2015 vimos un giro brusco hacia la derecha en la política electoral de los gobiernos progresistas, otra vez con excepción de Bolivia, que mantuvo su dinamismo hasta noviembre de 2019 cuando Morales fue sujeto a un golpe de Estado. Sin duda la capacidad del gobierno de Bolivia para resistir las fuerzas que tumbaron a los otros progresismos tiene que ver con su base en los movimientos, lo que no tenían los otros gobiernos.

propuestas de un desarrollo alternativo en la agricultura; proposiciones del movimiento campesino orientados hacia la producción sostenible de alimentos para los mercados locales en condiciones de armonía con la naturaleza, y en condiciones de soberanía alimentaria y biodiversidad.

Se presentan estas resistencias y alternativas no como soluciones a la crisis sistémica en América Latina y otras partes del mundo, sino con la esperanza de abrir un debate sobre el tema. La posición de este libro, teniendo en cuenta el argumento que se ha construido capítulo por capítulo, es que la crisis sistémica del capitalismo, como cualquier otra, se presenta no sólo como un desafío intelectual y político, sino como claves de una solución, es decir, una salida de la situación en la que se encuentran las fuerzas del cambio movilizadas por la misma inestabilidad.

Sin duda, la crisis del covid-19 se resolverá tarde o temprano a través de la gestión colectiva de la comunidad de naciones, de gobiernos informados y apoyados por comunidades de científicos de epidemiología. Pero la dificultad sistémica del capitalismo es otra cuestión. Por un lado, el propio sistema genera fuerzas de resistencia con la capacidad de hacer frente a la crisis, si no para derrocar el sistema, el sueño perenne de la izquierda. Hasta ahora, al menos en el contexto actual del proceso de desarrollo capitalista en la periferia latinoamericana, estas fuerzas no son lo suficientemente poderosas como para constituir una fuerza revolucionaria e inducir una transformación del sistema. Desafortunadamente, es una de las conclusiones de esta investigación.

Pero cuando pensamos en el neoliberalismo, es decir, el capitalismo de libre mercado, la realidad es más alentadora. En primer lugar, nunca existió como tal; es decir, el neoliberalismo en el contexto actual sólo funciona como una ideología, no como una práctica o modelo económico viable. A finales de la década de 1980, sólo seis años después del Consenso de Washington y su fe en las virtudes del capitalismo de libre mercado, los guardianes del nuevo orden mundial reconocieron que el neoliberalismo no funcionaba y defendieron la necesidad de buscar un mejor equilibrio entre el mercado y el Estado. Varios gobiernos de la región (particularmente Argentina, Brasil, México y Perú) insistieron en avanzar en la agenda neoliberal en su política, pero este progreso

se detuvo a través del activismo de los movimientos campesinos, que tuvieron la fuerza para detener el avance, aunque no para poner fin al neoliberalismo.

Sin embargo, ni el capitalismo ni el extractivismo parecen estar a punto de desaparecer. El extractivismo como modelo y estrategia de desarrollo nacional está presente en la práctica tanto de los gobiernos de México como otros gobiernos progresistas, por ejemplo, Bolivia y Ecuador. Se analizó en particular las ideas de García Linera, vicepresidente de Bolivia y el principal ideólogo del régimen, en relación con el extractivismo; un modelo y práctica que contradice fuertemente el concepto indígena del buen vivir propuesto por el gobierno (véase la discusión en la introducción y el capítulo 3). Con esto observamos cómo García Linera, a pesar de su adhesión ideológica al buen vivir, insistió en que era posible y necesario combinar el extractivismo con un mínimo capitalismo y el socialismo comunitario. A pesar de los logros del régimen a nivel de neodesarrollo (crecimiento económico y reducción de la pobreza), en trece años de gobierno no ha sido posible superar o resolver las contradicciones del capitalismo en forma de extractivismo. Al final de su mandato (ocasionado por un golpe de Estado orquestado por la derecha parlamentaria), en noviembre de 2019, Evo Morales perdió el apoyo de su base en los movimientos y comunidades indígenas debido a su política extractivista. Se concluye que el extractivismo, de una forma u otra, incluido el neoextractivismo progresivo, no es factible sin la participación de las comunidades afectadas. Una contradicción fundamental del extractivismo, experimentado incluso por los gobiernos más progresistas, como Bolivia y Ecuador, es que se basa en una alianza con el capital global más que con las comunidades. En este caso, una política extractivista no es compatible con el desarrollo inclusivo, igualitario y sostenible en términos de medioambiente, diversidad natural y social, y la buena vida.

Otra conclusión a la que se ha llegado (véase el capítulo 6), es que el capitalismo en su forma actual, es decir, en forma de una interacción entre el capital industrial, financiero y monopolístico, y el capital extractivo, con el predominio de este último en el contexto regional, está en

crisis y ya no es viable. El capitalismo está sujeto a fuerzas generadas por las contradicciones del sistema que conducirán a la transformación productiva y social. Está claro que, debido al peso de varias contradicciones superpuestas, el proyecto de reforma del capitalismo, o sea, buscar un camino de capitalismo más humano y sostenible, ha llegado a sus límites, un punto de inflexión entre la distopía y la utopía. Las fuerzas de resistencia están claramente dirigidas a transformar el sistema, una de las varias formas posibles de posdesarrollo o una nueva forma de socialismo.

En cuanto al extractivismo, se identificaron tres enfoques y posturas básicas. Uno está representado por las organizaciones internacionales de los guardianes del sistema capitalista. Incluyen no sólo organizaciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, sino también asociaciones y coaliciones de gobiernos y organizaciones del sector privado para el “crecimiento económico inclusivo” y el desarrollo sostenible de los recursos naturales. En este enfoque, el extractivismo, es decir, la explotación de la riqueza de los recursos naturales representa una oportunidad económica que ningún gobierno puede y no debe descartar. Se supone que los costes y riesgos socioambientales son aceptables en el contexto de los altos beneficios. En resumen, es una bendición para el país en desarrollo. Los riesgos e impactos negativos del extractivismo pueden mitigarse y resolverse con una buena gestión, y la autorregulación y responsabilidad social de las corporaciones del sector.

Otro enfoque, compartido por las comunidades negativamente afectadas por el extractivismo, los activistas del movimiento para promover el desarrollo sostenible y proteger la biodiversidad del planeta y la intelectualidad anticapitalista o progresista del planeta, es que el extractivismo no es canjeable. No puede formar parte de un proceso de desarrollo sostenible, inclusivo, equitativo, participativo y democrático. Este enfoque crítico obviamente domina los debates políticos sobre el tema.

El tercer enfoque del extractivismo está claramente representado, aunque con mucha controversia, por el exviceministro de Bolivia, el sociólogo posmarxista Alvaro García. Sostiene —y no se tiene la base teórica o empírica para un contraacuerdo (y por lo tanto se deja a debate)— que el extractivismo tal como lo entendemos (es decir, con la parti-

cipación del capital extranjero) es para Bolivia (y por lo tanto para otros países de la región) una parte esencial de una estrategia de desarrollo sostenible en la dirección del socialismo, y es compatible con el proyecto de construir el socialismo en el siglo XXI. Debemos entender, argumenta García (2013), que “existe una dimensión natural en cualquier actividad social productiva y una dimensión social en cualquier actividad natural creativa”. En otras palabras, la dimensión social es un componente del metabolismo natural. En este sentido, la forma en que los seres humanos se relacionan con la naturaleza es parte de las características de un modo específico de producción social. En cualquier caso, “la actividad humana sólo es posible mediante la transformación de la naturaleza, ya sea en forma de choza o ciudad, campos o aceras, presas o turbinas, hachas o camiones de volteo; todo, absolutamente todo, ya que la vida ha existido en este planeta” (García 2013). La vida natural y social “necesita procesar la naturaleza para extraer componentes biológicos de su reproducción y componentes materiales de sus herramientas”. En resumen, los seres humanos por naturaleza transforman y afectan a la naturaleza circundante. La solución, sostiene el autor, no es política (extractivismo o no) sino técnica (el uso de la tecnología verde) y regulación por parte del Estado sobre el capital y sus operaciones extractivas, respetando los derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas, y su participación (García 2012).³⁸

³⁸ Hay abundante literatura sobre la contradicción entre esta concepción de una estrategia práctica de gobierno progresista dirigida por Evo Morales y García Linera. Un ejemplo de esta contradicción es la política del gobierno hacia el Tipnis. En cuanto a la CIDOB, una organización de pueblos indígenas y campesinos, junto con Conamaq, organizó dos marchas en 2011 y 2012 contra una carretera amazónica propuesta a través del Tipnis. Los intentos del gobierno culminaron en una violenta represión policial, y momentáneamente convirtieron la opinión popular contra Morales y su agenda de extraer recursos estatales en territorio indígena. Sin embargo, según el análisis de García (2012), esta dramatización “histórica” de la marcha del Tipnis es en realidad una estrategia de dominación colonial (ambientalismo extraterritorial), que aprovecha la contradicción interna dentro del bloque popular revolucionario que llevó a Morales al poder.

Al final de este viaje a través de la historia y la dinámica del extractivismo, el objetivo central de este ensayo, no se puede ir más allá de la conclusión incierta sobre el papel del extractivismo en la coyuntura actual que se tiene por delante. Tal vez, como piensa y sostiene García, el extractivismo necesariamente tiene que ser parte de la solución (la salida a la crisis del sistema capitalista). La pregunta, la cuestión del desarrollo de las fuerzas productivas aquí y en el futuro en América Latina, es ¿cómo y en qué condiciones? Este problema no tiene una solución puramente teórica, depende de la capacidad y el activismo de las fuerzas de resistencia para promover y llevar a cabo una transformación del sistema capitalista y lograr otro mundo, una mancomunidad que incluye a todos y permite a todos participar en la riqueza común. Y esto depende de saber solucionar lo que es un impasse teórico: combinar una conciencia de las contradicciones del sistema capitalista (lo que nos proporcione el marxismo) con la conciencia del poder de conocimiento —el saber de cada uno sobre su poder potencial (lo que proporcione el posdesarrollo).

Bibliografía

- ACOSTA, A. 2009. *La maldición de la abundancia*. Quito: Ediciones Abya-Yala.
- ACOSTA, A. 2011. "Extractivismo y neoextractivismo: dos caras de la misma maldición". En *Más allá del desarrollo*, coordinado por Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo. Quito: Fundación Rosa Luxemburg.
- ACOSTA, A. 2012. *Buen Vivir. Sumak kawsay. Una oportunidad para imaginar otros mundos*. Quito: Abya-Yala.
- ACOSTA, A. 2013. "El correísmo. Un nuevo modelo de dominación burguesa". En *El correísmo al desnudo*. <http://montecristivive.com/wp-content/uploads/2015/01/el-correismo-al-desnudo-prensa.com-pressed.pdf>.
- ACOSTA, A. y J. Cajas. 2018. *Una década desperdiciada: las sombras del correísmo*. Quito: Centro Andino de Acción Popular.
- ACOSTA, A., E. Lander y E. Gudynas. 2009. *El buen vivir. Una vía para el desarrollo*. Quito: Abya-Yala.
- ADEL, A. 2006. *Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina: la construcción de nuevas democracias*: Buenos Aires: Clacso.
- ALARCÓN, D. 2011. "Depredación en tierras amazónicas". *Prensa Latina*, marzo. <https://contralinea.com.mx/depredacion-en-tierras-amazonicas>.
- ALTIERRI, M. A. y V. Toledo. 2011. "The Agroecological Revolution in Latin America: Rescuing Nature, Ensuring Food Sovereignty and Empowering Peasants". *Journal of Peasant Studies* 38, núm. 3: 587-612.
- AMIN, S. 2013. *The Implosion of Capitalism*. Londres: Pluto Press.
- ARAGHI, F. 2010. "Accumulation by Displacement, Global Enclosures, Food Crisis and the Economic Contradictions of Capitalism". *Review* 32, núm. 1: 113-146.

- ARELLANO, M. 2010. *Canadian Foreign Direct Investment in Latin America*. Ottawa: North-South Institute.
- AZZELLINI, D. y M. Kraft, coords. 2019. *The Class Strikes Back. Self-Organised Workers Struggles in the Twenty-First Century*. Chicago: Haymarket.
- BÁRCENA, A. 2011. "Spreading the wealth". *Finance & Development*: 20-21.
- BARKIN, D. 2021. "The Community as a Collective Revolutionary Subject". En *The Essential guide to Critical Development Studies*, coordinado por H. Veltmeyer y P. Bowles. Londres: Routledge.
- BARKIN, D. y A. H. Sánchez. 2017. *The Collective Revolutionary Subject: New Forms of Social Transformation*. Revolutions: A Conference, Winnipeg.
- BARRETT, P., D. Chávez y C. Rodríguez comps. 2008. *The New Latin American Left: Utopia Reborn*. Londres: Pluto Press.
- BARSKI, O. y M. Dávila. 2008. *La rebelión del capo. Historia del conflicto agrario argentino*. Buenos Aires: Sudamericana.
- BARTRA, R. 1976. *Estructura agraria y clases sociales en México*. Ciudad de México: Era.
- BATEMAN, M. 2020. *Why Didn't Microfinance Work? The Destructive Rise and Fall of Local Neoliberalism*. Londres: Zed Books.
- BEBBINGTON, A. 2009. "The New Extraction: Rewriting the Political Ecology of the Andes?". *NACLA Report on the Americas* 42, núm. 5: 12-21.
- BEBBINGTON, A. et al. 2011. *Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas. Una ecología política de transformaciones territoriales*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos y Centro Peruano de Estudios Sociales.
- BEBBINGTON, A. y J. Bury, coords. 2013. *Subterranean Struggles: New Dynamics of Mining, Oil and Gas in Latin America*. Austin: University of Texas Press.
- BELLO, W. 2009. "The Global Collapse: A Non-Orthodox View". *Z Net*. <http://www.zmag.org/znet/viewArticle/20638>.
- BERNSTEIN, H. 2010. *Dinámica de clase de modificación agraria*. Halifax: Fernwood Publications.
- BERNSTEIN, H. 2012. *Class Dynamics of Agrarian Change*. Halifax: Fernwood Publications.
- BERRÍOS, C. y V. Cuevas. 2004. "El petróleo y la resistencia indígena en Ecuador". En *Saltar la barrera: crisis socio-ambiental, resistencias populares y*

- construcción de alternativas latinoamericanas al neoliberalismo*, coordinado por F. Rivera y A. Pinol. Santiago de Chile: ICAL.
- BERTERRETICHE, J. L. 2013. "El discurso de Pepe Mujica en la ONU y el tango 'Cambalache'". *Resumen Latinoamericano*.
- BLAS, J. 2013. "Commodity Traders Reap \$250bn Harvest". *Financial Times*, 14 de abril. <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/9f6f541e-a397-11e2-ac00-00144feabdc0.html>.
- BOISIER, S. *et al.* 1992. *La descentralización: el eslabón perdido de la cadena transformación productiva con equidad y sustentabilidad*. Santiago: Cuadernos de CEPAL.
- BOLTVINIK, J. y D. Araceli, coords. 2006. "La pobreza en México y el mundo. Realidades y desafíos". *Estudios demográficos y urbanos* 21, núm 1: 243-248.
- BOLTVINIK, J. y S. Archer. 2016. *Peasant Poverty and Persistence in the 21st Century*. Londres: Zed Books.
- BONASSO, M. 2010. *El mal: el modelo K y la Barrick Gold. Amos y servidores en el saqueo de Argentina*. Buenos Aires: Editorial Planeta.
- BORÓN, A. 2008. "Teorías de la dependencia". *Realidad Económica*, núm. 238.
- BORRAS, S. *et al.* 2012. "Land Grabbing in Latin America and the Caribbean". *Journal of Peasant Studies* 39, núms. 3-4: 845-872.
- BRANDT, U. y M. Wissen. 2013. "Crisis socioecológica y modo de vida imperial. Crisis y continuidad de las relaciones sociedad-Naturaleza en el capitalismo". En *Alternativas al capitalismo/colonialismo del siglo XXI*. Ecuador: Abya Yala.
- BRESSER, L. C. 2006. "El nuevo desarrollismo y la ortodoxia convencional". *Economía UNAM* 4, núm. 10: 7-29.
- BRESSER, L. C. 2007. "Estado y mercado en el nuevo desarrollismo". *Nueva Sociedad* 210: 110-125.
- BRESSER, L. C. 2009. *Developing Brazil: Overcoming the failure of the Washington Consensus*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- BRETÓN, V. 2017. "Three divergent understandings of *Buen Vivir* in the Ecuador of the Citizen's Revolution". *Latin American and Caribbean Ethnic Studies* 12, núm. 2.
- BULMER, V. 2014. *The economic history of Latin America since independence*. Nueva York: Cambridge.

- BURCHARD, H. J. y K. Dietz. 2014. "(Neo-)extractivism—A New Challenge for Development Theory from Latin America". *Third World Quarterly* 35, núm. 3: 468-486.
- CASTELO, R. 2012. "O novo desenvolvimentismo e a decadência ideológica do pensamento econômico brasileiro". *Serviço Social e Sociedade*, núm. 112: 613-636.
- CEPAL. 1996. *Transformación productiva con equidad: la tarea prioritaria del desarrollo de América Latina y el Caribe en los años noventa*. Santiago: CEPAL.
- CEPAL. 2002 y 2016. *Anuarios Estadísticos de América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile.
- CEPAL. 2007. *Anuario estadístico de América Latina y el Caribe*. Santiago: CEPAL.
- CEPAL. 2009. *Economic Survey of Latin America and the Caribbean*. Santiago: CEPAL.
- CEPAL. 2010, 2012, 2015 y 2016. *Panorama Social de América Latina*. Santiago: CEPAL.
- CEPAL. 2010, 2013 y 2019. *La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe*. Santiago: Naciones Unidas.
- CEPAL, FAO e IICA. 2010. *Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 2010*. Santiago: CEPAL, FAO e IICA.
- CHAPARRO, E. 2006. *Industrias extractivas y desarrollo sostenible en América Latina*. Santiago: CEPAL.
- CIDSE y ALAI. 2009. *América Latina: Riqueza privada, pobreza pública*. Quito: CIDSE-ALAI. <https://mundoroto.files.wordpress.com/2016/03/amc3a9rica-latina-riqueza-privada-pobreza-pc3bablica.pdf>.
- CISNERO, F. 2011. "Los países mineros quieren dejar de serlo. Entrevista con Eduardo Gudynas". *Qué Pasa*, abril. http://www.elpais.com.uy/suplemento/quepasa/-los-paises-mineros-quieren-dejar-deserlo-/quepasa_558586_110409.html.
- COLLIER, P. y A. J. Venables. 2011. *Plundered Nations? Successes and Failures in Natural Resource Extraction*. Londres: Palgrave Macmillan.
- CORAGGIO, J. L. 2011. *Economía social y solidaria. El trabajo antes que el capital*. Quito: Ediciones Abya Yala.

- CORNIA, G. A. 2010. "Income distribution under Latin America's new left regimes". *Journal of Human Development and Capabilities* 11, núm. 1: 85-114.
- CORNIA, G. A. 2014. "Recent Distributive Changes in Latin America: An Overview". En *Falling Inequality in Latin America: Policy Changes and Lessons*, compilado por G. A. Cornia, 4-23. Oxford: Oxford University Press.
- CROUCH, C. y A. Pizzorno. 1978. *Resurgimiento del conflicto de clases en Europa Occidental desde 1968*. Londres: Holmes & Meier.
- CRUTZEN, P. J. y E. F. Stoermer. 2000. "The Anthropocene". En *The Global Warming Reader*, coordinado por B. McKibben, 69-79. Londres: Penguin Books.
- CYPHER, J. 2010. "South America's Commodities Boom: Developmental Opportunity or Path dependent Reversion?". *Canadian Journal of Development Studies* 30, núms. 3-4: 635-662.
- DASGUPTA, S. y A. Singh. 2006. "Manufacturing, Services and Premature Deindustrialization in Developing Countries". *Research Paper*, N.2006/49.
- DÁVALOS, P. y V. Albuja. 2015. "Ecuador: Dinámicas de extractivismo, política y discurso". En *El neoextractivismo: ¿un modelo posneoliberal de desarrollo o el imperialismo del siglo XXI?*, editado por H. Veltmeyer y J. Petras, 144-171. México: Editorial Crítica-Ediciones Culturales Paidós.
- DAVIS, M. 1984. "The Political Economy of Late-Imperial America". *New Left Review*, núm. 143.
- DE ECHAVE, J. 2008. *Diez años de minería en el Perú*. Lima: Cooperación.
- DE LA TORRE, C. 2013. "El tecnopopulismo de Rafael Correa. ¿Es compatible el carisma con la tecnocracia?". *Latin American Research Review* 48, núm. 1: 24-43.
- DE SOUSA, B., coord. 2020. *Ecuador: La insurrección de Octubre*. Buenos Aires: Clacso.
- DELGADO, R. 2018. "The Migration-Development Nexus". En *The Essential Guide Critical Development Studies*, coordinado por H. Veltmeyer y P. Bowles, 314-327. Londres: Routledge.
- DELGADO, R. y D. Martin. 2015. "The Political Economy of Global Labour Arbitrage". En *Handbook of the International Political Economy of Production*, editado por K. Van der Pijl, 59-75. Cheltenham: Edward Elgar.
- DELGADO, R. y R. del Pozo. 2002. "Minería, Estado y gran capital en México". *Economía e Sociedade* 16, núm. 1: 23.

- DESMARAIS, A. 2007. *La Vía Campesina: Globalization and the power of peasants*. Halifax: Fernwood Publicaciones.
- DÍAZ, K. y P. Chacón. 2014. "Buen vivir en América Latina. Naturaleza, comunidad y conflictos ambientales". En *Saltar la barrera: crisis socio-ambiental, resistencias populares y construcción de alternativas latinoamericanas al neoliberalismo*, coordinado por F. Rivera y A. Pinol, 127-146. Santiago de Chile: ICAL.
- DOS SANTOS, T. 2003. *La teoría de la dependencia: balance y perspectivas*. Buenos Aires: Plaza Janés.
- ERTEN, B. y J. A. Ocampo. 2013. "Super Cycles of Commodity Prices Since the Mid-Nineteenth Century". *World Development* 44: 14-30.
- ESCOBAR, A. 1992. "El 'postdesarrollo' como concepto y práctica social". En *Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización*, coordinado por D. Mazo. Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela.
- EZQUERRO, A. 2016. "Poisoned, Dispossessed and Excluded: A Critique of the Neoliberal Soy Regime in Paraguay". *Journal of Agrarian Change* 16, núm. 4: 702-710.
- FAÉ, R. 2015. "Desenvolvimento no Brasil: Semelhanças e diferenças entre o Nacional-Desenvolvimentismo e as propostas governamentais da atualidade". *Revista Pensamento Contemporâneo em Administração* 9, núm. 1: 51-69.
- FAIRBAIRN, M. 2014. "Like Gold with Yield: evolving intersections between farmland and finance". *Journal of Peasant Studies* 41, núm. 5: 777-795.
- FAO. 2011. *Land Tenure and International Investments in Agriculture*. Roma: FAO.
- FÉLIZ, M. 2015. "¿Qué hacer... con el desarrollo? Neodesarrollismos, buen vivir y alternativas populares". *Sociedad y Economía*, núm. 28: 29-50.
- Foro de los Pueblos Indígenas, Minería, Cambio Climático y Buen Vivir. 2010. *Suscribe Declaración*. Lima: Servicios en Comunicación Intercultural Servindi.
- FOSTER, J. B. 1999. "Marx's Theory of Metabolic Rift: Classical Foundations for Environmental Sociology". *American Journal of Sociology* 105: 366-405.
- FOSTER, J. B. 2002. "Capitalism and Ecology: The Nature of the Contradiction". *Monthly Review* 54, núm. 4: 6-16.

- FOSTER, J. B. y F. Magdoff. 2008. "Financial Implosion and Stagnation: Back to the Real Economy". *Monthly Review* 60, núm. 6: 1-10.
- FRIEDMAN, E. J. 2009. "Re(gion)alizing women's human rights in Latin America". *Politics & Gender* 5, núm. 3: 349-375.
- FRÖBEL, F., J. Heinrichs y O. Kreye. 1980. *The New International Division of Labour. Structural Unemployment in Industrialised Countries and Industrialisation in Developing Countries*. Cambridge: Cambridge University Press.
- GARCÍA, A. 2010. *Del Estado aparente al Estado integral: la construcción democrática del socialismo comunitario*. La Paz: Vicepresidencia del Estado.
- GARCÍA, A. 2011. *Las tensiones creativas de la revolución. La quinta fase del Proceso de Cambio*. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional.
- GARCÍA, A. 2012a. *Las empresas del Estado. Patrimonio colectivo del pueblo boliviano*. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional.
- GARCÍA, A. 2012b. *Geopolítica de la Amazonía: poder hacendal patrimonial y acumulación capitalista*. La Paz: Vicepresidencia del Estado.
- GARCÍA, A. 2013. "Una vez más en el llamado Extractivismo". *Revisión mensual en línea*: 1-9. mrzine.monthlyreview.org/2013/gl290413.html
- GARCÍA, A. 2015. *Socialismo comunitario. Un horizonte de época*. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional.
- GARRY, S. y J. C. Moreno. 2015. "Is a New Era of Growth on the Horizon for Latin America?". *World Economics Association Newsletter* 5, núm. 6. <http://www.worldeconomicsassociation.org/files/Issue5-6.pdf>.
- GAUDICHAUD, F. 2016. "¿Fin de ciclo? Los movimientos populares, la crisis de los 'progresismos' gubernamentales y las alternativas". *Revista Herramienta*, núm. 58. <http://www.herramienta.com.ar/node/2540>.
- GAUDICHAUD, F., J. Webber y M. Modonesi. 2019. *Los gobiernos progresistas latinoamericanos del siglo XXI. Ensayos de interpretación histórica*. México: UNAM.
- GIARRACCA, N. y M. Teubal. 2010. "Disputa por los territorios y recursos naturales: el modelo extractivista". *Alasru*, núm. 5.
- GIARRACCA, N. y M. Teubal. 2015. "Argentina: dinámicas extractivistas de la producción de soja y la minería abierto al cielo." En *El neoextractivismo: ¿un modelo posneoliberal de desarrollo o el imperialismo del siglo XXI?*, 47-79. México: Editorial Crítica-Ediciones Culturales Paidós.

- GILLS, B. 2020. "Deep Restoration: From The Great Implosion to the Great Awakening". *Globalizations*.
- GIRVAN, N. 2014. "Extractive Imperialism in Historical Perspective". En *Extractive Imperialism in the Americas*, compilado por J. Petras y H. Veltmeyer, 49-61. Leiden: Brill Books.
- GLIESSMAN, S. 2018. "Scaling-out and Scaling-up Agroecology". *Agroecology and Sustainable Food Systems* 42, núm. 8: 841-842.
- GÓMEZ, J. C., J. P. Jiménez y D. Morán. 2015. "El impacto fiscal de la explotación de los recursos naturales no renovables en los países de América Latina y el Caribe". En *Documentos de Proyectos*. Santiago de Chile: CEPAL.
- GONÇALVES, R. 2012. "Novo Desenvolvimentismo e Liberalismo Enraizado". *Serviço Social & Sociedade*, núm. 112: 637-671.
- GONÇALVES, R. 2019. "Liberación económica, desigualdad y pobreza en América Latina en el siglo XXI, ¿los modelos de desarrollo económico hacen alguna diferencia?". En *Neodesarrollismo y socialismo bolivariano modelos de desarrollo y políticas públicas en américa latina*, coordinado por P. Vidal, 104-135. Buenos Aires: Clacso.
- GOODMAN, D., B. Sorj y J. Wilkinson. 1987. *From Farming to Biotechnology: A Theory of Agro-Industrial Development*. Oxford: Basil Blackwell.
- GOOTENBERG, P. 2010. *Indelible Inequalities in Latin America: Insights from History, Politics, and Culture*. Durham: Duke University Press.
- GORDON, T. 2010. *Imperialista Canada*. Winnipeg: Arbeiter Ring.
- GORDON, T. y J. Webber. 2008. "Imperialism and Resistance: Canadian mining companies in Latin America". *Third World Quarterly* 29, núm. 1: 63-87.
- GORDON, T. y J. Webber. 2016. *Blood of Extraction: Canadian Imperialism in Latin America*. Halifax: Fernwood Publishing.
- Government of Canada. 2012. *Driving Inclusive Economic Growth: The Role of the Private Sector in International Development*. Ottawa: Public Works and Government Services Canada.
- GRANDIN, G. 2014. *The Last Colonial Massacre: Latin America in the Cold War*. Chicago: University of Chicago Press.
- GRUGEL, J. y P. Riggirozzi. 2012. "Posneoliberalism in Latin America: rebuilding and reclaiming the state after crisis". *Development and Change* 43, núm. 1: 1-21.

- Grupo ETC. 2015. *Blocking the chain. Biosafety Clearing-House*. <https://bch.cbd.int>.
- GUDYNAS, E. 2008. "The New Bonfire of Vanities: Soybean cultivation and globalization in South America". *Development* 51, núm. 4: 512-518.
- GUDYNAS, E. 2009. "Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual". En *Extractivismo, Política y Sociedad*. Quito: CAAP.
- GUDYNAS, E. 2010. "Agropecuaria y nuevo extractivismo bajo los gobiernos progresistas de América del Sur". *Territorios* 5: 37-54.
- GUDYNAS, E. 2011a. "La izquierda de los límites al nuevo extractivismo". *Diario La Primera*, 11 de mayo. http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/la-izquierda-de-los-limites-al-nuevo-extractivismo_85841.html.
- GUDYNAS, E. 2011b. "Más allá del nuevo extractivismo: transiciones sostenibles y alternativas al desarrollo". En *El desarrollo en cuestión. Reflexiones desde América Latina*, coordinado por F. Wanderley, 379-410. La Paz: CIDES.
- GUDYNAS, E. 2013. "Transitions to Post-Extractivism: Directions, Options, Areas of Action". En *Beyond development: Alternative visions from Latin America*, 165-188. Amsterdam: Transnational Institute.
- GUDYNAS, E. 2014a. *Derechos de la naturaleza. Ética biocéntrica y políticas ambientales*. Lima: PDTG-RedGE-CooperAcción-CLAES.
- GUDYNAS, E. 2014b. "El postdesarrollo como crítica y el Buen Vivir como alternativa". En *Buena Vida, Buen Vivir: imaginarios alternativos para el bien común de la humanidad*, coordinado por G. C. Delgado, 61-95. Ciudad de México: UNAM, CEIICH.
- GUDYNAS, E. 2015. *Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la Naturaleza*. Cochabamba: Centro de Documentación e Información Bolivia-Centro Latinoamericano de Ecología Social.
- GUDYNAS, E. 2016. "Natural Resource Nationalisms and the Compensatory State in Progressive South America". En *The Political Economy of Natural Resources and Development*, coordinado por P. Haslam y P. Heidrich, 102-117. Londres: Routledge.

- GUDYNAS, E. 2017. "Extractivisms: Concepts, Local Impacts and Spill-Effects". En *Alternative Development Models: Latin American Results and Prospects*, editado por R. Munck y H. Veltmeyer. Londres: Routledge.
- GUDYNAS, E. 2020. *Extractivisms: Politics, Economics and Ecology*. Black Point: Fernwood Publications.
- GUDYNAS, E. y A. Acosta. 2011. "El buen vivir más allá del desarrollo". *Revista Qué Hacer*, núm. 181: 70-81.
- HARVEY, D. 2007. *Breve historia del neoliberalismo*. Madrid: Akal.
- HARVEY, D. 2014. *Seventeen Contradictions and the end of Capitalism*. Londres: Profile Books.
- HERRERA, S. G. 2017. "Ecuador: recambios en la 'Revolución ciudadana' y continuidad conservadora". *Sin Permiso*. <https://bit.ly/36BV1Wp>.
- HERRERA, S., C. Molina y V. H. Torres, coords. 2020. *Ecuador. Debates, balances y desafíos post-progresistas*. Quito: IEE-Ciespal-Abya Yala.
- HOLLENDER, R. 2015. "Post-Growth in the Global South: The Emergence of Alternatives to Development in Latin America". *Socialism and Democracy* 1, núm. 29.
- HOLLENDER, R. 2016. "Capitalizing on Public Discourse in Bolivia—Evo Morales and Twenty-first Century Capitalism". *Consilience: The Journal of Sustainable Development* 15, núm. 1: 50-76.
- IAASTD. 2009. *Agriculture at a Crossroads. International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development, Sub-Saharan Africa (SSA) Report*. http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/Investment/Agriculture_at_a_Crossroads_Global_Report_IAASTD.pdf.
- INFANTE, R. B. y O. Sunkel. 2009. "Chile: Hacia un desarrollo inclusivo". *Revista Cepal* 10, núm. 97: 135-154.
- IOM. 2020. *World Migration Report 2020*. Geneva: IOM.
- IQBAL, Y. 2020. "Extractivism and Exploitation in Peru". *The Bullet*. <https://socialistproject.ca/2020/08/extractivism-and-exploitation-in-peru>.
- ISAKSON, S. R. 2014. "Food and Finance: the financial transformation of agro-food supply chains". *Journal of Peasant Studies* 41, núm. 5: 749-775.
- KATZ, C. 2015. *Neoliberalismo, neodesarrollismo, socialismo*. Buenos Aires: Batalla de ideas.

- KATZ, C. 2019. "Neoliberales en América Latina". En *Neodesarrollismo y socialismo bolivariano modelos de desarrollo y políticas públicas en América Latina*, coordinado por P. Vidal, 52-103. Buenos Aires: Clacso.
- KESSLER, G. comp. 2016. *La sociedad Argentina hoy. Radiografía de una nueva estructura*. Buenos Aires: Siglo XXI-OSDE.
- KLOPPENBURG, J. 2004. *First the Seed: The Political Economy of Plant Biotechnology*. Madison: University of Wisconsin Press.
- KONINGS, M., coord. 2010. *Beyond the Subprime Headlines: Critical Perspectives on the Financial Crisis*. Londres: Verso.
- KOTHARI, A. et al. 2019. *Pluriverse: A Post-Development Dictionary*. New Delhi: Tulika Books.
- KOZAK, R. 2012. "Peru's Humala supports Minas Conga: opposition remains strong". *Dow Jones Newswires*, julio.
- KUYEK, D. 2007. "Sowing the Seeds of Corporate Agriculture: The Rise of Canada's Third Seed Regime". *Studies in Political Economy* 80, núm. 80: 31-54.
- LANDA, Y. 2017. "Renta extractiva y la minería del cobre en el Perú". *Problemas del Desarrollo* 189, núm. 48: 141-146.
- LANDER, E. 2014. *El (Neo)Extractivismo y el futuro de la democracia en América Latina: diagnóstico y retos*. Berlín: Heinrich Boll Stiftung.
- LANDER, E. 2019. *Crisis civilizatoria. Experiencias de los gobiernos progresistas y debates en la izquierda latinoamericana*. Guadalajara: Editorial Universidad de Guadalajara-CALAS.
- LASERNA, R. 2011. *La trampa rentista y cómo salir de ella*. La Paz: Fundación Milenio.
- LASERNA, R. 2020. "Falling in the Rentier Trap: or how Evo Morales is missing an opportunity". *Harvard Review of Latin America*: 37-39.
- LAZOS, E., coord. 2020. *Retos latinoamericanos en la lucha por los comunes: historias a compartir*. Buenos Aires: Clacso.
- LEIVA, F. 2008. *Latin American Neostructuralism: The Contradictions of Post-neoliberal Development*. Mineápolis: University of Minnesota Press.
- LI, T. M. 2009. "To Make Live or Let Die? Rural Dispossession and the Protection of Surplus Populations". *Antipode* 41, núm. S1: 66-93.

- LIBENTHAL, A., R. Michelitsch y E. Tarazona. 2005. *Extractive Industries and Sustainable Development: An Evaluation of World Bank Group Experience*. World Bank Group Open Knowledge Repository.
- LIPIETZ, A. 1987. *Mirages and Miracles: The Crisis of Global Fordism*. Londres: Verso.
- LÓPEZ, F. 2012. "Detener el saqueo minero en México". *La Jornada*, 28 de febrero. <http://www.jornada.unam.mx/2012/02/28/opinion/023a1pol>.
- LÓPEZ, F. y M. M. Eslava. 2011. *El mineral o la vida. La legislación minera en México*. México: Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos indígenas-Pez en el Árbol-Red Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indios de México.
- LUST, J. 2015. "Perú: capital extractiva y la resistencia social". En *El neoextractivismo: ¿un modelo posneoliberal de desarrollo o el imperialismo del siglo XXI?*, H. Veltmeyer y J. Petras. México: Editorial Crítica-Ediciones Culturales Paidós.
- LUSTIG, N., L. F. López y E. Ortiz. 2013. "Declining Inequality in Latin America in the 2000s: the cases of Argentina, Brazil, and Mexico". *World Development*, núm. 44: 129-141.
- MACHADO, D. y R. Zibechi. 2016. *Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo*. Bogotá: Ediciones Desde Abajo.
- MARINI, R. M. 1973. *Dialéctica de la Dependencia*. Ciudad de México: Ediciones Era.
- MARTÍNEZ, J. 2002. *El ecologismo de los pobres. Un estudio de conflictos ecológicos y valoración*. Cheltenham-Northampton: Edward.
- MARTÍNEZ, M. E. y P. Rosset. 2008. "La Vía Campesina: Transnationalizing Peasant Struggle and Hope". En *Latin American Social Movements in the Twenty-first Century: Resistance, Power, and Democracy*, coordinado por R. Stahler-Sholk, H. E. Vanden y G. D. Kuecker, 307-322 Lanham: Rowman & Littlefield.
- MARTÍNEZ, M. E. y P. Rosset. 2010. "La Vía Campesina: The Birth and Evolution of a Transnational Social Movement". *Journal of Peasant Studies* 37, núm. 1: 149-175.
- MAYORAL, M. J. 2011. "Depredación en tierras amazónicas". *Contralínea* 224, marzo. <https://contralinea.com.mx/contralinea-224>.

- MAYBURY, D. 2002. *Genocide against Indigenous peoples. Annihilating Difference. The Anthropology of Genocide*. Berkeley: University of California Press.
- MCKAY, B. M. 2018. "Control Grabbing and Value-Chain Agriculture: BRICS, MICS and Bolivia's Soy Complex". *Globalizations* 15, núm. 1: 74-91.
- MCKAY, B. *et al.* 2016. "The Political Economy of Sugarcane Flexing: initial insights from Brazil, Southern Africa and Cambodia". *The Journal of Peasant Studies* 43, núm. 1: 195-223.
- MEFP. 2011. "El nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo". *Economía Plural* 1, núm. 1: 1-14.
- MILANOVIC, B. y S. Yitzhaki. 2002. "Decomposing World Income Distribution: Does the World Have a Middle Class?". *Review of Income and Wealth, International Association for Research in Income and Wealth* 48, núm. 2: 155-178, junio.
- MOORE, J. W. 2016. *Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism*. Oakland: PM Press.
- MOORE, J. W. 2017. "The Capitalocene, Part I: on the nature and origins of our ecological crisis". *Journal of Peasant Studies* 44, núm. 3: 594-630.
- MORALES, E. 2013. "La hoja de coca, una bandera de lucha". *Punto Final*.
- MURMIS, M. y M. Murmis. 2012. "Land Concentration and Foreign Land Ownership in Argentina in the Context of Global Land Grabbing". *Canadian Journal of Development Studies* 33: 490-508.
- NOVO, A. *et al.* 2010. "Biofuel, Dairy Production and Beef in Brazil: Competing Claims on Land Use in São Paulo State". *Journal of Peasant Studies* 37, núm. 4: 769-792.
- OCMAL. 2018. *Conflictos mineros en América Latina: Extracción, saqueo y agresión*. <https://www.ocmal.org>.
- OLVERA, D. 2020. "México. Los dueños del país, son además dueños del agua: Kimberly, Femsa, Azteca, Bachoco, Herdez, minas". *Resumen Latinoamericano*.
- OTERO, G. 1999. *¿Adiós al campesinado? Formación de clase política en México rural*. Boulder-Oxford: Westview Press.
- OXFAM. 2018. *Richest 1 percent bagged 82 percent of wealth created last year: poorest half of humanity got nothing*. <https://www.oxfam.org/en/press->

- room/pressreleases/2018-01-22/richest-1-percent-bagged-82-percent-wealth-created-last-year.
- OXFAM. 2020. *Oxfam Annual Report 2019-2020*. <https://www.oxfam.ca> › annual-report-2020.
- PANFICHI, A. y O. Coronel. 2014. “Régimen político y conflicto social en el Perú, 1968-2011”. En *Conflicto social en los Andes. Protestas en el Perú y Bolivia*, coordinado por N. Henríquez. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- PARRA, A. 2016. “¿Por qué pensar un giro decolonial en el análisis de los conflictos socioambientales en América Latina?”. En *Decolonization and Knowledge Inequalities*, 15-20. https://www.researchgate.net/publication/334290005_Decolonization_and_Knowledge_Inequalities_Towards_a_pluriversity_of_approaches_including_participatory_research.
- PEREYRA, M. G. 2017. “Política exterior y modelos de desarrollo. Argentina y Brasil en perspectiva comparada (1930-2010)”. *Apuntes* 44, núm. 80: 159-185.
- PETRAS, J. y H. Veltmeyer. 2001. *Globalization Unmasked: Imperialism in the 21st Century*. Londres: Zed Books.
- PETRAS, J. y H. Veltmeyer. 2005. *Movimientos sociales y poder estatal*. Buenos Aires: Editorial Lumen.
- PETRAS, J. y H. Veltmeyer. 2011. *Social Movements in Latin America: Neoliberalism and Popular Resistance*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- PETRAS, J. y H. Veltmeyer. 2014. *Imperialismo extractivista en las Américas*. Leiden: Brill Books.
- PIKETTY, T. 2014. *Capital in the Twenty-First Century*. Cambridge: Harvard University Press.
- PNUMA. 2010. *PNUMA Anuario 2010*. Nairobi: PNUMA.
- PNUMA, UNU e IHDP. 2012. *Informe de riqueza inclusiva: Medición de progresos hacia la sostenibilidad*. Cambridge: Cambridge University Press.
- RAMÍREZ, R. 2010. “Socialismo del sumak kawsay o biosocialismo republicano”. En *Los nuevos retos de América Latina. Socialismo y sumak kawsay*, 55-74. Quito: Senplades.
- RAPLEY, J. 1996. *Understanding Development: Theory and Practice in the Third World*. Boulder: Routledge.

- RESINA, J. 2012. *La plurinacionalidad en disputa: el pulso entre Correa y la Conaie*. Quito: Abya-Yala.
- RIOFRANCO, T. 2017. "Extractivismo Unearthed: A Genealogy of a Radical Discourse". *Cultural Studies* 31, núms. 2-3: 277-306.
- RODRÍGUEZ, P. y D. Carruthers. 2008. "Testing Democracy's Promise: Indigenous Mobilization and the Chilean State". *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, núm. 87: 3-21: <http://www.erlacs.org/articles/abstract/10.18352/erlacs.9616>.
- ROBLES, W. y H. Veltmeyer. 2015. *The Politics of Agrarian Reform in Brazil: The Landless Rural Workers Movement*. Basingstoke-Nueva York: Palgrave Macmillan.
- RODRIK, D. 2016. "Premature Deindustrialization". *Journal of Economic Growth* 21, núm. 1: 1-33.
- RUBIO, A. 2004. "Perspectivas teóricas en el estudio de los movimientos sociales". *Circunstancia*, núm. 3.
- SACHER, W. 2017. *Ofensiva megaminera china en Los Andes. Acumulación por desposesión en el Ecuador de la Revolución Ciudadana*. Quito: Abya Yala.
- SAINT, M. 2008. *El sueño de Bolívar. El desafío de las izquierdas sudamericanas*. Barcelona: Paidós.
- SAMPAIO, P. 2012. "Desenvolvimentismo e neodesenvolvimentismo: tragédia e farsa". *Serviço Social e Sociedade*, núm. 112: 672-688.
- SARDAN, S. 2017. *Extractivismo en Bolivia en el periodo 2000-2014: ¿Qué tan agudo es el caso?* La Paz: Friedrich Ebert Stiftung Bolivia.
- SARIEGO, J. L., L. Reygadas, M. A. Gómez y J. Farrera. 1988. *El Estado y la minería mexicana. Política, trabajo y sociedad durante el siglo xx*. México: Fondo de Cultura Económica.
- SCOTT, J. 1987. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. Connecticut: Yale University Press.
- Secretaría de Economía. 2011. *Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, Ampliada 2010*. México: Coordinación General de Minería.
- SENA y FOBOMADE. 2005. "Se intensifica el extractivismo minero en América Latina". En *Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo*. <http://fo-bomade.org.bo/art-1109>.

- SOLANAS, F. 2007. "El despojo de los metales argentinos (Parte III)". *Argenpress*: 1-2. <http://www.argenpress.info/notaprint.asp?num=044436andparte=3>.
- SOTELO, A. 2009. "Neo-imperialismo, dependencia e novas periferias". En *América Latina e os desafios da globalização*. Río de Janeiro: Boitempo.
- SOMUANO, F. 2007. "Movimientos sociales y partidos políticos en América Latina: una relación cambiante y compleja". *Política y Cultura*, núm 27: 31-53.
- SVAMPA, M. 2013. "Consensus de los commodities y lenguajes de valoración en América Latina". *Nueva Sociedad*, núm. 244, marzo-abril.
- SVAMPA, M. 2015. "Commodities Consensus: Neoextractivism and Enclosure of the Commons in Latin America". *The South Atlantic Quarterly* 114, núm. 1: 65-82.
- SVAMPA, M. 2016. *Debates latinoamericanos. Indianismo, desarrollo, dependencia y populismo*. Buenos Aires: Edhasa.
- SVAMPA, M. 2019. *Las fronteras del neoextractivismo en América Latina*. Guadalajara: Editorial Universidad de Guadalajara-CALAS.
- SVAMPA, M. y E. Viale. 2014. *Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo*. Buenos Aires: Katz.
- SVAMPA, M. y E. Viale. 2020. *El colapso ecológico ya llegó: una brújula para salir del (mal)desarrollo*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- SVAMPA, M. y M. Antonelli. 2009. *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*. Buenos Aires: Editorial Biblos.
- TETREAUULT, D. 2013. "Los mecanismos del imperialismo canadiense en el sector minero de América Latina". *Estudios Críticos del Desarrollo* 3, núm. 4: 191-215.
- TETREAUULT, D. 2015. "Mexico: The Political Ecology of Mining". En *El neoextractivismo: ¿un modelo posneoliberal de desarrollo o el imperialismo del siglo XXI?*, compilado por H. Veltmeyer y J. Petras. México: Editorial Crítica-Ediciones Culturales Paidós.
- TETREAUULT, D. 2020. "Extractive Policies in Mexico at the Outset of López Obrador's Presidency". En *Latin American Extractivism: Dependency, Resource Nationalism, and Resistance in Broad Perspective*, editado por S. Ellner. Maryland: Rowman and Littlefield.
- TEUBAL, M. y T. Palmasino. 2012b. "Procesos rentísticos y el extractivismo en América Latina". En *V Jornada de Economía Crítica: La crisis global como*

- crisis del pensamiento económico*. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Economías.
- TILZEY, M. 2020. "Capitalism, Imperialism, Nationalism: Agrarian Dynamics and Resistance as Radical Food Sovereignty". *Canadian Journal of Development Studies* 41, núm. 3:1-18.
- TOLEDO, V. y N. Barrera. 2008. *La memoria biocultural: la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales*. Barcelona: Icaria.
- TOLEDO, V., D. Garrido y N. Barrera. 2013. "Conflictos socio-ambientales, resistencias ciudadanas y violencia neo-liberal en México". *Ecología Política* 46: 115-124.
- UNCTAD. 2007. *World Investment Report: Transnational Corporations, Extractive Industries and Development*. Nueva York-Ginebra: UN.
- URÍAS, H. 1980. "¿Quién controla la minería mexicana?". *Comercio Exterior* 30: 949-965.
- VADELL, J., B. Lamas y D. Ribeiro. 2009. "Integração e desenvolvimento no mercosul: divergências e convergências na políticas económicas en los gobiernos de Lula y Kirchner". *Revista de Sociología y Política* 17, núm. 33: 39-54.
- VALENCIA, E. 2013. "CCTS as Social Policy: A Critical Assessment." En *Poverty and Development in Latin America: Public Policies and Development Pathways*, coordinado por H. Veltmeyer y D. Tetreault. Boulder: Kumarian Press.
- VEGA, S. 2019. *Las economías solidaria y comunitaria en Ecuador y Bolivia: una apuesta fallida*. Quito: Flacso Ecuador-Abya-Yala.
- VELTMEYER, H. 1997. "New Social Movements in Latin America: the Dynamics of Class and Identity". *The Journal of Peasant Studies*, núm. 25.
- VELTMEYER, H. 2005. "The Dynamics of Land Occupation in Latin America". En *Reclaiming the Land: The Resurgence of Rural Movements in Africa, Asia, and Latin America*, coordinado por S. Moyo y P. Yeros. Londres: Zed Books.
- VELTMEYER, H. 2012. "The Natural Resource Dynamics of Postneoliberalism in Latin America: New Developmentalism or Extractivist Imperialism?". *Studies in Political Economy* 90: 57-86.
- VELTMEYER, H. 2013. "The Political Economy of Natural Resource Extraction: A New Model or Extractive Imperialism?". *Canadian Journal of Development Studies* 34, núm. 1: 79-95.

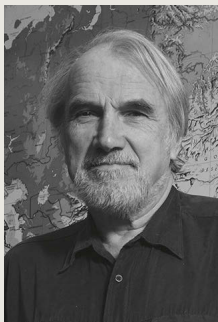
- VELTMEYER, H. y J. Petras. 2015. *El neoextractivismo: ¿un modelo posneoliberal de desarrollo o el imperialismo del siglo XXI?* México: Editorial Crítica-Ediciones Culturales Paidós.
- VERGARA, L. 2014. *Land and Freedom. The MST, the Zapatistas and Peasant Alternatives to Neoliberalism*. Londres: Zed Books.
- VERGARA, L. y C. Kay. 2017. "The Agrarian Political Economy of Left-Wing Governments in Latin America: Agribusiness, peasants, and the limits of neo-developmentalism". *Journal of Agrarian Change* 17, núm. 2: 415-437.
- VERGARA, L. y C. Kay. 2018. *La cuestión agraria y los gobiernos de izquierda en América Latina: Campesinos, agronegocio y neodesarrollismo*. Buenos Aires: Clacso.
- VIDAL, P., coord. 2019. *Neodesarrollismo y socialismo bolivariano modelos de desarrollo y políticas públicas en América Latina*. Buenos Aires: Clacso.
- VIETA, M., comp. 2014. *Social and Solidarity Economy: Towards Inclusive and Sustainable Development*. Turín: ITC-ILO.
- WALLACE, R. 2020. "Capitalist agriculture and covid-19: A deadly combination". *Climate & Capitalism*. <https://climateandcapitalism.com/2020/03/11/capitalist-agriculture-and-COVID-19-a-deadly-combination>.
- WANDERLEY, F. 2017. "Entre el extractivismo y el vivir bien: experiencias y desafíos desde Bolivia". *Estudios Críticos del Desarrollo* VII, núm. 12: 211-248.
- WANDERLEY, F. 2020. "Development in Question: A Latin-American Feminist Perspective". En *The Essential Guide to Critical Development Studies*, coordinado por H. Veltmeyer y P. Bowles. Londres: Routledge.
- WANDERLEY, F., H. Vera y J. P. Benavides. 2020. "América Latina en la encrucijada del desarrollo sostenible e inclusivo: Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú al inicio del siglo XXI". *Documento de Trabajo*, núm. 2, mayo.
- WEBBER, J. 2014. "Managing Bolivian Capitalism". *Jacobin* 13: 45-55.
- WEBBER, J. 2015. "The indigenous community as a living organism: José Carlos Mariátegui, Romantic Marxism, and extractive capitalism in the Andes". *Theory and Society* 44: 575-598.

WEBBER, J. 2020. "Choosing Between Life and Capital in Latin America". *The Bulletin*. [https://socialistproject.ca/2020/05/choosing-between-life-and-capital-in-latin-america/# more](https://socialistproject.ca/2020/05/choosing-between-life-and-capital-in-latin-america/#more).

ZERMEÑO, S. 2010. *Reconstruir a México en el siglo XXI: estrategias para mejorar la calidad de vida y enfrentar la destrucción del medio ambiente*. Mexico: Océano.

AUTOR

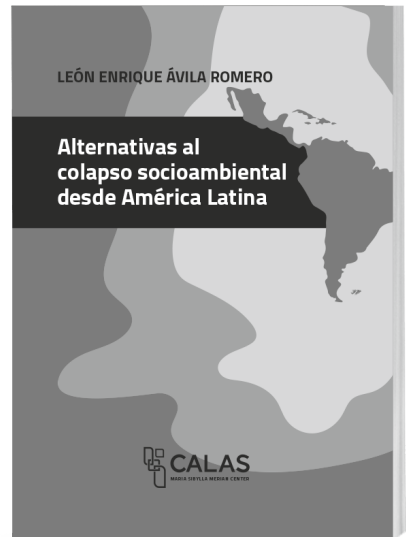
162




Henry Veltmeyer

Es profesor-investigador en la Universidad Autónoma de Zacatecas, México, y profesor emérito de Estudios Internacionales de Desarrollo en Saint Mary's University, Canadá, con un interés especializado en el desarrollo de América Latina. Además de contar con la distinción de senior research fellow con CALAS-Guadalajara, es copresidente de la red de Estudios Críticos de Desarrollo (CDS) y coeditor de la serie de libros *Estudios Críticos de Desarrollo* con Routledge (Inglaterra). Es autor y editor de más de 60 libros sobre América Latina y la economía política del desarrollo internacional, incluyendo *Poverty and Development in Latin America: Public Policies and Development Pathways* (2013), *Human Development: Lessons from the Cuban Revolution* (2014), *Nuevo Extractivismo en América Latina* (2015), *Class Struggle in Latin America: Making History Today* (2018) y *Guía esencial para los estudios críticos del desarrollo* (2019); es coeditor de *Buen Vivir and Challenges to Capitalism in Latin America* (2020). Su publicación más reciente, como coeditor de 43 ensayos de autores de varias partes del mundo, es *The Essential Guide to Critical Development Studies* (2021).

OTROS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN





**América Latina en la vorágine de la crisis.
Extractivismos y alternativas**

Coordinación editorial

Iliana Ávalos González

Jefatura de diseño

Paola Vázquez Murillo

Cuidado editorial

Mariana Hernández Alvarado

Diseño de la colección

Paola Vázquez Murillo

Pablo Ontiveros

Diagramación

María del Carmen Murillo